

Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C.

De: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
Enviado el: viernes, 2 de junio de 2023 12:03 p. m.
Para: Juzgado 33 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C.
CC: juridica
Asunto: RV: CONTESTACION DEMANDA DEFENSORIA DEL PUEBLO RADICADO 110013336033-20220032900-DEMANDANTE JOHANA CARDENAS HURTADO
Datos adjuntos: PODER (29).pdf; CONTESTACION DEMANDA.pdf; ALERTA TEMPRANA 002- 2014.pdf; Alerta Temprana 085-18.pdf; NOTA DE SEGUIMIENTO 027 DE 2015.pdf; ACTOS ACREDITACION EDGAR GOMEZ RAMOS.pdf; ACTA DE POSESIÓN 2020-49 NILETH MARTÍNEZ ANDRADE (2).pdf; MANUAL DE FUNCIONES NILETH MARTINEZ (1) (1).pdf; RESOLUCION NOMBRAMIENTO NILETH MARTINEZ A.pdf

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

**Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN**

RL

De: juridica <juridica@defensoria.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 10:42
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; baguillon@procuraduria.gov.co <baguillon@procuraduria.gov.co>; Luis Alberto Bustos Perdomo <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>; DECUN NOTIFICACION <decun.notificacion@policia.gov.co>; //deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co/ <IMCEAHTTP-__deajnotif+40deaj+2Eramajudicial+2Egov+2Eco_@namprd06.prod.outlook.com>; johana.hurtado553@gmail.com <johana.hurtado553@gmail.com>; notificaciones <notificaciones@legallgroup.com.co>
Cc: Nileth Martinez <nilmartinez@defensoria.gov.co>; asuntosjuridica@defensoria.gov.co <asuntosjuridica@defensoria.gov.co>
Asunto: Rv: CONTESTACION DEMANDA DEFENSORIA DEL PUEBLO RADICADO 110013336033-20220032900-DEMANDANTE JOHANA CARDENAS HURTADO

viernes, 2 de junio de 2023

Doctora:

Lidia Yolanda Santafe Alfonso

Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Sección Tercera

Radicado: 110013336033-20220032900

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Johana Cárdenas Hurtado y Otros.

Accionado: La Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Otros.

NILETH MARTINEZ ANDRADE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.716.069 de Valledupar, abogada en ejercicio, portador de la T.P. 157.895 del C.S. de la J, actuando en mi condición de Profesional Especializado Grado 19 de la Defensoría del Pueblo, de conformidad al poder y los anexos que se allegan a su despacho y, con base solicitó reconocer personería jurídica, dentro del término legalmente establecido, me permito remitir la contestación de la demanda de **REPARACIÓN DIRECTA** de la referencia.

Así mismo me permito adjuntar los siguientes anexos en archivos PDF

1. Poder
2. Actos de acreditación
3. Contestación Demanda PDF
4. Anexos enunciados en la Contestación.

Cordialmente

NILETH MARTINEZ ANDRADE

Oficina Jurídica

Defensoría del Pueblo

Calle 55 No. 10-32

Teléfono 3144000 ext. 2308/2544



viernes, 2 de junio de 2023

Doctora:

Lidia Yolanda Santafe Alfonso

Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Sección Tercera

Radicado: 110013336033-20220032900

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Johana Cárdenas Hurtado y Otros.

Accionado: La Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Otros.

NILETH MARTINEZ ANDRADE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.716.069 de Valledupar, abogada en ejercicio, portador de la T.P. 157.895 del C.S. de la J, actuando en mi condición de Profesional Especializado Grado 19 de la Defensoría del Pueblo, de conformidad al poder y los anexos que se allegan a su despacho y, con base solicitó reconocer personería jurídica, dentro del término legalmente establecido, me permito contestar la demanda de **REPARACIÓN DIRECTA** de la referencia, en los siguientes términos:

I. FRENTE A LA FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA QUE SUSTENTAN LA DEMANDA

En relación a la fundamentación fáctica y jurídica que sustentan la demanda, me permito hacer las siguientes precisiones, siguiendo la misma numeración utilizada por los demandantes para mayor facilidad en la identificación de cada supuesto, en los siguientes términos:

- 2.2.1 Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.2. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.3. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.4. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.5. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.6. Cierto.
- 2.2.7. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.8. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.9. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.10. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.11. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.12. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.13. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.14. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.15. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.16. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.17. Cierto.
- 2.2.18. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.19. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.20. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.





- 2.2.21. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.22. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.23. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.24. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.25. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.26. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.27-2.2.29. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.30. Cierto
- 2.2.31-2.2.40. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.41. No me consta. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- 2.2.42. No es un hecho. Son apreciaciones subjetivas de la parte demandante.
- 2.2.43-2.2.44. Cierto
- 2.2.45. No es un hecho. Son apreciaciones subjetivas de la parte demandante

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

La Defensoría del Pueblo **SE OPONE** a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas en el libelo de la demanda, por cuanto el hecho dañoso alegado y los perjuicios derivados de este, no le son imputables a la entidad que represento.

PRIMERA. - No hay lugar a declarar administrativa y solidariamente responsable a la Defensoría del Pueblo de los perjuicios materiales e inmateriales irrogados por los demandantes con ocasión a la muerte del menor Leider Cárdenas Hurtado, el pasado 11 de agosto de 2020, en la zona rural del barrio Llano Verde (Santiago de Cali), por cuanto no se encuentra probada la falla en el servicio por parte de este Ministerio.

Así las cosas, conforme al aforismo jurídico lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en tal sentido, ante el fracaso de la primera pretensión se derriba la posibilidad de imponer condena por los conceptos y valores reclamados en las demás pretensiones a favor de todos y cada uno de los demandantes.

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS PREVIOS

Se afirma en el libelo de la demanda que la Defensoría del Pueblo, incumplió con el deber legal y jurídico de evitar el resultado dañoso del fallecimiento del menor Leider Cárdenas Hurtado, quien fue asesinado en la zona rural del barrio Llano Verde (Santiago de Cali). Dicha conducta omisiva, configura una falla del servicio frente al incumplimiento de sus funciones, en especial el de preservar la vida en virtud al artículo 2 de la Constitución Política.

Para controvertir los argumentos que anteceden, sea lo primero advertir que de acuerdo a lo establecido en el artículo 282 de la C.P. en concordancia con el artículo 2° del Dcto. 025 de 2014, corresponde a la Defensoría del Pueblo impulsar la efectividad de los Derechos Humanos mediante las siguientes acciones integradas: *promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario;*



atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley

En el marco de las competencias anotadas, tal como lo afirman los demandantes, la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos DIH- Sistema de Alertas Tempranas-SAT-, elaboró la Alerta Temprana No 002 -14 de fecha 04 de febrero de 2014, en la cual se estableció lo siguiente:

“1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO.

Santiago de Cali es la ciudad más importante del suroccidente colombiano y es epicentro de la costa pacífica. La ciudad ha sido escenario de factores de violencia ligados al conflicto armado interno como la presencia de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, la influencia de estructuras armadas postdesmovilización de las AUC y el incremento de grupos delictivos que son cooptados por los grupos armados ilegales, situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y afectación sobre la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente vulnerables donde se concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de víctimas de la violencia (bien sea afrodescendientes, indígenas o campesinos provenientes de otras zonas del suroccidente del país como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo).

Durante los dos últimos años la disputa que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por lograr la hegemonía en el control territorial y poblacional en varias regiones del país también se ha manifestado con crudeza en Cali, donde se enfrentan por diversos intereses como: la obtención de recursos mediante actividades criminales como la extorsión y la micro extorsión; el dominio y control de zonas para el narcomenudeo; el abastecimiento de insumos para la producción y procesamiento de narcóticos; el control de rutas del narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando, entre otros. Todo ello para la implantación de enclaves criminales en las comunas donde el sometimiento de la población y el control territorial son ejercidos a través de la cooptación de grupos delictivos, “oficinas de cobro” (grupos sicariales) o pandillas locales, que están conformados principalmente por adolescentes y jóvenes.

Desde 2012 Los Urabeños buscan el control de esos intereses, mientras Los Rastrojos han intentado mantenerse. Bajo esa situación de riesgo, cuya expresión más clara se vive en 12 comunas de Cali, juegan un papel importante las pandillas y grupos delictivos, en su mayoría conformados por menores de edad, jóvenes y adolescentes que en un ambiente social complejo no pueden desarrollar un proyecto de vida para ellos y sus familias.

La situación es crítica en más de 30 barrios de las comunas 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, donde se presentan enfrentamientos armados en las calles entre quienes son afines a Los Rastrojos o a Los Urabeños. El establecimiento de “fronteras invisibles” como forma de dominio social y control territorial mantiene bajo temor y zozobra a sus habitantes, lo que también se relaciona con otras afectaciones en los ciudadanos como



amenazas, extorsiones, homicidios, reclutamiento y utilización ilícita y desplazamientos forzados intraurbanos.

Es permanente el riesgo que viven los niños, las niñas, las adolescentes y los jóvenes de ser utilizados o reclutados para los grupos armados ilegales. Los jóvenes y menores de edad ante la escasa posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, ven en los grupos armados ilegales, en los grupos delictivos o en las pandillas, una opción para obtener recursos de forma rápida. Además, el no pertenecer a una pandilla, en algunos de estos barrios, es un factor de riesgo en sí mismo. En ocasiones los ingresos económicos que obtienen son el resultado de ejecutar acciones criminales específicas como campaneros, transportando armas o estupefacientes, cometiendo homicidios por encargo (sicariato), el hurto a personas, vehículos o viviendas, o cobrando extorsiones.

Las autoridades locales, por ejemplo, en el Plan Municipal de Prevención1, han reconocido esta situación: “A pesar del subregistro que existe actualmente alrededor de esta problemática, nadie duda de que en Cali hay un creciente reclutamiento de personas (incluidos menores de edad) cuya finalidad es nutrir las filas de los grupos armados ilegales tanto de guerrilla como de Bacrim que operan especialmente en el suroccidente colombiano... Debe destacarse aquí también el hecho de que estos procesos de reclutamiento ocurren en contextos de pobreza y exclusión y que también tienen como destino grupos delincuenciales de distinto tipo que operan en la ciudad (oficinas de cobro; bandas de extorsión y secuestro; pandillas; organizaciones de tráfico de estupefacientes; etc.)”.

El reclutamiento y la utilización de menores de edad es una conducta que viene siendo ejecutada por Los Rastrojos y Los Urabeños, principalmente, y por otros grupos de menor rango y las pandillas, de manera particular, en las comunas 1, 13, 14, 18 y 20 y las modalidades van desde la presión para ingresar a los grupos armados, por medio de amenazas e intimidaciones directas o contra sus familias, o por medio de dádivas, promesas o el pago de sumas de dinero.

De acuerdo con las autoridades civiles y de policía, buena parte del aumento de los delitos de alto impacto en Cali (homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones) se debe a la confrontación entre grupos criminales. Los homicidios, selectivos o múltiples, en algunos casos, son cometidos mediante la modalidad de sicariato. El 08 de noviembre, en el barrio Nueva Floresta, fueron asesinadas 9 personas al interior de un bar por presuntas retaliaciones entre grupos armados ilegales.

El contexto de violencia en Cali también ha golpeado a las mujeres. De las 5 comunas con mayores niveles de homicidios, las comunas 6, 13 y 15, son las que registran casos de muertes violentas contra las mujeres, lo que constituiría situaciones de violencia de género en los que se presume la participación de presuntos integrantes de grupos armados u organizaciones delictivas.

La confrontación entre grupos armados ilegales en la ciudad ha generado desplazamientos forzados intraurbanos cuyo registro sistemático por parte de las entidades ha sido complejo. Además de las amenazas proferidas por los integrantes de los grupos armados, la implantación de las “fronteras invisibles”, las extorsiones, entre otros hechos de violencia, buena parte de los casos de desplazamiento forzado se producen por el temor de la





población de quedar en medio de los enfrentamientos y ver en riesgo la vida e integridad personal. De hecho, personas inocentes muchas veces mueren por las “balas perdidas”. Este tipo de desplazamiento es una estrategia que usan los grupos armados en los barrios para lograr su expansión y obtener el dominio territorial y poblacional.

(...)

De acuerdo con el escenario de riesgo descrito es posible que se presenten violaciones graves y masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH como: homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados intraurbanos masivos e individuales, presiones, amenazas y constreñimientos relacionados con extorsiones y microextorsiones, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta en las comunas y barrios (fronteras invisibles) y amenazas a líderes sociales, comerciantes y transportadores, enfrentamientos armados en los barrios con interposición de la población, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la utilización de artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada y secuestros”¹

La situación descrita fue puesta en conocimiento de las autoridades de quienes se requería su participación en la adopción y ejecución de medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar o controlar el riesgo de la población civil, que afectaba a los ciudadanos del área urbana del municipio de Cali. Estas recomendaciones y requerimientos fueron realizados a: Administración Municipal de Cali, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Administración Departamental Valle del Cauca, Instituto Colombiano Bienestar Familiar, UARIV, Unidad Nacional de Protección

Además de lo anterior, la mentada Delegada emitió Nota de Seguimiento No 027/15 Primera al Informe de Riesgo No 002-14 de fecha 04 de febrero de 2014, a través del cual se actualizó el riesgo diagnosticado con informe No 002 de 2014² y en la cual se dejó consignado lo siguiente:

“En el seguimiento a la situación de los derechos humanos de la ciudad de Cali, advertida en el informe de riesgo 002-14 del 04 de febrero de 2014, se ha identificado la persistencia de los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población civil, por la influencia de los grupos ilegales que se autodenominan Los Gaitanistas o Urabeños y Los Rastrojos, que mediante la cooptación de estructuras locales ejercen la violencia sobre los habitantes de los barrios de 18 comunas.

No obstante las medidas adoptadas por las autoridades civiles y la Fuerza Pública para prevenir y mitigar la vulneración de los derechos fundamentales de la población, que habita en la zona identificada en riesgo, los hechos de violencia continúan y se debe principalmente a las acciones de las bandas delincuenciales de carácter local que actúan a nombre de Los Gaitanistas/Urabeños o Los Rastrojos, que vienen causando homicidios selectivos, amenazas contra los líderes y lideresas que se oponen a sus pretensiones o denuncian sus hechos delictivos; actos de violencia sexual como ejercicio de control en los barrios y comunas; extorsiones, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas adolescentes y jóvenes, restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) y desplazamientos forzados intraurbanos.

¹ Alerta Temprana No 002/14

² Nota de Seguimiento Alerta Temprana 027-15

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C.

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814

www.defensoria.gov.co

Plantilla vigente desde: 16/12/2021



La acción de las autoridades y los presuntos acuerdos entre las agrupaciones ilegales, ha implicado un reacomodamiento de estos para evitar la persecución de las autoridades, establecer nuevas formas de ocultamiento y definir la distribución de territorios para el aprovechamiento de las rentas ilegales.

En los barrios El Vergel, Charco Azul, entre otros de la Comuna 13, donde los enfrentamientos por el control de las “fronteras invisibles” eran frecuentes, los vecinos pueden ahora movilizarse sin mayores restricciones de un barrio a otro sin temer un ataque con arma de fuego por el solo hecho de vivir en un sector diferente.

De igual manera, en los grupos ilegales se presentan reacomodamientos (ubicación en nuevos barrios y/o comunas), fusiones (agrupación de varias pandillas), recomposiciones (reclutar nuevos integrantes), y cambios de bando (grupos o individuos que estaban con Los Rastrojos y pasan a ser de Los Urabeños y viceversa). En la Comuna 5, en el barrio Brisas de Comuneros, hombres que hacen parte de “Los Haitianos” estarían presionando a adolescentes del sector para reclutarlos o utilizarlos de forma forzada para recomponerse y continuar la alianza con Los Rastrojos. Por su parte, los autodenominados Gaitanistas o Urabeños estarían haciendo lo mismo en los asentamientos Brisas del Valladito, Brisas de las Palmas y Brisas de Haití. Líderes comunitarios han manifestado que objeto de presión y amenazas para que entreguen las listas con los nombres de los menores de 14 años de edad. Estos mismos grupos continúan en estos barrios con las extorsiones contra los pequeños propietarios de negocios y viviendas, quienes deben pagar \$2.000 pesos semanales bajo una supuesta “cuota de seguridad.”

En la comuna 6 en los barrios Petecuy I y II, los operativos de la Policía Nacional permitieron la captura de varias personas sindicadas de pertenecer a la banda de “Los Buenaventureños” (adscritos a Los Gaitanistas o Urabeños), quienes permanecieron en confrontación con “Los del Humo”, “Los de la Torre” y “Los de Petecuy III (adscritos a Los Rastrojos). Con la desarticulación de “Los Buenaventureños” el espacio fue ocupado por los otros grupos, logrando el control de la zona y consecuentemente una disminución en las acciones violentas contra los habitantes. En esta misma comuna, en el barrio Floralia, el control continuaría por cuenta de grupos adscritos a Los Rastrojos.

Actualización del escenario de riesgo.

En el barrio Potrero Grande de la comuna 21, la situación de amenazas, extorsiones, tráfico de estupefacientes, despojo de viviendas, entre otras agresiones, es producto del control territorial y las disputas entre pandillas y grupos delincuenciales en los distintos sectores (el barrio se encuentra dividido en 12 sectores que comprenden calles y pasadizos). Estas confrontaciones determinan las “fronteras invisibles” en las que los habitantes de un sector no pueden pasar o cruzar, pues se exponen a las retaliaciones y a los atentados contra la vida.

El 9 de noviembre de 2015, en horas de la madrugada, se produjo un hecho violento promovido por la pandilla conocida como “Los del Punto” que causo el homicidio de la señora Deyanira Henao Dagua de 43 años y madre de 5 hijos y, además, dejó como resultado una persona herida, casas abandonadas y saqueadas, así como daños materiales en las viviendas del sector 5 de Potrero Grande, poco después que la patrulla móvil de la policía del sector abandonó la esquina del barrio.

Ese día un grupo de aproximadamente 20 jóvenes gritaron “mañana se me van todos, esto ya es nuestro empezaron a romper vidrios, a tumbar puertas y saquear las casas. Esta situación un enfrentamiento entre pandillas del sector 5 y 6. En el censo que levantó la comunidad se





estableció que 40 viviendas resultaron afectadas. En septiembre de 2015 se registró un hecho similar donde resultaron afectadas 33 casas.

Los líderes comunitarios del barrio Llano Verde han manifestado la existencia de los mismos problemas sociales y de vulnerabilidad que se presentaron durante la conformación del barrio Potrero Grande, donde se entregaron viviendas a los habitantes de distintos asentamientos subnormales sin evaluar previamente los conflictos subyacentes y la existencia de pandillas en los mismos sectores, calles y pasadizos, lo que produce permanentes situaciones de tensión que sirven a los intereses de los grupos armados ilegales que se constituyen en fuente de exacerbación de la violencia al implantar actividades ilegales como el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes, el homicidio en la modalidad de sicariato, la extorsión, entre otros.

En Llano Verde, Los Rastrojos habrían cooptado varias pandillas para ocultar elementos ilegales y resguardarse manteniendo un bajo perfil. “Los Urabeños” también estarían haciendo lo mismo en este barrio, pero sin generar enfrentamientos para evitar la acción de las autoridades. Personas que presuntamente fueron cercanas a la banda “Los Buenaventureños” que llegaron del barrio Petecuy estarían en un proceso de reagrupamiento en este lugar.

En la comuna 13, en el barrio Charco Azul, Sardi, Villa del Lago, el Pondaje, Villa Blanca, Ulpiano Lloreda y Ricardo Balcázar, los autodenominados “Los Urabeños” tienen la hegemonía en la venta de alucinógenos, el cobro de extorsiones a los comerciantes y el manejo de las redes de prostitución. De forma adyacente, imponen formas de control social y de conducta, cuando se presentan problemas de convivencia, hurtos o riñas, los habitantes acuden a ellos para resolverlos.

En los sectores de ladera en las comunas 1 y 20 entre el barrio Lleras y el sector de Tierra Blanca continúan las disputas entre los grupos como “La Estrella” y “Los Briñes”, también asociados a Los Rastrojos y Los Urabeños”

Por último, el 13 de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo, en escrito a la Ministra del Interior para la época Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2124 de 2017, remitió la Alerta Temprana de Inminencia No 085/15 para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros.

En este escrito se manifestó: “ Las comunas mencionadas presentan o comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales, Necesidades Básicas Insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales, que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, propicio para su accionar, que se valen de estas particularidades, para penetrar e imponer diversas formas de control sobre estas zonas de la ciudad de Cali, poniendo en especial situación de riesgo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes, en un alto porcentaje son población afrocolombiana; al igual que líderes sociales y gestores culturales, quienes han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas. Dentro de las comunas mencionadas, los barrios citados arriba son los que





presentan más riesgos por tener altos índices de homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento, venta y consumo de sustancias psicoactivas, riñas, la presunta presencia de grupos armados organizados y amenazas a sus habitantes. El escenario de riesgo se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencia de las FARC-EP, quienes se autodenominan: Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento. Se remite la presente Alerta Temprana de Inminencia, con el propósito de que se adopten medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, los derechos civiles y políticos y el DIH de esta población geográficamente referenciada en este documento”

Recomendaciones:

De acuerdo a la situación de riesgo indicada, se solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir los riesgos y amenazas.

- 1. A la alcaldía de Santiago de Cali y a la Gobernación del Valle, en coordinación con la Fuerza Pública, implementar medidas de protección para garantizar la vida, libertad e integridad de la población civil que se ubica en los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas y las demás acciones violentas de los grupos armados ilegales, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.*
- 2. A la policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la SIJIN, Policía Judicial y Fiscalía, fortalecer e intensificar las acciones de inteligencia que permitan la captura y judicialización de las personas responsables de la instrumentalización de los jóvenes hacia los municipios ubicados sobre la zona costera nariñense con el propósito de ser vinculados a los grupos armados ilegales que hacen presencia en esa región del país, así mismo para que ejerza control en las zonas urbanas y periféricas de las comunas 21 y 15 de la ciudad, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas y las demás acciones violentas de los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.*
- 3. A la alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle en coordinación con la policía metropolitana de Cali, la implementación de cámaras de seguridad en los barrios y zonas registradas en este documento.*
- 4. A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, implementar medidas que restrinjan el porte de armas de fuego en los barrios geográficamente descritos en este documento, fortalecer los recursos logísticos de las unidades de Policía ubicadas en esas zonas y reforzar los patrullajes en horas nocturnas, con el objetivo de hacer efectivas las restricciones al porte de armas de fuego.*
- 5. A la alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la Personería Municipal y la UNP, para que se evalúe de manera urgente la situación de los líderes comunitarios, así mismo implementar medidas efectivas*



para proteger la vida y la integridad física de la población señalada en riesgo y que estas medidas sean establecidas en consulta con las víctimas de manera individual y colectiva. Se sugiere la activación de espacios de coordinación institucional, encabezados por la alcaldía municipal en cada comuna para que se promueva de manera articulada y eficaz las medidas individuales y colectivas de protección. Se solicita, además, diseñar y aplicar medidas de protección individual y colectiva, especialmente orientadas a personas de especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad, como las comunidades afrocolombianas y desplazadas.

- 6. A la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT del Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en el presente documento.*
- 7. A la alcaldía Municipal de Cali y la personería municipal, implementar espacios de dialogo con las organizaciones de derechos humanos en las comunas descritas para identificar problemas potencialmente generadores de violación a los derechos humanos, así como requerir a las autoridades competentes la activación y concertación de medidas de protección de carácter colectivo, tendientes a neutralizar o mitigar el riesgo.*
- 8. A la consejería presidencial de derechos humanos y DIH, como secretaria técnica de la comisión Intersectorial para la Prevención del reclutamiento y utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, (CIPRUNNA) promover acciones de coordinación entre la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal y el ICBF a fin de lograr una activación y aplicación efectiva de las rutas existentes en materia de prevención temprana, urgente y en protección del reclutamiento, uso ilícito y violencia sexual contra NNA en las comunas descritas.*
- 9. Al Ministerio de Educación Nacional y al ICBF, hacer presencia en las zonas descritas y afectadas del municipio de Santiago de Cali, a fin de identificar de manera detallada las vulneraciones y los riesgos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el propósito de adoptar medidas efectivas de prevención y protección de sus derechos fundamentales*
- 10. A las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, se recomienda diseñar y ejecutar operaciones de registro y control permanente, para contrarrestar la acción violenta de los grupos armados al margen de la ley que afectan a los pobladores de las zonas descritas en amenaza en el municipio de Santiago de Cali, tendientes a garantizar los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y la libre movilidad de la población civil entre otros. Procurar en conjunto con la administración municipal, un plan desarme en las comunas afectadas.*

En el anterior orden, queda demostrado que la Defensoría del Pueblo, estuvo en todo circunscrita al cumplimiento de normas constitucionales y legales que determinan su competencia.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

Para reforzar los argumentos jurídicos previos, me permito formular las siguientes excepciones de mérito:



IV.1. El hecho dañoso respecto del cual se pretende el resarcimiento no es imputable fáctica ni jurídicamente a la Defensoría del Pueblo

De conformidad con el criterio jurisprudencial fijado por la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, para establecer si un hecho dañoso es imputable o no una autoridad estatal resulta indispensable hacer un análisis desde una esfera fáctica y una jurídica, la concreción de la primera no supone per se el deber de reparar, por cuanto para ello se requiere la presencia de la segunda.

Sobre el particular, la citada Corporación en sentencia del 15 de noviembre de 2011, Exp. 21768, sostuvo:

“(...) la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico (...)”

Al efectuar el análisis de imputación al caso sometido a estudio ante su honorable despacho, se encuentra probado que efectivamente, la Defensoría del Pueblo evidencio la situación de riesgo que viene presentando en las comunas del oriente de Cali, y estas se dieron a conocer mediante las Alertas Tempranas y Notas de Seguimiento anteriormente mencionadas, especialmente con la situación que presenta el barrio Llano Verde, relacionadas con amenaza que atentan los derechos humanos de los habitantes de la ciudad.

En este punto, viene a propósito advertir que el deber de protección de los derechos humanos que le asiste a la Entidad debe ser entendido e interpretado desde la magistratura moral y no como la obligación de custodia en sentido estricto que se encuentra en cabeza de otras autoridades que cuentan con la capacidad institucional y operacional para su cumplimiento.

Bajo esta órbita, la falta o falla en la prestación del servicio que pretende imputarle la parte demandante a la Defensoría del Pueblo, por la presunta omisión del deber de protección y seguridad, no procede, en virtud, a que por mandato constitucional y legal, no es a ésta entidad a quien le corresponde brindar seguridad a la sociedad civil ni de preservar el orden público en términos del poder preventivo y reactivo de la fuerza estatal, razón por la cual el daño alegado no se produjo por causa de la Defensoría del Pueblo por lo que no le es imputable en tanto no le asiste el deber correlativo de satisfacer el derecho subjetivo reclamado.

Así las cosas, si bien cierto que existe un contenido genérico obligacional en titularidad de todas las autoridades de la República, en proteger a los habitantes del territorio nacional en su vida, honra y bienes³, no es menos cierto que la

³ “Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la





función administrativa específica, estatal, tratándose de protección a personas y a los bienes, como para el presente caso, recae en la Nación por medio de cuerpos especializados de la fuerza pública.

En tal orden, se considera importante indicar que respecto de protección, vigilancia de la vida, bienes de las personas y la adopción de medidas de seguridad, entre otras, no constituye un deber jurídico de la Defensoría del Pueblo, toda vez que, ni legal ni materialmente tiene las posibilidades de prestar servicios de seguridad, vigilancia y protección de los usuarios de los servicios de la entidad, ni en el marco de la Ley 24 de 1992, del decreto 025 de 2014, ni de las Leyes 1448 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como tampoco a la luz del decreto 4912 de 2011, por el cual se organizó el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, razón suficiente para no poder predicar omisión o incumplimiento de un deber legal generador de responsabilidad frente a una institución a la que ni constitucional ni legalmente le fue asignada dicha atribución funcional.

En virtud de lo expuesto en precedencia, no existen razones de hecho ni de derecho que hagan posible imputar responsabilidad alguna a la Defensoría del Pueblo, por la muerte del menor Leider Cárdenas Hurtado y en consecuencia no se puede predicar su omisión o incumplimiento de un deber legal, generador de responsabilidad, como quiera que, no es ésta la institución a la que ni constitucional o legalmente le fue atribuida la capacidad funcional exigida por los demandantes, toda vez que, esa es labor propia, recae y está asignada a otros organismos y/o instituciones del Estado, encargados de proteger a los habitantes del territorio nacional en su vida honra y bienes.

Sobre el particular, y frente a la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Consejo de Estado - Sección Tercera -, en sentencia del 8 de marzo de 2007, dentro del expediente No. 2000-02359, siendo magistrado ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, indicó:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. “Por su parte, los artículos 6º y 121 *Ibidem*, determinan que a los particulares les está permitido todo lo que no está expresamente prohibido por la ley y, por el contrario, a los servidores públicos sólo les está permitido lo expresamente autorizado por la misma y, que ninguna autoridad del estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, es decir, que podemos afirmar que éstos artículos son la norma de competencia incorporado a la Carta, como quiera que en cada decisión el servidor siempre debe preguntarse mediante qué norma (Constitución, ley, ordenanza, acuerdo, resolución o reglamento), está específicamente mandatado o autorizado, porque su actuación en cada evento debe estar regida o sujeta a la norma jurídica, de donde se colige que la competencia es siempre de carácter legal, o sea, no puede ser del arbitrio del operador jurídico sino de la expresión del Estado de Derecho, o sea, del conjunto de normas que regulan el funcionamiento de la sociedad”. Auto interlocutorio de fecha agosto 20 de 2008. Radicación No. 162-166407-07.





cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido, se ha sostenido que la «...responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

(...)

2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente"» (Mayúsculas dentro del texto original. Subrayas fuera de él)⁴.

En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos —la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la Administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño,

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre once de mil novecientos noventa y siete; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo; Radicación número: 11764; Actor: Olimpo Arias Cedeño y otros; Demandado: La Nación- Ministerio De Obras, Intra y Distrito Especial De Bogotá. providencia reiterada por la Sección en sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 27434, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.



de otro. En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse —temporalmente hablando— de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta”.(Negrilla fuera de texto original).

IV.II. Ausencia de elementos que configuren responsabilidad a título de falla del servicio por omisión en el deber de protección a cargo de la Defensoría del Pueblo

El artículo 2º de la Constitución Política establece que constituye una misión de las autoridades de la Republica proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades.

Lo dispuesto en la norma en cita se encuentra en armonía con la función que constitucional y legalmente ha sido conferida a la Defensoría del Pueblo, esta es, la de impulsar la efectividad de los Derechos Humanos mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley.⁵

De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que las citadas obligaciones desde una dimensión constitucional, la cual ha sido acogida por el Consejo de Estado deben ser incluidas dentro de la clasificación de obligaciones de medio y no de resultado, en tal sentido en sentencia del 1º de febrero de 2016, Rad. 41001-23-31-000-2005-01497-01(48842), afirmó:

“En la dimensión constitucional, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad física, como manifestación expresa de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal y a la seguridad personal, así como de los derechos políticos [y por tanto de las libertades de expresión, reunión y asociación] no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones como una obligación de resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos fundamentales.”

⁵ Artículo 2º de Dcto. 025 de 2014

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C.

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814

www.defensoria.gov.co

Plantilla vigente desde: 16/12/2021



En ese orden de ideas, a efectos de establecer si existió el incumplimiento de un deber por parte de la Defensoría del Pueblo en su posición de garante, dicho análisis deberá efectuarse sin perder de vista que las obligaciones a ella atribuidas son de medio y respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

V.III. Inexistencia de nexo de causalidad determinante entre la actuación de la Defensoría del Pueblo y el perjuicio alegado por los demandantes.

Alegan los accionante que la Defensoría del Pueblo entre otras, es administrativamente responsable por los supuestos daños sufridos por ellos, por cuanto no cumplió el deber de evitar el resultado del fallecimiento del menor Leider Cárdenas Hurtado, consideraciones estas que se apartan de la realidad bajo el entendido de no existir nexo causal entre el actuar de mi representada, esto es la presunta conducta omisiva y el daño que se invoca.

Así, respecto al nexo causal de la conducta de la administración en relación con el daño, el H. Consejo de Estado manifestó:

“Ahora bien, considera esta Sala que, tratándose de la responsabilidad por omisión, establecido el daño, el análisis debe conducirse hacia la determinación de la causalidad y la imputabilidad, aplicando para el primer caso, obviamente, la teoría de la causalidad adecuada. En ese sentido, el problema radicaría en establecer, inicialmente, si existía la posibilidad efectiva para la entidad demandada de evitar el daño, interrumpiendo el proceso causal. y el análisis de la imputación, que será posterior, se referirá a la existencia del deber de interponerse, actuando -situación en la que la obligación de indemnizar surgirá del incumplimiento, como comportamiento ilícito-, o de un daño especial o un riesgo excepcional previamente creado, que den lugar a la responsabilidad, a pesar de la licitud de la actuación estatal.”⁶(Negritas y cursivas fuera del texto original)

En otro pronunciamiento, indicó el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

(...)

“Antes que todo debe partirse de que el elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la

⁶ Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero ponente: Alier E. Henández Enríquez Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002) Radicación: 05001-23-31-000-1993-0621-01(12789- Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C.

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814

www.defensoria.gov.co

Plantilla vigente desde: 16/12/2021



En el anterior orden, al no existir relación alguna entre los hechos denunciados en la presente demanda, y las funciones asignadas a la **DEFENSORÍA DEL PUEBLO**, (tal y como ha sido ampliamente expuesto, y se confirma con el acervo probatorio de este proceso), al no tener ésta la obligación constitucional, legal o reglamentaria de prestar servicios de seguridad y/o protección a la población civil, no existe de manera alguna, nexo o relación de causalidad entre el presunto daño y las funciones de la entidad, - de las cuales se invoca su incumplimiento -, no le es imputable responsabilidad alguna, razón suficiente para solicitar al Señor Juez declarar probadas las excepciones propuestas con respecto a mi representado y en consecuencia, eximirla de toda responsabilidad.

V. EXCEPCIÓN INNOMINADA O GENÉRICA.

En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del juez en necesario afirmar que lo fundamental no es la relación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la prueba de los mismos, por ende, si el juez encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

Por lo anterior, solicito a su señoría ordenar de oficio la práctica de las pruebas pertinentes, así como declarar oficiosamente, las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

VI. PETICIÓN

Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, comedidamente solicito a usted, que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO. - Declarar probadas las excepciones propuestas y en consecuencia absolver a la Defensoría del pueblo de todas las pretensiones formuladas en su contra.

SEGUNDO. - Condenar en costas judiciales a la parte demandante.

VII. MEDIOS DE PRUEBAS

Solicito se tenga como medios de pruebas los siguientes:

Documentales:

- Alerta Temprana No 002-14 de fecha 04 de febrero de 2014
- Nota de Seguimiento 027 de 2015
- Alerta Temprana 085 de 2018

⁷ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera *Consejero Ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ* Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil dos (2002). Radicación número: 05001-23-24-000-1993-0288-01 (13.818)



VIII. NOTIFICACIONES

Manifiesto a usted de manera atenta, que recibiré notificaciones en el correo electrónico juridica@defensoria.gov.co y/o en la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo ubicada en la calle 55 No. 10 - 32 de Bogotá D.C.

Cordialmente,

NILETH MARTINEZ ANDRADE
C.C 49.716.069 de Valledupar
T.P 157.895 del C.S de la J



Bogotá D.C,

Señores

Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Sección Tercera.

E.

S.

D.

Referencia: Poder

Medio de Control: Reparación Directa

Radicación No: 11001333603320220032900

Demandante: Johana Cárdenas Hurtado y Otros.

Demandado: Defensoría del Pueblo y Otros.

EDGAR GÓMEZ RAMOS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.916.176 de Aguachica - Cesar, y T.P. N° 39023, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., actuando en nombre y representación de la Defensoría del Pueblo en mi condición de Jefe de la Oficina Jurídica de conformidad con la Resolución No. 165 del 27 de enero de 2020, posesionado mediante Acta No. 011 del mismo mes y año, en ejercicio de la delegación de funciones otorgadas por el Defensor del Pueblo según Resolución No. 264 del 17 de febrero de 2014, manifiesto a su Despacho que confiero poder especial, amplio y suficiente a la **DRA. NILETH MARTINEZ ANDRADE**, Profesional Especializado Grado 19, adscrita a la Defensoría del Pueblo, identificada con la Cédula de Ciudadanía N.º 49.716.069, T.P. N.º 157895 del C.S.J, para que actúe en nombre y representación de la Entidad así como en defensa de sus intereses, en el medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** de la referencia, llevando a cabo todas las actuaciones procesales necesarias y pertinentes para dicho fin.

Para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, respecto a del otorgamiento del poder mediante mensaje de datos, indico que este se ha remitido del correo edgomez@defensoria.gov.co que corresponde al funcionario facultado para otorgarlo. De igual forma se indica expresamente que la dirección de los correos electrónicos en donde se recibirán las notificaciones será juridica@defensoria.gov.co y/o nilmartinez@defensoria.gov.co

La Doctora **NILETH MARTINEZ ANDRADE**, queda facultada para el presente caso de conformidad con el artículo 77 del C.G.P., en especial para transigir, conciliar -dentro del marco de lo decidido por el Comité de Conciliación de la Defensoría del Pueblo-, interponer recursos, solicitar la práctica de pruebas, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, tachar de falso y las demás facultades que tiendan al buen cumplimiento de su gestión en favor de los intereses de la Defensoría del Pueblo.

Sírvase señor Juez, reconocer personería adjetiva a la Doctora **NILETH MARTINEZ ANDRADE**

Atentamente,

Acepto,

EDGAR GÓMEZ RAMOS

18.916.176 de Aguachica - Cesar

T.P. No. 39023 del C.S. de la J.

NILETH MARTINEZ ANDRADE,

CC. No. 49.716.069

T.P. No. 157895 del C.S. de la J.



RESOLUCIÓN No.815

Por la cual se hace un nombramiento en provisionalidad.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO,

en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el numeral 26 del artículo 5º del Decreto 025 de 2014,

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar en provisionalidad a la señora **NILETH MARTINEZ ANDRADE**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 49.716.069 en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2010, GRADO 19¹, perteneciente al Nivel Profesional, adscrito a la Oficina Jurídica.


Parágrafo: El cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2010, GRADO 19, perteneciente al Nivel Profesional, adscrito a la Oficina jurídica, pertenece a la Carrera Administrativa de la Defensoría del Pueblo por lo cual, la provisión definitiva de este, se realizará mediante el respectivo concurso de méritos.

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase

Dada en Bogotá, D.C., 9 de julio de 2020


CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo


Proyectó: Yuliana M.
Revisó: Diana G.
Edger G.
Revisó: Sara M.

¹ Corresponde al número de identificación interna de la Subdirección de Gestión del Talento Humano:
Nivel: Central



ACTA DE POSESIÓN No.49

En Bogotá D.C., el 3 de agosto de 2020, compareció a través de videoconferencia¹, la señora **NILETH MARTINEZ ANDRADE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.716.069, con el fin de tomar posesión del cargo de Profesional Especializado, Código 2010, Grado 19, perteneciente al nivel profesional, adscrito a la Oficina Jurídica, para el cual fue nombrada en provisionalidad mediante Resolución No. 815 del 9 de julio de 2020 y confirmado mediante Resolución No.907 del 31 de julio de 2020.


Acto seguido, le fue recibido a la compareciente el juramento de Ley, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes y funciones que el cargo le impone.

Se firma en constancia como aparece.

La posesionada,


NILETH MARTINEZ ANDRADE

Quien posiona,


JUAN MANUEL QUIRONES PINZÓN
Secretario General

¹ Circulares No. 02, 03 y 05 de 2020.

ACTA DE POSESIÓN No. 11

En Bogotá D.C., el treinta y uno (31) de enero de 2020, compareció el señor **EDGAR GÓMEZ RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.916.176, con el fin de tomar posesión del cargo de JEFE DE OFICINA, Código 0075, Grado 23, perteneciente al nivel Directivo, adscrito a la Oficina Jurídica, cargo éste de libre nombramiento y remoción, en el cual fue reubicado mediante Resolución No. 165 del 27 de enero de 2020.

Acto seguido, le fue recibido a la compareciente el juramento de Ley, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes y funciones que el cargo le impone.

Se firma en constancia como aparece.

El posesionado,


EDGAR GÓMEZ RAMOS

Quien posiona,


JUAN MANUEL QUÍÑONES PINZÓN
Secretario General



RESOLUCIÓN No. 165

Por la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO,

en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el numeral 26 del artículo 5º del Decreto 025 de 2014, y

CONSIDERANDO

Que el señor Edgar Gómez Ramos fue nombrado en periodo de prueba, en el empleo Jefe de la Oficina Jurídica, Grado 20, perteneciente al nivel Ejecutivo, con Resolución No. 2202 del 5 de diciembre de 1997, e inscrito en carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo, con Resolución No. 657 del 28 de julio de 1998, en el citado empleo.

Que mediante los Decretos Nos. 025, 026 y 027, de 2014, se modificó la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo, su régimen de competencias interno, la organización y funcionamiento, y la supresión de funciones que no correspondían a la naturaleza de la Entidad.

Que el artículo 13 del Decreto No. 026 de 2014, estableció las equivalencias de empleos de la nomenclatura de la Defensoría del Pueblo, y es su artículo 14 otorgó a la Defensoría del Pueblo un plazo de tres (3) meses, para ajustar la planta de personal con las equivalencias allí fijadas, a través de Resolución Interna.

Que, en aplicación del citado Decreto, se expidió la Resolución No. 145 del 3 de febrero de 2014, en donde se resolvió en su artículo 1, incorporar a la planta de persona de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la nueva nomenclatura y clasificación de empleos, a varios servidores públicos, entre los que se incorporó al señor Edgar Gómez Ramos, al empleo Profesional Especializado, Grado 20, quien venía desempeñando en carrera administrativa en el empleo Jefe de la Oficina Jurídica, del Nivel Ejecutivo, Grado 20.

Que el servidor público Edgar Gómez Ramos presentó una acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Defensoría del Pueblo, en la cual solicitó la nulidad de la Resolución No. 145 del 3 de febrero de 2014, y como consecuencia de lo anterior, reubicarlo o trasladarlo al cargo de Jefe de Oficina Jurídica del nivel directivo, así como se le cancelara la diferencia salarial y prestacional entre el cargo Profesional Especializado, Grado 20 y Jefe de la Oficina Jurídica, de forma indexada. La citada acción fue resuelta en primera instancia a favor de la Defensoría del Pueblo, en donde se negaron las pretensiones de la demanda.

Que, con Sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el servidor Edgar Gómez Ramos, en contra del fallo de primera instancia proferido dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado no. 11001-33-35-016-2014-00456-02, y notificada el 6 de septiembre de 2019, ordenó:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se DISPONE: **DECLARAR** la nulidad parcial de la Resolución No. 145 de 3 de febrero de 2014 mediante la cual el Defensor del Pueblo incorporó al actor del cargo de Jefe de Oficina Jurídica al de Profesional Especializado, Código 2010, Grado 20.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, **reubicar** al señor EDGAR



Defensoría
del Pueblo
COLOMBIA

165

GÓMEZ RAMOS, en el cargo de Jefe de la Oficina Jurídica que continua en la nueva planta de personal, ubicado en el nivel directivo y **pagar** las diferencias salariales y prestacionales, existentes entre el cargo que ha venido desempeñando y el empleo al cual se está ordenando incorporar, de manera indexada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO: Las sumas a pagar por parte de la entidad demandada deberán reajustarse en los términos del artículo 187 del CPACA, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: La entidad demandada deberá cumplir esta providencia dentro del término fijado en los artículos 192 y siguientes del CPACA Y pagar los intereses moratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195-4 *ibidem*.

QUINTO: Se condena en costas de las dos instancias a la parte vencida. Líquidense en el Juzgado de Primera Instancia, teniendo en cuenta el valor de las agencia en derecho determinado en la parte motiva."

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Reubicar a partir del 31 de enero de 2020, al señor **EDGAR GÓMEZ RAMOS**, portador de la cédula de ciudadanía No. 18.916.176, del cargo Profesional Especializado, Código 2010, Grado 20, perteneciente al Nivel Profesional, adscrito al Grupo de Soporte Jurídico Institucional de la Oficina Jurídica, al cargo JEFE DE OFICINA, Código 0075, Grado 23¹, perteneciente al Nivel Directivo, adscrito a la Oficina Jurídica, cargo éste de Libre Nombramiento y Remoción.

Artículo 2. Declarar la vacancia definitiva del empleo Profesional Especializado, Código 2010, Grado 20, perteneciente al Nivel Profesional, adscrito al Grupo de Soporte Jurídico Institucional de la Oficina Jurídica.

Artículo 3. Ordenar a la Secretaría General de la Entidad adelante los trámites pertinentes para dar cumplimiento, a la Sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección "D", en cuanto a la obligación de pago establecida.

Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase

27 ENE. 2020

Dada en Bogotá, D.C.,


CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo

Proyectó: Edger Guevara
Revisó: Sara Moreno
Juan Manuel Quiñones
Fabian Paternina Martinez

¹ Corresponde al número de identificación interna de la Subdirección de Gestión del Talento Humano: 465



RESOLUCIÓN No. 264

Por medio de la cual el Defensor del Pueblo delega una de sus funciones en el Jefe de la Oficina Jurídica.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 22 del artículo 5 del Decreto-Ley 025 de 2014 y

CONSIDERANDO

Que el numeral 22 del artículo 5 del Decreto-Ley 025 de 2014 establece como una de las funciones atribuidas al Defensor del Pueblo: *"Celebrar los contratos y expedir los actos administrativos que se requieran para el funcionamiento de la Entidad, así como llevar su representación legal y judicial, para lo cual podrá otorgar los poderes o mandatos que fueren necesarios"*.

Que el párrafo primero del artículo 5 del Decreto-Ley 025 de 2014 dispone: *"El Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones, salvo la de presentar informes anuales al Congreso de la República, en el Vicedefensor, el Secretario General, los Directores Nacionales, los Defensores Delegados, los Defensores Regionales, los Personeros Municipales y los demás empleados de su dependencia del nivel directivo o asesor"*.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Jefe de la Oficina Jurídica la siguiente función:

1. Llevar la representación legal y judicial de la Entidad, para lo cual podrá otorgar los poderes o mandatos que fueren necesarios.

Artículo 2°. Derogar en todas sus partes la Resolución 081 del 22 de enero de 2014.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dada en Bogotá D.C., a los

17 FEB. 2014

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.


JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ
Defensor del Pueblo.

INFORME DE RIESGO N° 002- 14

Fecha: febrero 04 de 2014

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana	
		Comuna	Barrio
VALLE DEL CAUCA	Santiago de Cali	1	Terrón Colorado
		5	Chiminangos I y II etapa.
		6	Floralia, Petecuy I y II etapa; San Luis, San Luis II.
		10	Santa Elena
		12	El Rodeo, Nueva Floresta
		13	El Vergel; Poblado I y II; Charco Azul, El Pondaje.
		14	Manuela Beltrán; Marroquín II
		15	El Vallado; Brisas de Comuneros; Brisas de las Palmas; El Retiro; Mojica.
		16	Mariano Ramos
		18	Prados del Sur; Mario Correa Rengifo; Sector Alto de Los Chorros; Alto Nápoles
		20	Siloé; Belisario Caicedo; Brisas de Mayo; Lleras Camargo; Altos de Belén
		21	Pízamos I y II; Potrero Grande

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas

☐

Afrocolombianos

☒

Otra Población Civil

☒

Se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 250.000 personas residentes en la zona urbana del municipio de Santiago de Cali, especialmente los habitantes de algunos barrios de la Comuna 1; Comuna 5; Comuna 6; Comuna 10; Comuna 12; Comuna 13; Comuna 14; Comuna 15: El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16: Mariano Ramos; Comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto Nápoles; Comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén; Comuna 21: Pízamos I y II y Potrero Grande.

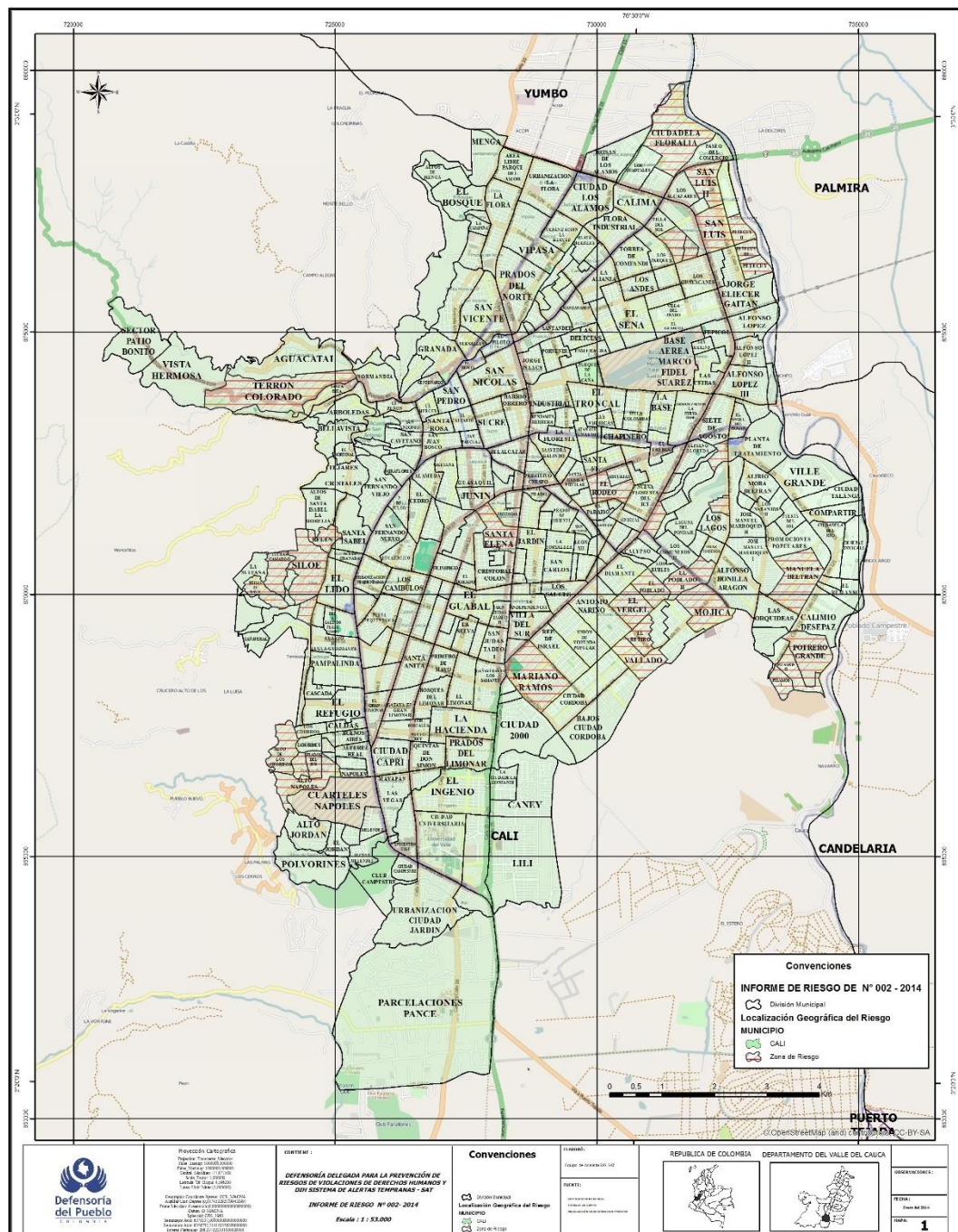
FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 2 de 26

En especial situación de riesgo se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios y comunas descritos, quienes enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad que los exponen a las acciones y pretensiones de los grupos armados ilegales.



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO.

Santiago de Cali es la ciudad más importante del suroccidente colombiano y es epicentro de la costa pacífica. La ciudad ha sido escenario de factores de violencia ligados al conflicto armado interno como la presencia de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, la influencia de estructuras armadas postdesmovilización de las AUC y el incremento de grupos delictivos que son cooptados por los grupos armados ilegales, situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y afectación sobre la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente vulnerables donde se concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de víctimas de la violencia (bien sea afrodescendientes, indígenas o campesinos provenientes de otras zonas del suroccidente del país como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo).

Durante los dos últimos años la disputa que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por lograr la hegemonía en el control territorial y poblacional en varias regiones del país también se ha manifestado con crudeza en Cali, donde se enfrentan por diversos intereses como: la obtención de recursos mediante actividades criminales como la extorsión y la micro-extorsión; el dominio y control de zonas para el narcomenudeo; el abastecimiento de insumos para la producción y procesamiento de narcóticos; el control de rutas del narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando, entre otros. Todo ello para la implantación de enclaves criminales en las comunas donde el sometimiento de la población y el control territorial son ejercidos a través de la cooptación de grupos delictivos, “oficinas de cobro” (grupos sicariales) o pandillas locales, que están conformados principalmente por adolescentes y jóvenes.

Desde 2012 Los Urabeños buscan el control de esos intereses, mientras Los Rastrojos han intentado mantenerse. Bajo esa situación de riesgo, cuya expresión más clara se vive en 12 comunas de Cali, juegan un papel importante las pandillas y grupos delictivos, en su mayoría conformados por menores de edad, jóvenes y adolescentes que en un ambiente social complejo no pueden desarrollar un proyecto de vida para ellos y sus familias.

La situación es crítica en más de 30 barrios de las comunas 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, donde se presentan enfrentamientos armados en las calles entre quienes son afines a Los Rastrojos o a Los Urabeños. El establecimiento de “fronteras invisibles” como forma de dominio social y control territorial mantiene bajo temor y zozobra a sus habitantes, lo que también se relaciona con otras afectaciones en los ciudadanos como amenazas, extorsiones, homicidios, reclutamiento y utilización ilícita y desplazamientos forzados intraurbanos.

Es permanente el riesgo que viven los niños, las niñas, las adolescentes y los jóvenes de ser utilizados o reclutados para los grupos armados ilegales. Los jóvenes y menores de edad ante la escasa posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, ven en los grupos armados ilegales, en los grupos delictivos o en las pandillas, una opción para obtener recursos de forma rápida. Además, el no

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 4 de 26

pertenecer a una pandilla, en algunos de estos barrios, es un factor de riesgo en sí mismo. En ocasiones los ingresos económicos que obtienen son el resultado de ejecutar acciones criminales específicas como campaneros, transportando armas o estupefacientes, cometiendo homicidios por encargo (sicariato), el hurto a personas, vehículos o viviendas, o cobrando extorsiones.

Las autoridades locales, por ejemplo, en el Plan Municipal de Prevención¹, han reconocido esta situación: *“A pesar del subregistro que existe actualmente alrededor de esta problemática, nadie duda de que en Cali hay un creciente reclutamiento de personas (incluidos menores de edad) cuya finalidad es nutrir las filas de los grupos armados ilegales tanto de guerrilla como de Bacrim que operan especialmente en el suroccidente colombiano... Debe destacarse aquí también el hecho de que estos procesos de reclutamiento ocurren en contextos de pobreza y exclusión y que también tienen como destino grupos delincuenciales de distinto tipo que operan en la ciudad (oficinas de cobro; bandas de extorsión y secuestro; pandillas; organizaciones de tráfico de estupefacientes; etc.)”*.

El reclutamiento y la utilización de menores de edad es una conducta que viene siendo ejecutada por Los Rastrojos y Los Urabeños, principalmente, y por otros grupos de menor rango y las pandillas, de manera particular, en las comunas 1, 13, 14, 18 y 20 y las modalidades van desde la presión para ingresar a los grupos armados, por medio de amenazas e intimidaciones directas o contra sus familias, o por medio de dádivas, promesas o el pago de sumas de dinero.

De acuerdo con las autoridades civiles y de policía, buena parte del aumento de los delitos de alto impacto en Cali (homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones) se debe a la confrontación entre grupos criminales. Los homicidios, selectivos o múltiples, en algunos casos, son cometidos mediante la modalidad de sicariato. El 08 de noviembre, en el barrio Nueva Floresta, fueron asesinadas 9 personas al interior de un bar por presuntas retaliaciones entre grupos armados ilegales.

El contexto de violencia en Cali también ha golpeado a las mujeres. De las 5 comunas con mayores niveles de homicidios, las comunas 6, 13 y 15, son las que registran casos de muertes violentas contra las mujeres, lo que constituiría situaciones de violencia de género en los que se presume la participación de presuntos integrantes de grupos armados u organizaciones delictivas.

La confrontación entre grupos armados ilegales en la ciudad ha generado desplazamientos forzados intraurbanos cuyo registro sistemático por parte de las entidades ha sido complejo. Además de las amenazas proferidas por los integrantes de los grupos armados, la implantación de las “fronteras invisibles”, las extorsiones, entre otros hechos de violencia, buena parte de los casos de desplazamiento forzado se producen por el temor de la población de quedar en medio de los enfrentamientos y ver en riesgo la vida e integridad personal. De hecho, personas inocentes muchas veces mueren por las “balas perdidas”. Este tipo de desplazamiento es una estrategia que usan los grupos armados en los barrios para lograr su expansión y obtener el dominio territorial y poblacional.

¹ Alcaldía de Cali. Asesoría de Paz. Muestra Representativa de la Población en Situación de Desplazamiento Asentada en el Municipio de Santiago de Cali. Cocol, noviembre de 2011. Pág 15.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 5 de 26

Entre las causas por las que los desplazamientos intraurbanos son invisibles a las autoridades y no son declarados o denunciados, se debe a que las personas y familias amenazadas no siempre identifican esta situación como desplazamiento forzado, pues ocurre de un lugar a otro en la misma ciudad, además hay un temor fundado de posibles retaliaciones en su contra por parte de quienes los intimidan.

En enero de 2013 se produjo el desplazamiento masivo de cerca de 20 familias en el barrio El Vergel tras la disputa entre dos grupos conocidos como “Los Calvos” y “La Tatabrera”, en el que integrantes de estos grupos desvalijaron las viviendas y robaron todo lo que había en ellas². La comunidad ante la impotencia que produjo el hecho manifestó que estarían dispuestos a armarse para enfrentarlos y defenderse. También en el mes de mayo en el barrio Brisas de Comuneros integrantes del grupo de “Los Buenaventureños” (quienes se identifican como afines a Los Urabeños en ese sector), diseminaron panfletos en los que se amenazó a los habitantes para que salieran en un plazo de 20 días o serían asesinados.

Adyacente a las anteriores problemáticas esta la imposición de “fronteras invisibles” que afectan a la población como una forma de restricción a la movilidad. Quien se atreva a pasar de un barrio a otro y sea considerado del bando contrario puede ser asesinado, también quien pretenda hacerlo y no pague el “impuesto” que imponen los grupos armados puede ser atacado de forma violenta. Ejemplo de este tipo de situaciones se presenta en los límites de los barrios El Retiro y El Vergel y entre los barrios Petecuy y Calimio.

La situación de desescolarización e inasistencia a los planteles educativos se ha incrementado pues los adolescentes deben cruzar dichas “fronteras” para llegar a los planteles educativos. Los padres de los menores de edad temen agresiones por el solo hecho de ir de un barrio a otro. Adicionalmente, programas destinados a los jóvenes por parte del ICBF también se han visto interrumpidos³ por el temor a las agresiones y retaliaciones, pues deben cruzar entre barrios para poder participar efectivamente de los programas de atención para niños y jóvenes.

Este complejo panorama ha trascendido las expresiones delincuenciales y se relaciona cada vez más con la operatividad de los grupos armados ilegales y el dominio territorial. Desde el mes de abril circularon en la ciudad panfletos amenazantes que se derivan de la disputa entre Los Rastrojos y Los Urabeños por el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores e incluso vendedores ambulantes o tiendas de barrio en los sectores más vulnerables, estos han sido propagados en discotecas del sur de la ciudad o en sectores del nororiente en los que se conmina a no pagar extorsiones a integrantes del bando contrario, poniendo en riesgo a los habitantes de estos sectores

² Comunicado de la Personería de Cali: “Personería de Cali denuncia desplazamiento intraurbano de familias en el barrio El Vergel por amenazas y enfrentamientos entre pandillas”.

³ Diario Mío. 18/11/13. Pág. 6. “Fronteras no dejan trabajar”. Pandillas y bandas delincuenciales de las comunas 13, 14, 15 y 20 en Cali, tienen en jaque el programa “Generación con Bienestar” del ICBF, por cuanto desde hace dos meses funcionarios de la entidad han visto impedido su trabajo por amenazas e intimidaciones por parte de estos grupos que ven como una amenaza el trabajo de prevención, por cuanto buscan a los niños para reclutarlos.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 6 de 26

que quedan en medio de esa disputa. En muchos casos la microextorsión es velada en cobros de “cuotas de seguridad” o para “poder trabajar”.

La ciudad ha sido impactada en algunos casos por el uso de artefactos explosivos, lo que también produce temor generalizado en la población. Las hipótesis de uso de estos artefactos han estado relacionadas con el no pago de extorsiones y con retaliaciones entre grupos armados que tienen influencia en Cali.

También han circulado panfletos que hacen referencia al inicio de una “limpieza social” en los que se amenaza a personas socialmente vulnerables y se imponen restricciones a la movilidad después de determinadas horas en la noche, particularmente en los barrios La Casona, Floralia, Petecuy, Avenida Paso Ancho, Ciudad Córdoba, El Vallado y Antonio Nariño. Testimonios de habitantes de estos barrios relacionan que algunos asesinatos cometidos pueden estar relacionados con estas amenazas de “limpieza”.

Tras la evolución de la disputa entre Los Rastrojos y Los Urabeños y la cooptación por parte de estos de los grupos delincuenciales, las afectaciones a los derechos de los habitantes de las comunas se han incrementado. De la misma manera se ve afectada la organización comunitaria, se fractura la confianza entre vecinos, se incrementan las presiones a las juntas de acción comunal y sus integrantes, se configuran “fronteras invisibles” y restricciones a la movilidad, se imponen normas de conducta, y se exagera el temor por los atentados sicariales o por la detonación de artefactos explosivos sobre quienes se oponen al pago de extorsiones.

Por su parte las Farc mantienen presencia con milicianos en algunos de estos mismos barrios, su enfoque está relacionado con el abastecimiento de otros frentes de guerra en el Valle, con un bajo perfil destinado a la obtención de recursos, al apoyo de combatientes de las zonas rurales, y a mantener viviendas para descanso o recuperación de enfermos y heridos.

En medio del ambiente de violencia el ejercicio de defensa de los derechos de los trabajadores y las reivindicaciones sociales ha sido golpeado. Las amenazas contra los líderes sindicales y los afiliados han continuado y se han materializado en asesinatos. El 27 de septiembre de 2013 fue asesinado en el barrio Simón Bolívar el señor Fernando Flórez Viveros, presidente de SINDOEPAL, cuando se encontraba en su residencia. En 2013 se denunciaron amenazas en contra de personas adscritas a sindicatos y líderes sindicales: veinte mujeres sindicalizadas recibieron amenazas de acuerdo con datos de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT.

Pese al esfuerzo realizado por la institucionalidad local, con el apoyo de la Fuerza Pública, en algunas comunas, la situación de riesgo y amenaza ha sido desbordante, por lo que se requiere un mayor esfuerzo para enfrentar el actuar de los grupos armados ilegales en la ciudad de Cali con medidas integrales que logren contribuir a encauzar la situación social que alimenta el actual ciclo de violencia.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 7 de 26

De acuerdo con el escenario de riesgo descrito es posible que se presenten violaciones graves y masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH como: homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados intraurbanos masivos e individuales, presiones, amenazas y constreñimientos relacionados con extorsiones y microextorsiones, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta en las comunas y barrios (fronteras invisibles) y amenazas a líderes sociales, comerciantes y transportadores, enfrentamientos armados en los barrios con interposición de la población, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la utilización de artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada y secuestros.

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO

FARC ☐ ELN ☐ OTRO GRUPO ARMADO ILEGAL

Los Rastrojos
Los Urabeños

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.

- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia sexual)
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS (ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos con interposición de población civil)
- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA POBLACIÓN CIVIL
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL
- RECLUTAMIENTO FORZADO Y UTILIZACIÓN ILÍCITA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS

- A LA VIDA
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL
- A NO SER DESAPARECIDO
- A LA LIBERTAD PERSONAL
- A NO SER DESPLAZADO
- AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN
- A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA
- A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
- A LA LIBRE ASOCIACIÓN.
- A NO SER CONSTREÑIDO A EJECUTAR UN TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

VALORACIÓN DEL RIESGO

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 8 de 26

Santiago de Cali se encuentra ubicada al occidente del Valle del río Cauca, al oeste limita con los Farallones de Cali y la cordillera Occidental que conecta al puerto de Buenaventura sobre el océano Pacífico, al noroccidente con los municipios de Dagua y La Cumbre, al norte con los municipios La Cumbre y Yumbo (el más industrializado del departamento), al nororiente con el municipio Palmira, al oriente con los municipios Candelaria y Puerto Tejada (municipio del Cauca), y al sur con el municipio Jamundí. A la ciudad la atraviesa vía Panamericana por lo cual es paso obligado hacia la República del Ecuador.

Según censo del DANE, la ciudad de Cali tiene una población de 2.319.655 habitantes, de los cuales 2.283.035 se encuentran asentados en 22 comunas del área urbana y 36.620 en 15 corregimientos de la zona rural. La población de Cali representa el 51,28% del total de habitantes del departamento del Valle del Cauca, de ella el 26% es afrodescendiente, mayormente asentada en las comunas 7, 12, 13, 14, 15 y 21. El 0,63% son indígenas, dispersos en las comunas 1, 3, 18, 20 y 22, que se identifican pertenecientes a los siguientes pueblos: Nasa, Yanacona, Guambiano, Pastos, Nukak, Pijaos, Muiscas, Ingas, Coconucos, Camtsa, y Awá entre otros, de ellos, las comunidades organizadas se encuentran en siete (7) cabildos indígenas: Yanaconas, Nasa, Quichua, Inga, Kofán y Guambiano⁴. Es importante tener en cuenta que de las comunas que se encuentran en situación de riesgo estas minorías están asentadas en 7 de las 12.

Así mismo, en las 12 comunas en situación de riesgo se concentran en gran medida los mayores índices de vulnerabilidad. Según el informe Cali en Cifras 2012⁵, la estratificación de dichas divisiones administrativas es la siguiente⁶: las comunas estrato uno son la 1, 14, 18, 20 y 21; las de estrato dos son la 6, 13, 15 y 16; y estrato tres son la 5, 10 y la 12. Allí también es donde concentran la mayor parte de las víctimas del conflicto armado que han llegado a la ciudad, situación que ha sido identificada en el Plan de Acción Territorial⁷ de la siguiente manera:

“Las víctimas del conflicto armado interno, en especial aquellas en situación de desplazamiento forzado asentadas en Santiago de Cali, están expuestas a condiciones de segmentación socio espacial que históricamente se ha configurado en la ciudad a causa de migraciones económicas y la violencia. Se han conformado en lugares específicos de la ciudad como el Oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21; Nororiente en las comunas 6 y 7; ladera en las Comunas 1, 18 y 20) y asentamientos de desarrollo humano incompleto... La oferta estatal insuficiente de servicios en estas zonas y las dinámicas de criminalidad urbana (bandas delincuenciales, microtráfico, extorsiones, disputas territoriales) ahondan la situación de riesgo y vulnerabilidad de estas comunidades. ...Estas comunas de Cali poseen los mayores índices de mortalidad materna, mortalidad infantil, casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, embarazo de adolescentes, homicidios en menores de 18 años, presencia de pandillas, deserción escolar, entre otras problemáticas”.

⁴ CMJT. Plan de Acción Territorial 2012 – 2015 para la Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. 19/03/13. Pág. 7 y

⁵ Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras 2012. Alcaldía de Santiago de Cali, Mayo 2013. Pág. 144.

⁶ Estrato 1 Bajo Bajo; 2 estrato Bajo; 3 estrato Medio Bajo; 4 estrato Medio; 5 estrato Medio Alto; 6 estrato Alto. Ibid. Pág. 134 a 143.

⁷ Ibídem. Pág. 54 y 55.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 9 de 26

En consecuencia, el asentamiento de estas personas en los barrios y comunas más vulnerables los expone a la revictimización por parte de los grupos armados ilegales y reduce la posibilidad de que rehagan sus proyectos de vida y se adapten a ese entorno⁸ como lo ha evidenciado la Oficina de Asesoría de Paz local⁹ que *“ha podido establecer también que existen dos focos de asentamiento de PSD al interior de la ciudad: el Distrito de Aguablanca y la zona de Ladera...focos de recepción de población que se caracterizan por ser las localidades más deprimidas y violentas”*.

Esos asentamientos no cuentan con las condiciones mínimas para una vida digna, además se constituyen en nuevos territorios de disputa, como es el caso de Brisas de Comuneros, donde se conjugan los factores de pobreza y vulnerabilidad con la presencia de grupos armados. El número de asentamientos con estas características ha aumentado y se hallan en las comunas 1, 4, 7, 13¹⁰, 14, 15, 18 y 20. Según estadísticas de la Secretaría de Vivienda, hasta el año 2005 había en Cali 5.000 familias residentes en invasiones, en el año 2011 ese número se elevó a 8.676 grupos familiares que actualmente residen en 46 asentamientos ilegales, los cuales según el gobierno de la ciudad requieren ser reubicados¹¹.

En un estudio realizado por la Fundación Carvajal¹² sobre las condiciones de los habitantes de la zona alta en la Comuna 18 se encontró que el 17% de los hogares viven con menos de \$200.000 pesos mensuales, es decir en pobreza extrema; el 29% de las familias con ingresos entre los \$201.000 y \$408.000 pesos mensuales, o sea en la pobreza; y el 45% de los hogares con ingresos al mes entre \$410.000 y \$800.000 pesos. Los bajos ingresos se deben a que el sustento viene del rebusque y los empleos de baja calidad, los hombres en ventas ambulantes y construcción y las mujeres lavando ropa o haciendo oficios por horas, principalmente.

En cuanto al desempleo, siguiendo lo descrito en el pie de página anterior, se debe señalar que en la ciudad de Cali la tasa de desempleo en el año 2013, según el DANE, fue del 14,2 % lo que representa la disminución de 0,1 punto porcentual con respecto al año 2012, que registró un 14,3%, lo que significa que el desempleo en esta ciudad no evidencia una ostensible reducción, si se tiene en cuenta que a nivel nacional la tasa de desempleo es del 9,6%. Las autoridades locales con el apoyo del Gobierno

⁸ Frente a las expectativas de contar con un mejor futuro, se hace pertinente resaltar un dato que incide directamente en las oportunidades para estos ciudadanos: *“la tasa de desempleo continúa siendo una de las más altas del país. Mientras la desocupación en las trece áreas urbanas más importantes de Colombia se redujo de 12,5% en el trimestre septiembre-noviembre de 2009 a 10,2% en el mismo periodo de 2011, en Cali-Yumbo aumentó de 13,2% a 14,6% en igual lapso. La tasa de desempleo en la ciudad es en la actualidad casi una y media veces más alta que el promedio urbano nacional, y entre los ocupados más de la mitad (53,7%) son informales, contra un 51,1% a nivel nacional”*. Municipio de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Pág. 130.

⁹ Alcaldía de Cali. Asesoría de Paz. Muestra Representativa de la Población en Situación de Desplazamiento Asentada en el Municipio de Santiago de Cali. Cocol, noviembre de 2011. Pág. 26.

¹⁰ Donde se encuentra la que sería hasta el momento la invasión más grande de la ciudad, denominada La Florida, en los alrededores de la laguna del Pondaje.

¹¹ Alcaldía de Santiago de Cali. Plan Integrado de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 – 2015. 2012. Pág. 23

¹² Ver: http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57:barrio-el-retiro&Itemid=4&lang=es

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 10 de 26

Nacional deben desarrollar estrategias para la generación de empleo y promover la creación de puestos de trabajo en asocio con la empresa privada.

En la comuna 18, por ejemplo, la escolaridad es baja. En el caso de los jefes de hogar 6 de cada 10 padres hicieron algún grado de primaria, el 15% terminaron la secundaria, el 1.4% tienen estudios técnicos y el 0.5% fue a la Universidad. El 90% de los jóvenes no están estudiando y la mitad de este porcentaje no terminó la primaria o el bachillerato *“por falta de recursos económicos o porque debió iniciar a trabajar para poder ayudar a sostener la familia”*.

La situación de vulnerabilidad se suma a la importancia que tiene la ubicación geográfica de las comunas para la actuación de los grupos armados y el logro de sus intereses criminales, donde consideran se deben fortalecer las acciones de las autoridades locales y de la Fuerza Pública. De un lado, las comunas 1, 18 y 20 se encuentran en la zona de ladera, colindando con los corregimientos de Los Andes, La Buitrera y Pance en los Farallones de Cali, y con la zona rural del municipio de Buenaventura y parte del municipio de Dagua (caracterizada por ser selva tropical húmeda), que permite la interconexión en dirección al océano Pacífico por trochas, riachuelos y los ríos Anchicayá y Raposo.

Las comunas 6 y 21 limitan por el oriente con áreas rurales de los municipios de Palmira y Candelaria, corredor hacia la cordillera central, y las comunas 14 y 15 con el corregimiento de Navarro que conecta con Puerto Tejada y el nororiente del Cauca, también zonas marginales. Un número importante de barrios del oriente limitan o están equidistantes al jarillón del río Cauca, caudal que colinda y recorre parte de estas comunas, convirtiéndose en un corredor fluvial en disputa por donde se facilita el transporte entre varias zonas de la ciudad y favorece el desarrollo de actividades legales e ilegales entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

Caso especial lo representa el barrio Santa Elena ubicado en la Comuna 10, donde se encuentra la principal galería o centro de acopio de alimentos provenientes de otras regiones y municipios. Su ubicación es de fácil acceso por las autopistas Suroriental hacia Jamundí, Simón Bolívar a la autopista Panamericana, o en comunicación hacia los municipios de Palmira, Candelaria y Pradera. Allí llegan vehículos pequeños, medianos y grandes cargados de todo tipo de productos agrícolas, avícolas, porcinos, de mar y de río, para surtir a vendedores ambulantes, otras plazas de mercado, negocios comerciales del sector y de otras partes de la ciudad. El volumen de mercancías que se maneja es amplio, por lo que es de interés de los grupos armados ilegales intervenirlos para desarrollar sus actividades ilícitas, constituyéndose en un objetivo importante para la realización de sus actividades. De hecho, las autoridades de policía han realizado la incautación de cargamentos de estupefacientes y otros elementos en este sector.

Ese interés de los grupos armados ilegales y grupos criminales por controlar la ciudad para sus actividades no es nuevo, Santiago de Cali ha sufrido los embates de la violencia de manera cíclica desde la década del setenta, cuando surgieron estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, posteriormente constituidos en carteles internacionales. Pese a la acción de las autoridades para

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 11 de 26

desarticular estas organizaciones, han logrado pervivir en el tiempo y han mutado desde entonces en grupos paramilitares y nuevos grupos criminales, sustentados en el ascenso de mandos medios y bajos que toman el control y las reconfiguran bajo nuevas denominaciones, manteniendo las prácticas y método que utilizaron desde su surgimiento.

De otro lado, de los grupos guerrilleros, el M-19 hizo en la presencia en la década del setenta con interés predominantemente urbano en sectores de ladera y en el distrito de Aguablanca, donde establecieron importantes focos de milicias duramente enfrentados por las autoridades. Un hito de esta confrontación se dio en el año 1983 cuando la Fuerza Pública incursionó con tanques, helicópteros y armamento pesado al barrio Siloé; años más tarde, esto es en 1990 el M-19 cesó sus acciones armadas, tras la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo las Farc y el ELN pretendieron a Cali como una ciudad objetivo y conformaron milicias que se asentaron en las comunas, surgiendo así los frentes Manuel Cepeda Vargas y Omaira Montoya respectivamente para cada una de las agrupaciones guerrilleras.

Ya a finales de los noventa y principios de la década del dos mil se producen dos hechos importantes que influyen en el ingreso de los paramilitares al Valle del Cauca y a Cali. Uno, el 30 de mayo de 1999 cuando un comando del ELN secuestra a civiles en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín, causando rechazo de la sociedad colombiana y propiciando la llegada de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con los denominados comandos urbanos del frente Farallones. Y dos, el 11 de abril de 2002 el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca por guerrilleros de las Farc, además de una serie de atentados con carro bomba al Comando de la Policía Metropolitana, la sede de la Sijin y al Palacio de Justicia, hechos que exacerbaron la situación de violencia en Cali.

En la disputa entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, la acción de las autoridades logró reducir la actuación de los grupos guerrilleros, llevándolos a replegarse en las zonas montañosas y selváticas del departamento, pero mantienen milicias en algunas comunas para labores de apoyo logístico y avituallamiento hacia sus frentes de guerra del área urbana de Cali a las zonas rurales.

Posteriormente tras el proceso de desmovilización de las AUC en el Valle del Cauca, quedaron vigentes disputas entre Los Machos y Los Rastrojos, particularmente en el centro y norte del departamento. Tras no ser incluidos en esa desmovilización fortalecieron su presencia en barrios y comunas mediante la cooptación y financiación de las denominadas “oficinas de cobro” y pandillas. Para el año 2011 Los Machos y Los Urabeños establecieron acuerdos para disputar el copamiento territorial y el manejo de las actividades ilícitas a Los Rastrojos, situación que en 2012 y 2013 ha incidido notablemente en el incremento de las afectaciones a los derechos humanos de los habitantes de Cali y particularmente de los habitantes de las comunas y barrios más vulnerables.

El aumento de la violencia en Cali obedece a la ofensiva emprendida por el grupo armado ilegal autodenominado Los Urabeños en contra de Los Rastrojos, particularmente, en las comunas del oriente de la ciudad. Esta disputa se ejecuta con grupos armados organizados locales que establecen alianzas

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 12 de 26

o acuerdos con uno u otro grupo armado y ello determina también la dinámica de la confrontación. De hecho aunque no todos los enfrentamientos entre pandillas están relacionados con la disputa que libran Urabeños y Rastrojos, estos se han mantenido en el tiempo, reflejando el interés de estructuras más grandes por controlar las comunas de la ciudad golpeando los derechos de la ciudadanía.

La forma como se están asentando Los Rastrojos y Los Urabeños en las comunas de Cali ha incrementado los impactos sobre la población civil, en el que las características de establecimiento están reconfigurando la territorialidad y están imponiendo un nuevo orden de dominación violenta.

Anteriormente las pandillas manejaban una territorialidad de acuerdo con sus particularidades y mantenían una disputa por el control de acciones ilegales en ese territorio, generalmente determinado por “el barrio” o “los barrios” en los que se ejercía influencia. Ahora esos intereses están mutando al copamiento territorial en línea con las pretensiones de grupos armados de mayor envergadura, en este caso, haciéndose proclives a quienes tienen un proyecto expansivo de control de grandes territorios en las comunas, es decir, a una perspectiva hegemónica, ya sea de Los Rastrojos o de Los Urabeños.

Esto se ha realizado mediante la cooptación de grupos de pandillas en lugares que se consideran estratégicos para la obtención de recursos y la ampliación de redes de narcomenudeo. Las formas de cooptación van desde la financiación para la realización de crímenes por encargo (asesinatos mediante la modalidad de sicariato, cobro de extorsiones y administración de territorios “brindando seguridad”) hasta la financiación de algunas pandillas para contener el avance del contrario en las comunas, ya sea brindando armamento, suministrando recursos económicos o combatientes, es decir, contribuyendo a las condiciones para su expansión.

Ese proyecto expansivo ha determinado paulatinamente que grupos de pandillas ahora se hagan conocer como de Los Urabeños o de Los Rastrojos, lo que ha cambiado el mapa de influencia de estos grupos armados en las comunas. En las zonas altas, bajas o medias ya se identifica el dominio territorial de Los Rastrojos o de Los Urabeños, ya no tanto así de las pandillas que comúnmente estaban allí, acentuando el fenómeno de las “fronteras invisibles”. Así mismo, aunque se fraguan acuerdos y alianzas entre pandillas, y entre pandillas y Los Urabeños o Los Rastrojos, actualmente algunas de las disputas se encuentran en una fase de transición, por lo que son fugaces o poco estables, lo que hace prever, de no actuar las autoridades civiles y de policía, el incremento de las acciones violentas

La mayoría de los grupos cooptados pueden oscilar entre los 15 y los 20 jóvenes, presuntamente algunos de ellos también circulan de acuerdo con las intereses del grupo armado hacia otros municipios del Valle del Cauca, por ejemplo en Buenaventura. A manera de ejemplo, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, se han identificado una serie de situaciones que vienen afectando a las comunidades por la actuación de los grupos armados, como sucede en el distrito de Aguablanca y en las comunas 18 y 20, situaciones que varían constantemente.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 13 de 26

En el distrito de Aguablanca la violencia se ha acentuado¹³ en la medida que Los Urabeños han logrado ampliar su capacidad de influencia en Buenaventura, lo que ha implicado un mayor interés de su parte por controlar sus barrios. De acuerdo con testimonios de sus habitantes Los Rastrojos se mantienen en Brisas del Comunero y se espera que la disputa se amplíe hacia sectores de los barrios Llano Verde, Morichal y Potrero Grande.

La situación de la comuna 18 ya indica la presencia de Rastrojos y Urabeños, lo que ha reconfigurado la actuación de las pandillas y ha establecido límites entre los grupos armados en los distintos sectores de la comuna. De un lado, al parecer Los Urabeños estarían asentados en la parte alta de la comuna en el sector de Alto Nápoles, asentamientos El Árbol y La Choclona; más abajo en el sector de Cuatro Esquinas, en el barrio Los Chorros; en la parte media en sectores colindantes con el hospital Mario Correa. De otro lado, Los Rastrojos estarían ubicados en los barrios Buenos Aires y Nápoles, donde estarían cometiendo extorsiones y también estarían en los barrios Prados del Sol y Lourdes.

En la comuna 20, conformada por 11 barrios, el más afectado es el barrio Siloé, donde estarían operando el mayor número de pandillas financiadas, auspiciadas o cooptadas por Los Rastrojos y Los Urabeños. En estos sectores ya se ha identificado la presencia de personas con armas largas ejerciendo su influencia territorial y amenazando a los habitantes, de acuerdo con testimonios de afectados *“algunas de esas pandillas viven del microtráfico, otras de la extorsión generalizada, les cobrarían a las tiendas, a las casas, al transporte público, a los carros que vienen a surtir mercancías; más sin embargo se dice hay unos que no están apretando a la gente, por cuanto no necesitan ya que los sostienen Los Rastrojos”*.

En síntesis, Los Rastrojos y Urabeños ven a las pandillas y sus integrantes como un objeto desechable y funcional a sus propósitos en la medida que: 1) son fácilmente influenciados con dinero, armas, entrenamiento y combatientes; 2) son relativamente económicas para lograr objetivos territoriales y económicos para el logro de sus objetivos; 3) les permiten administrar y dominar territorios; y 4) les permite mantener control sobre la población y sobre las actividades criminales para la obtención de recursos.

Como se observa, pese a los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad, la situación de violencia en la ciudad de Cali por la disputa entre Rastrojos y Urabeños ha incrementado las afectaciones sobre los derechos de los ciudadanos. Entre los hechos más graves está el alto índice de homicidios, la desaparición forzada, el reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento intraurbano, las formas violentas de control poblacional entre las que se incluye la extorsión, la imposición de fronteras invisibles y normas de comportamiento.

¹³ Según datos de la Policía Metropolitana, en este Distrito hay un aumento de los homicidios en todas sus comunas a pesar de las diferentes medidas adoptadas: toque de queda para menores, restricción al porte legal de armas, la recuperación de parques, el control de vehículos, las requisas en los establecimientos públicos. En comuna 13 el aumento fue del 21%, en la 14 del 16%, en la 15 del 21%, en la 16 del 4% y en la 21 del 38%. Diario El País. El complicado reto de vencer la violencia en Aguablanca. 06/10/13. Pág. A8.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 14 de 26

Homicidios y desapariciones forzadas.

De acuerdo con el Comité Interinstitucional de Hechos Violentos del municipio de Cali, en el año 2013 se registraron 1973 homicidios, y según el SIRDEC del Instituto Nacional de Medicina Legal la cifra de homicidios fue de 2001. Los anteriores datos demuestran un incremento en los homicidios con respecto a los años 2011 (1885 homicidios) y 2012 (1861 homicidios), lo cual ubica a Cali entre las ciudades más violentas del país de conformidad con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Por su parte, en el periodo 1 de enero a 3 de febrero de 2014, el SIRDEC registra 142 homicidios en la ciudad de Cali.

Los homicidios colectivos o múltiples son los que han causado mayor impacto en la población. Aunque son distintas las hipótesis de las autoridades en cada uno de los casos, estas situaciones generan un gran temor en los ciudadanos, ya que pueden resultar afectados en su vida e integridad personal.

Algunos casos de masacres ocurridas en 2013 fueron:

El 16 de marzo fueron muertos los señores Giovanni Noreña, su primo Jonathan Montaña y Oscar Higueta quienes habrían llegado al barrio Terrón Colorado para el montaje de un espectáculo de circo llamado "Circo Mágico". Sin embargo fueron considerados por integrantes de un grupo armado con influencia en el sector como enemigos y fueron asesinados.

El 14 de mayo en el barrio Altos de Normandía cuatro sicarios en moto dispararon contra dos presuntos asaltantes quienes fueron asesinados; en el hecho también murió la señora Dionisia Benítez de 82 años.

El 08 de noviembre se presentó una masacre de nueve personas y cuatro más heridas cuando departían en el bar La Barra de La 44 en el barrio Nueva Floresta. Los hechos se registraron hacia las 9:40 de la noche donde había una veintena de personas. De acuerdo con el coronel Hoover Penilla en el lugar murieron Johan Sebastián Muñoz, de 22 años; Isaac García, de 18, y Rafael Pinto, de 41. En los hospitales Primitivo Iglesias y Carlos Holmes Trujillo fallecieron mientras recibían atención médica José Enrique Martínez, de 30 años; Carlos Augusto Rojas, de 33, Benny Rodríguez, de 28; Iván Ruiz, 43, y Jefferson Bonilla, de 18 años.

En cuanto a la problemática de las desapariciones, también con datos del SIRDEC, en Cali, en el año 2012 se reportaron 6 desapariciones presuntamente forzadas, mientras que en el 2013 la cifra fue de 8 desapariciones. En cuanto a la clasificación de desapariciones clasificadas sin información se tiene el siguiente dato: En el 2012, 548 desapariciones, en el 2013, 472 y en el 2014, 14 casos. La Personería ha identificado que las comunas sobre las que se han presentado las denuncias son las 6, 11, 13, 14 y 15.

Reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.

El documento CONPES 3673 de 2010 sobre prevención de reclutamiento forzado explica sobre el reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en las zonas urbanas *“En las zonas urbanas esta articulación se realiza generalmente a partir de su ingreso a parches, combos y pandillas que son cooptados por grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados”*¹⁴.

Aunque en los barrios y comunas de Cali se denuncia permanentemente el reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aún no se tiene un panorama del estado actual de la problemática. Sin embargo, el primer indicador de esta situación son las afirmaciones de líderes y personas de las comunidades que manifiestan permanentemente que la situación es grave, por lo que se requiere un mayor esfuerzo de las entidades de Gobierno regional y local para determinar el diagnóstico actual y avanzar en la implementación de planes, programas y proyectos con enfoque preventivo.

El informe sobre el *Estado actual de las pandillas en la ciudad de Cali y su impacto en los índices de violencia social* realizado en el 2012, permitió a la Personería Municipal identificar que en la ciudad operan unas de 134 pandillas conformadas por cerca de 2.134 jóvenes, ellas tienen incidencia en 17 de las 22 comunas. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de dichas pandillas actúan realizando acciones por encargo o están de alguna manera integradas a Los Rastrojos y Los Urabeños, se puede deducir una proporción hipotética de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados y utilizados.

En la labor de monitoreo realizada por la Defensoría del Pueblo se ha identificado también que el reclutamiento lo llevan a cabo personas que ofrecen trabajo en fincas para la recolección de café, como por ejemplo en la comuna 6 de acuerdo con quejas de la comunidad se ha señalado *“a mi hijo un tipo que se le había hecho amigo le comentó de un trabajo, ofreciéndole un millón de pesos para ir a una cosecha en una finca La María de Medellín. Se fueron 4 muchachos, a él le pagaron las dos primeras quincenas pero después el señor de la finca les dijo que habían llegado los patrones. Se lo llevaron a la fuerza y lo amenazaron advirtiéndole que si intentaba escaparse lo mataban a él y a la familia, diciéndole que ya pertenecían a Los Rastrojos. Después lo capturó el Ejército durante un combate cerca de Montería”*.

La exposición de los niños, niñas y adolescentes a las pretensiones de los grupos armados ilegales se evidencia también en la cantidad de menores de edad que han sido judicializados tras verse comprometidos en la realización de crímenes como homicidio, extorsión, lesiones personales, hurto calificado y agravado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, fabricación tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales, entre otros. De acuerdo con la Unidad de Policía de Infancia y

¹⁴ Prevenir el reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes es asunto de todos. Versión resumida del documento Conpes 3673 de 2010. Vicepresidencia de la República.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 16 de 26

Adolescencia de Cali entre el 01 de enero y el 01 de octubre de 2013 fueron detenidos por la Policía 2.028 jóvenes entre los 14 y 18 años, 1.922 (el 94.7%) hombres y 106 (el 5.2%) mujeres.

Desplazamiento forzado.

Como se ha mencionado en el presente documento, Cali es lugar de llegada de personas y familias desplazadas del suroccidente colombiano, llegando principalmente a comunas y barrios en situación de riesgo. Según datos del Sistema Nacional de Información de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2012 fueron recepcionadas 7.159 personas en condición de desplazamiento y a noviembre 1° de 2013 habían sido registradas 5.427 personas.

Llama la atención la situación de expulsión en la ciudad. Con el recrudecimiento de la situación de violencia por la intervención de grupos armados ilegales la situación de desplazamiento forzado se mantiene: las cifras del SNI indican que en 2012 fueron expulsadas de Cali 664 personas correspondientes a 198 hogares, en tanto, que a 01 de noviembre fueron expulsadas 518 personas de 143 hogares. Esto indica la cifra oficial, es decir, sin incluir aquellas personas que han declarado y no han sido incluidas en el registro, o aquellas que no han declarado por desconocimiento o temor.

Una de las problemáticas identificada por el enfrentamiento que libran Los Rastrojos y Los Urabeños es el desplazamiento intraurbano, relacionado con los siguientes factores principalmente: 1) personas extorsionadas que no pueden cumplir con las cuotas económicas impuestas; 2) presiones de los grupos armados a los habitantes de los barrios para que les “colaboren” en el logro de sus acciones ilegales; 3) temor a quedar en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados; 4) amenazas colectivas de desalojo so pena de retaliaciones; 5) la imposición de restricciones a la movilidad por las “fronteras invisibles”; 6) amenazas de atentados si no se someten a las exigencias del grupo armado ilegal. Este tipo de situaciones obligan a personas y familias a desplazarse de manera forzada dentro de la ciudad, con el fin de resguardar su vida e integridad, pero también hay casos en los que la situación de pobreza obliga a afrontar los riesgos y quedarse pese al nivel de exposición que se pueda tener, o casos en los que personas que han llegado a esos barrios, desplazadas de otras zonas del país, sean revictimizadas. Algunos casos de desplazamientos forzados intraurbanos a destacar han sido los siguientes:

El 15 de enero de 2013 se desplazaron masivamente cerca de 20 familias del barrio El Vergel tras la disputa entre dos grupos conocidos como “Los Calvos” y “La Tatabrera”. El abandono de las casas fue aprovechado por los delincuentes que hurtaron todo lo que había en ellas. Una comisión de verificación de la Personería pudo establecer en su momento que otras 40 familias manifestaron su intención de salir o de armarse para enfrentar a estos grupos.

El 14 de mayo de 2013 fue difundida en el barrio Brisas de Comuneros una advertencia del grupo autodenominado Los Buenaventureños (banda al servicio de Los Urabeños) en el que se exigía a sus habitantes abandonar el lugar en un plazo de 20 días. Al parecer la pretensión del grupo armado era desterrar a quienes vivían allí para traer personas conocidas por ellos y tener un mayor control territorial.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 17 de 26

Tras el hecho y al cumplirse los 20 días, paulatinamente las personas y familias que habitaban allí fueron saliendo, y aunque no se sabe con exactitud el número, líderes comunitarios manifestaron en una comisión en terreno realizada por la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que han visitado la zona que salieron más de 200 familias, situación que se pudo verificar al observar un gran número de casas y cambuches deshabitados y saqueados. Las autoridades civiles y de fuerza pública fortalecieron la presencia y las acciones policivas a fin de contrarrestar la amenaza, quienes permanecen allí lo hacen mientras estén allí los efectivos, de lo contrario abandonarán sus viviendas.

El 03 de febrero de 2014, de acuerdo con datos de la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali, se habría producido el desplazamiento de 37 personas integrantes de 07 familias, quienes salieron desplazadas forzosamente del sector 5 del barrio Potrero Grande, ante amenazas de hombres que se identifican pertenecientes a Los Urabeños. Estas personas armadas inicialmente estarían ofreciendo a los adultos la suma de 1 millón de pesos para hacerse parte del grupo armado, de oponerse y no acceder al ofrecimiento deben pagar una “multa” o desalojar sus lugares de residencia, ante lo cual las personas amenazadas están optando por salir, para no involucrarse en la disputa ni tener los recursos para cancelar lo exigido, ya que en su mayoría son personas vulnerables y dedicadas al reciclaje.

Los desplazamientos intraurbanos, además de generar el desarraigo de las familias, fracturan los lazos comunitarios, convierten a los habitantes en víctimas del miedo constante y se genera un ambiente de zozobra en el que los actores armados mantienen su dominio bajo los patrones del terror. De la misma manera, al ser desplazamientos intraurbanos promovidos por grupos adscritos a Los Rastrojos y Los Urabeños, estos no necesariamente son incluidos como hecho victimizante, y por consiguiente, no reconocidos los casos para ser incluidos en el Registro Único de Víctimas, RUV, con la limitación de acceso a derechos por parte de las personas víctimas. Este es un problema que en Cali hasta el momento resiente una gran invisibilización del impacto social y comunitario en los barrios y comunas donde se han venido dando los enfrentamientos.

De acuerdo con las cifras de la Personería de Cali¹⁵, a noviembre de 2013 se recibieron 56 declaraciones en las que 202 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado que se relacionan con enfrentamientos de grupos armados en la ciudad. De la misma manera, en la oficina de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, se registra un caso de desplazamiento masivo, reportado por la Personería, tras el abandono de 8 familias de sus hogares tras el atentado con artefacto explosivo ocurrido el pasado 14 de marzo en el barrio El Jardín, familias que se encuentran incluidas dentro del registro.

Restricciones a la movilidad y “fronteras invisibles”.

Con la incursión de Los Rastrojos y Los Urabeños en las comunas, el problema de las “fronteras invisibles” se ha acentuado. Las restricciones a la movilidad entre barrios se determinan por el dominio territorial donde ejercen su dominio las pandillas, cuyos límites no pueden ser traspasados sin previa

¹⁵ Personería de Cali. Oficio No. 210.25.1 de 29/11/13

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 18 de 26

autorización o por quienes consideran no representan riesgo para el logro de sus intereses. Hacer caso omiso o ingresar por equivocación a un área vedada significa ser objeto de agresiones en contra de la integridad personal e incluso llegar a perder la vida.

La Defensoría del Pueblo pudo constatar in situ la existencia de dichas “fronteras invisibles” en la comuna 18. De acuerdo con los habitantes del sector a manera de ejemplo se pueden identificar zonas prohibidas para habitantes de unos u otros barrios así *“Una de las líneas invisibles comienza en la carrera 33C con 58, de la 34 hacia el sur es dominio de Los Buenaventureños, de ese punto para acá de los Haitianos, y más abajo de Brisas de las Palmas, hacia el hospital Duarte Cancino, de los de Milor”*. En la comuna 14 en el barrio Quintas del Sol sucede una situación similar en su interior, con un sector de este barrio que es conocido como “la invasión o ciudad de palo” y entre los barrios Alirio Mora Beltrán y Quintas del Sol.

La Policía también tiene identificadas otras “fronteras invisibles” en los barrios Marroquín, El Vergel, Petecuy I, II y III, Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Comuneros I, El Diamante y El Vallado. En las laderas, los barrios Siloé y Terrón Colorado¹⁶. Estas restricciones para la libre movilidad de los ciudadanos entre los barrios han producido otra serie de fenómenos que limitan el acceso a otros derechos: por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen restricciones para acudir a las instituciones educativas y lugares de estudio cuando deben cruzar de un barrio a otro para recibir clases, o también cuando deben asistir a la implementación de programas de prevención para este grupo poblacional promovidos por el ICBF, especialmente en barrios de las comunas 13, 14 y 15.

Extorsión y secuestro.

De acuerdo con el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, GAULA, entre enero y noviembre de 2012 se denunciaron 81 casos de extorsión, mientras que en el año 2013 se denunciaron 115 casos, es decir, un aumento del 42% en el mismo periodo, un indicador del incremento de las denuncias que puede estar relacionado con el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en Cali. El fenómeno se ha generalizado en todos los niveles sociales y tiene características particulares de acuerdo a quien está dirigida.

Por un lado, se ha hecho cada vez más frecuente la microextorsión, es decir, la exigencia de dinero en pequeñas cantidades por parte de integrantes de grupos armados, que se oculta mediante el pago de “cuotas de seguridad”, “pago de vigilancia”, o para “poder trabajar”. De ella son víctimas principalmente los habitantes de barrios y comunas vulnerables, también los transportadores y tenderos, que son presionados para poder desempeñar sus labores. En particular este tipo de extorsión lleva implícito un mensaje de control territorial y de imposición de condiciones por parte de los grupos armados.

Por otro lado, están las extorsiones a grandes comerciantes, empresas, transportadores y negocios, que también involucran a grupos armados ilegales y delincuencia común, pero esta ya no tiene como fin el

¹⁶ El Tiempo. Violencia por fronteras invisibles no da tregua en Cali. 17/11/13. Pág. 6.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 19 de 26

dominio y control territorial como fin fundamental, sino la obtención de recursos para el fortalecimiento de estructuras. En cualquiera de los dos casos, quienes no pagan las exacciones corren riesgos en su vida e integridad.

La disputa por el cobro de extorsiones se materializó en panfletos que circularon en bares y establecimientos nocturnos durante el pasado 15 de junio, cuando sujetos en motocicleta entregaron varios panfletos que decían *“Atención, se le notifica a los propietarios de los establecimientos comerciales de este sector y colaboradores de esa organización que si siguen pagando vacuna a (Palustre y Boliqueso) a partir de este momento se convertirán en objetivo militar, att, Los Urabeños”* (sic). Los comerciantes admitieron ser obligados a pagar “cuotas”, por lo que ante la presunta divulgación del panfleto por Los Urabeños se ha producido temor de posibles retaliaciones y atentados en contra de los locales comerciales, sus dueños y clientes.

Según el comandante del Gaula Valle *“no existen datos exactos de cuáles son los grupos delincuenciales que más extorsionan en el departamento, esto porque hay quienes asumen identidades de criminales para lograr su cometido... Pero también extorsionan grandes organizaciones criminales que emplean ese dinero para financiar actividades ilícitas. En la galería Santa Elena, por ejemplo, hay bandas dedicadas al cobro de vacunas a los comerciantes de verduras...”*¹⁷.

Con relación al secuestro, las cifras indican que entre enero y noviembre de 2012 en Cali se presentaron 13 casos, mientras que en 2013 se denunciaron 19, es decir un aumento del 46% con relación al mismo periodo.

Afectaciones por artefactos explosivos.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Atención a Víctimas (UARIV) en 2012 fueron declarados 14 hechos victimizantes relacionados con actos terrorismo en Cali, y 18 entre enero y noviembre de 2013. Algunos de estos casos están relacionados con el uso de artefactos explosivos improvisados, que son utilizados para presionar el cobro de extorsiones o para la ejecución de atentados en retaliación de las disputas entre grupos armados, lo que produce afectaciones de manera indiscriminada.

En el 2013 se conocieron los siguientes hechos:

El 15 de marzo en el barrio El Jardín detonó un artefacto en un cajero automático, hecho que las autoridades pudieron verificar se trataba de una trampa, pues cerca al lugar de la explosión fue encontrado otro artefacto que fue activado de manera controlada, al final del hecho quedaron daños materiales y resultaron seis personas afectadas.

El 23 de marzo en el corregimiento de Montebello fue lanzado un artefacto explosivo de bajo poder en contra de una vivienda, presuntamente por retaliaciones entre grupos criminales, hecho en el que resultaron heridas dos personas.

¹⁷ Entrevista en Diario El País. “La Extorsión, un delito que está en las sombras”. 11/02/13. Pág. A7.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 20 de 26

El 11 de septiembre se presentó una explosión en el sur de Cali en el barrio Cañaveralejo, cuando presuntamente dos sujetos lanzaron un artefacto explosivo tipo petardo, tras el hecho se presentaron daños materiales.

El 22 de octubre fue lanzado un artefacto explosivo improvisado en el barrio Los Andes, tras el hecho se registraron daños materiales

Violencia basada en género

En las mujeres igualmente se evidencian los diferentes factores de violencia que se entrecruzan en esta capital. Según datos del Observatorio Social¹⁸, entre enero y 30 de junio de 2013, 64 mujeres han sido asesinadas en Cali, un incremento del 59% a las mismas fechas del 2012. Las comunas donde han ocurrido el mayor número de eventos son la 3 (4 casos), 6 (12 casos), 11 (5 casos), 13 (8 casos), 15 (5 casos). Los presuntos móviles en su orden son venganzas, riñas, pandillas, violencia de pareja, microtráfico y violencia intrafamiliar.

Aunque no todos los casos de violencia en contra de las mujeres están vinculados personas integrantes de grupos armados ilegales, pues las denuncias son tipificadas como agresiones por situaciones de pareja y conflictos familiares en las que no necesariamente se identifica al agresor como perteneciente a un grupos armado, en los barrios vulnerables parte de este tipo de situaciones son ejecutadas por sujetos pertenecientes a dichas estructuras, quienes mediante prácticas de violencia contra la mujer tienen el objetivo de demostrar dominio y control territorial.

Un caso denunciado ocurrió el pasado 05 de agosto de 2013, en el que fue abusada sexualmente una menor de 12 años en el barrio Potrero Grande al parecer por cinco integrantes de una pandilla. El hecho se produjo tras la sospecha de los sujetos de que un allanamiento realizado por la Policía en el sector fue producto de la denuncia de unos vecinos, por lo que en retaliación se conformó un escuadrón que tomo venganza con la niña. El hecho obligó a la menor y su familia a salir desplazados de manera forzada.

Este tipo de situaciones, sumado a la intimidación sexual como forma de presión y ataque entre grupos, en la que las niñas y mujeres se convierten en un vehículo para obtener información de los rivales mediante la seducción y el enamoramiento, no es denunciado ante las entidades competentes. Referido a este aspecto, se hace necesario indagar a profundidad por parte de las instituciones responsables de planificar y ejecutar políticas públicas sobre los derechos de la mujer en Cali, cual es el nivel de involucramiento de los grupos armados en prácticas de violencia contra la mujer, a fin de adoptar medidas para prevenir y mitigar los riesgos que se identifiquen.

Situación de sindicalistas y líderes de juntas de acción comunal.

¹⁸ Observatorio Social. Visión Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Boletín Informativo No.2. Primer Semestre 2013.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 21 de 26

Por su actividad de defensa de los derechos de los trabajadores, las agremiaciones sindicales también han sido amenazadas por los grupos armados ilegales. Las centrales obreras han denunciado el asesinato de sindicalistas y las amenazas proferidas principalmente presuntamente por Los Rastrojos mediante panfletos que han circulado en Cali. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en cuanto a la violencia contra sindicalistas en Cali y el Valle del Cauca reseña: en 2012, el 15 de febrero fue asesinado Efraín Amezcua del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Masivo, SINTRAMASIVO, igualmente se identificaron amenazas en contra de cerca de 20 mujeres pertenecientes al Sindicato de los Educadores del Valle, SUTEV.

En 2013 fueron amenazados, el 23 de febrero dos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, CTC, y de la Unión Sindical de Emcali, USE y el 28 de julio, cuatro dirigentes de Asociación de Profesores de la Universidad Libre, ASPROUL. A lo anteriormente, enunciado se suman los homicidios de Francisco Ocampo Cepeda el pasado 04 de agosto, quien pertenecía al SUTEV, y de Fernando Flórez Viveros el 27 de septiembre presidente de SINDOEPAL.

Las juntas de acción comunal cumplen una importante labor como representantes barriales de sus vecinos ante la institucionalidad: interceden ante funcionarios de la alcaldía, orientan en el tema del Sisbén, hablan en los colegios, abordan asuntos de salud, promueven diversos grupos juveniles enfocados en brindar alternativas lúdicas y deportivas a los adolescentes, entre otros. Líderes comunitarios, a pesar del temor que genera ser representantes locales por la visibilidad ante los grupos armados, acuden a diferentes entidades del Estado para denunciar las problemáticas que aquejan a sus barrios y buscando apoyo para que se atiendan de forma integral las situaciones que se entremezclan y agudizan las situación de seguridad.

Igualmente, promueven movilizaciones ciudadanas para protestar en contra de las situaciones de violencia y manifiestan su desaprobación de este tipo de situaciones por lo que son claros en que no los comprometan en torno a lo relacionado a los problemas de violencia como un mecanismo de autoprotección. En una reunión con la Defensoría del Pueblo algunos de sus integrantes expresaron: *“vea, uno habla con los muchachos y les explica el trabajo que va a desarrollar por la gente y ellos entienden porque incluso a veces sus propios familiares requieren esta atención, nos dicen que no hay problema siempre y cuando no se interfiera con ellos y sus asuntos”*.

Otras afectaciones derivadas de la situación de violencia.

El temor generalizado en las comunas se manifiesta en la condición de los habitantes de las comunas más vulnerables por tener que convivir con la situación constante de violencia hace que se materialice en la angustia por el bienestar e integridad de las familias. Es frecuente el miedo cuando se sale a la calle y no se tiene certeza de regresar sano y salvo al hogar, de hablar de la situación y denunciar por las represalias de que se pueda ser objeto, a lo que se suma también las situaciones de problemas intrafamiliares, el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 22 de 26

De igual manera, en Cali se presenta un fenómeno de señalamiento y estigmatización a quienes habitan las comunas afectadas por la violencia. Las posibilidades de encontrar empleo de calidad o acceder a ciertos derechos se dificulta por el hecho de habitar en dichos lugares evitando que las personas tengan opciones para desarrollar su proyecto de vida, por lo que se requiere una acción decidida de integración social en la ciudad que permita romper prejuicios y paradigmas creados.

La acción institucional frente a la problemática descrita ha estado enfocada principalmente en las acciones policivas a través del “Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 – 2015” con estrategias de implementación de cuadrantes, la instalación de cámaras de seguridad y en los últimos meses, con la aplicación del plan desarme por parte de la Fuerza Pública y la intervención militar en varias comunas como también mediante la implementación de programas sociales específicos.

Sin embargo, se requiere un esfuerzo más decidido que permita a los habitantes de las comunas tener la posibilidad de materializar de manera efectiva sus derechos, igualmente que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sea beneficiarios de manera inmediata de los planes, programas y proyectos de las autoridades competentes con el fin de prevenir que se conviertan en objetivo de los grupos armados que se vienen fortaleciendo en la ciudad y evitar el reclutamiento y uso ilícito de los menores de edad y el incremento de los ciclos de violencia.

De acuerdo con el escenario descrito es posible que se continúen materializando violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH por lo que el nivel de riesgo es alto.

NIVEL DEL RIESGO:

ALTO

☒

MEDIO

☐

BAJO

☐

AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS

AUTORIDADES CIVILES:

- Alcaldía Municipal de Cali, Gobernación del Valle, ICBF Regional Valle, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría Regional y Provincial de Cali, Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, Comité Departamental y Municipal de Justicia Transicional, Personería Municipal de Cali, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Programa presidencial Colombia Joven.

FUERZA PÚBLICA:

- EJERCITO: III Brigada
- POLICIA NACIONAL: Metropolitana de Cali, Policía Infancia y Adolescencia, Grupo Antiextorsión y Secuestro.

RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS

Se recomienda al CIAT, previa evaluación del presente informe de riesgo, emitir Alerta Temprana y orientar a las autoridades competentes para que se adopten las medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar o controlar el riesgo de la población civil, que actualmente afecta a los ciudadanos del área urbana del municipio de Santiago de Cali. Se recomienda también:

A la Administración Municipal de Cali:

- Incrementar el presupuesto en materia de seguridad para la Policía Metropolitana de Cali con el fin de que se fortalezcan los recursos logísticos y humanos que permitan realizar una eficiente labor en las actividades de patrullajes y operaciones de registro y control, para la neutralización de los grupos armados ilegales y bandas delictivas en la ciudad de Cali y lograr la reducción sustancial de los hechos de violencia que afectan los derechos fundamentales de los pobladores.
- Adelantar un proceso de caracterización de las víctimas del conflicto de forma integral, en cuanto a la cantidad, lugares de habitación, condiciones de salud, vivienda, situación laboral, escolaridad, etc., por enfoque diferencial como género, edad, etnia, discapacidad, etc. Especialmente ante la necesidad de conocer el impacto que ha provocado la disputa entre los grupos post desmovilización en los barrios normales y subnormales para ofrecerles a las víctimas la adecuada asistencia en el marco de la ley 1448 de 2011 y de las decisiones jurisprudenciales.
- A la Secretaría de Gobierno Municipal de Cali, en coordinación con la Unidad Administrativa para la Atención de las Víctimas, el Ministerio de Protección Social y la Gobernación del Valle, con base en los principios de subsidiariedad y complementariedad, proveer los recursos suficientes para prestar la ayuda humanitaria inmediata a la población víctima de desplazamiento y adelantar los programas de estabilización socio económica.
- A la Alcaldía de Cali, diseñar e implementar programas de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que habita las comunas 1; 5; 6; 10; 12; 13; 14; 15: El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16: Mariano Ramos; Comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto Nápoles; Comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén; Comuna 21: Pízaños I y II y Potrero Grande, en materia de educación, salud, empleo, cultura y recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de riesgo y promover oportunidades de empleo para los jóvenes de esos sectores.
- A la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Municipal, coordinar con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el ICBF, el SENA, el Programa Presidencial Colombia Joven y el Ministerio de Hacienda, en articulación con sus

FORMATO INFORME DE RIESGO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT	Código: DPR-PC-04
	Versión: Final
	Página 24 de 26

similares regionales y locales, promover o fortalecer procesos y proyectos que amplíen la oferta educativa y laboral a los jóvenes, otorgándoles otra opción de vida frente a la que vienen representando los diversos grupos ilegales.

- A la Secretaría de Deportes, coordinar con las entidades competentes la adecuación y construcción de espacios en las Instituciones Educativas donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan practicar actividades deportivas que propicien el uso del tiempo libre y prevengan la vinculación de los menores de edad en las actividades ilícitas.

Al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional

- A la Policía Nacional, reforzar las medidas de seguridad para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y organizaciones delictivas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y libertad personal, a la libre circulación de los habitantes de las comunas identificadas en riesgo, de manera particular, en aquellas donde se han establecido las denominadas “fronteras invisibles” y se hallan registrado el mayor número de homicidios y de acciones de violencia.
- Al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Cali, fortalecer el recurso humano y logístico (vehículos, equipos de comunicaciones, etc.) del Comando de la Policía Metropolitana de Cali, que permitan ampliar la presencia policial en las comunas mediante la implementación de nuevos cuadrantes y brindar mayores niveles de seguridad en las zonas focalizadas en riesgo.
- A la Policía Nacional, adoptar medidas para prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales y organizaciones delictivas y de forma especial, implementar medidas para proteger las instituciones educativas que funcionan en las comunas 1; 5; 6; 10; 12; 13; 14; 15: El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16: Mariano Ramos; Comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto Nápoles; Comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén; Comuna 21: Píamos I y II y Potrero Grande, con el fin de evitar la injerencia de los grupos ilegales y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, el consumo y expendio de estupefacientes, entre otras.

A la Fiscalía General de la Nación:

- Fortalecer la planta de fiscales y de policía judicial, para resolver los problemas de congestión judicial y adelantar de manera oportuna y eficaz las investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos de violencia y la judicialización de los presuntos responsables de los crímenes en la ciudad de Cali.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 25 de 26

A la Administración Departamental del Valle del Cauca

- Fortalecer la articulación y coordinación con la fuerza pública, la alcaldía de Cali y la Fiscalía, para garantizar la seguridad y protección de los derechos de la población en las zonas focalizadas en este informe, a través de acciones tendientes a neutralizar y desarticular los grupos armados ilegales y organizaciones delictivas en Cali y realizar evaluaciones periódicas de los avances sobre la situación de seguridad en Cali en las sesiones de los Consejos de Seguridad Departamental.
- Convocar a reuniones del Comité Departamental de Justicia Transicional ampliado para analizar la situación humanitaria de la ciudad de Cali y adoptar medidas tendientes a la protección de los derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de los hechos de violencia.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

- Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado, adoptar las medidas necesarias para la implementación y ejecución de la política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados establecida en el Documento Conpes No 3673 de julio de 2010 y elaborar y ejecutar un Plan de Acción en materia de prevención y atención del reclutamiento forzado con el objetivo de tomar las medidas de protección integrales necesarias para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados ilegales pos desmovilización de las AUC y organizaciones delictivas.

A la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas:

A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, valorar y registrar los casos de desplazamiento intraurbano o intermunicipal generados por los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC en las comunas de la ciudad de Cali y brindar el apoyo a las autoridades locales en materia de ayuda humanitaria de emergencia, estabilización socio económica e implementación de los planes de contingencia para que se adopten las medidas de carácter preventivo frente a eventuales desplazamientos forzados.

A la Unidad Nacional de Protección

- A la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, adoptar medidas de protección que salvaguarden la vida e integridad personal de los líderes comunitarios, dirigentes sindicales y defensores y defensoras de derechos humanos, que sean víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales.

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR-PC-04

Versión: Final

Página 26 de 26

A todas las autoridades civiles concernidas, a la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad y periódicamente, las actuaciones y medidas derivadas de la presente Nota de Seguimiento y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN

Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de
Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH
Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT

**COPIA MINISTERIO DEL
INTERIOR**

Bogotá D.C., diciembre 13 de 2018

Doctora

NANCY PATRICIA GUTIERREZ

Ministra del Interior

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la
Respuesta rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)

Carrera 8 No. 12 B - 31

Ciudad

Referencia: Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros.

Respetada Ministra del Interior:

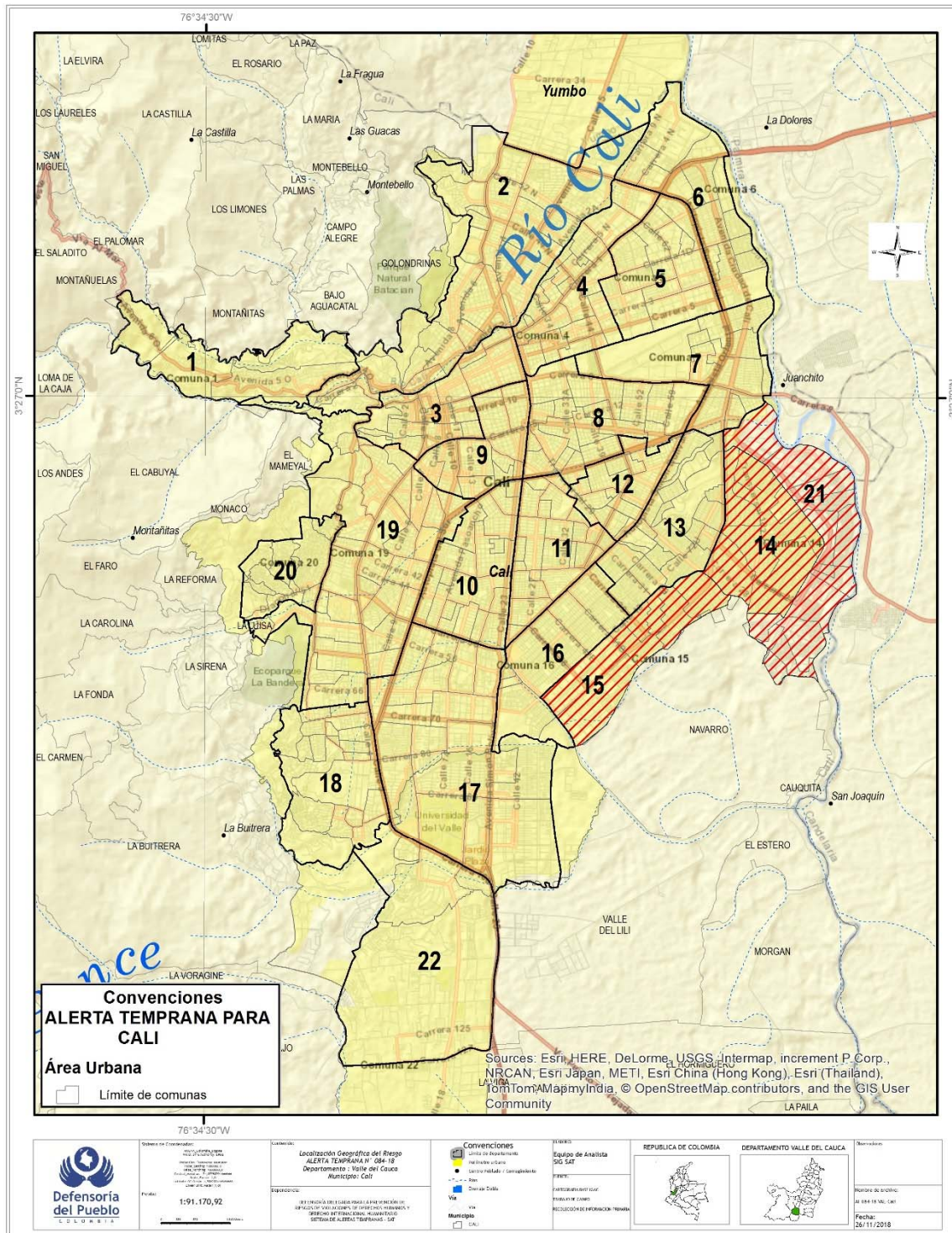
De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2124 de 2017¹, me permito remitir la Alerta Temprana de la referencia, debido al inminente riesgo al que se exponen los moradores de los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, en donde habitan aproximadamente 464.361 habitantes de los cuales 97.285 son menores de edad.²

La población en situación de riesgo habita en los barrios: Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Manuela Beltrán, Marroquín I y II, de la comuna 14; Llano Verde, El Retiro, El Vallado, Mojica y Los Comuneros de la comuna 15; y Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali pertenecientes a la comuna 21.

La ciudad de Santiago de Cali al sur oriente del país es la tercera ciudad más poblada del país con 2.445.000 habitantes aproximadamente, y por extensión la segunda más grande de Colombia con un área de 564 km² y su área urbana está distribuida en 22 comunas.

¹ El Decreto 2124 del 18 de diciembre de 2018: "Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia y acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", define que las Alertas Tempranas son el documento de advertencia de carácter preventivo emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo (Artículo 6). En los casos que la Entidad evalúe que las circunstancias lo ameriten, emitirá Alertas Tempranas bajo el rótulo de riesgo de Inminencia (artículo 15), las cuales son remitidas a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), quien una vez recibida transmitirá de forma inmediata a las entidades nacionales competentes y a las autoridades territoriales para el cumplimiento de sus funciones y la adopción de las medidas necesarias de reacción rápida (Artículo 11).

² Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Oficina SISBEN, Subdirección de Desarrollo Integral, junio de 2018



Carrera 9 # 16-21 Bogotá D.C.
PBX: (57) (1) 3147300 Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
Plantilla vigente desde: en aprobación

Las comunas mencionadas presentan o comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales, Necesidades Básicas Insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales, que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, propicio para su accionar, que se valen de estas particularidades, para penetrar e imponer diversas formas de control sobre estas zonas de la ciudad de Cali, poniendo en especial situación de riesgo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes, en un alto porcentaje son población afrocolombiana; al igual que líderes sociales y gestores culturales, quienes han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas.

Dentro de las comunas mencionadas, los barrios citados arriba son los que presentan más riesgos por tener altos índices de homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento, venta y consumo de sustancias psicoactivas, riñas, la presunta presencia de grupos armados organizados y amenazas a sus habitantes.

El escenario de riesgo se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencia de las FARC-EP, quienes se autodenominan: Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento.

Se remite la presente Alerta Temprana de Inminencia, con el propósito de que se adopten medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, los derechos civiles y políticos y el DIH de esta población geográficamente referenciada en este documento.

I. Antecedentes

Las comunas señaladas y ubicadas al oriente de la ciudad, están relacionadas por padecer problemáticas similares heredadas del conflicto armado y aunadas al desplazamiento forzado que durante años han vulnerado los derechos de sus habitantes provenientes de la costa pacífica nariñense y caucana, el norte del Cauca, Buenaventura, y de otros barrios de la ciudad.

La comuna 21 por ejemplo, durante varios años sufrió con dureza la presencia de la guerrilla de las Farc, que a pesar de hacer presencia en toda la ciudad, lucharon por establecerse en esta zona oriental, ejerciendo control militar e inmiscuyéndose políticamente con los actores sociales por medio del frente o red urbana Manuel Cepeda Vargas, que hacia el año 2002 ya se había logrado establecer completamente en la zona.

Este proceso perjudicó a los habitantes de la comuna, pues el hacerse con la zona, le implicó a las FARC enfrentarse con grupos delincuenciales que operaban bajo el

dominio de los carteles de la droga de Cali y del Norte del Valle, bandas o pandillas que hacían parte de estas organizaciones, luego frente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de alias 'HH', que intentaban tomarse los barrios de norte a sur; y finalmente con la fuerza pública que a partir de las políticas de la seguridad Democrática pretendía recuperar el territorio. Las confrontaciones en estas comunas dejaron en el medio a la población civil que probabilidades de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

A lo anterior se sumó la presencia de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas y la comercialización de armas de fuego, prácticas que se habían establecido con el accionar de los carteles de Cali y del Norte del Valle.

Los hechos que se presentaban en la Comuna 21 no eran aislados, al igual que en esta, las comunas 14 y 15, por ser vecinas, y otros sectores de la ciudad también fueron ocupadas por este y otros grupos armados como la guerrilla del ELN, que hizo presencia por medio del frente urbano Omaira Montoya Henao en las zonas sur y occidental de la ciudad.

Las motivaciones que llevaron a estos a grupos a asentarse en estas comunas, fue las de permear las juntas comunales y socializar sus proyectos urbanos, razones que rápidamente se convirtieron en intereses económicos que estimularon a sus líderes a imponer su control en gran parte de las comunas.

Las dinámicas económicas se recargaron a las prácticas ilegales de los grupos que habían cooptado y que ahora dominaban, y desarrolladas con las estructuras del narcotráfico. Es así que para los grupos armado presentes esta zona de Cali se ofrecía como un espacio propicio para establecer diversas formas de su accionar delictivo, dadas sus características en el desarrollo económico, industrial y su importancia comercial, y por ser receptora del puerto más importante del pacífico, Buenaventura. Prácticas evidenciadas en: secuestros, extorsión, comercio ilegal de armas, narcotráfico, homicidios y oficinas de cobros. Las mismas características económicas y la necesidad de resguardarlas, hicieron que hacia el año 2000 empresarios, ganaderos y narcotraficantes abrieran la puerta a las AUC, con el fin de proteger sus intereses económicos y sus propias vidas, lo que envileció el panorama.

Aunque las comunas de oriente presentaban condiciones de vulnerabilidad, existía una diferencia y era el conflicto armado que diferenciaba a un barrio de otro, o a una comuna de otra, pues en la medida que fueron allanando los espacios en las comunas mencionadas, algunos grupos delincuenciales se identificaron más con unos que con otros actores armados del conflicto en su accionar. Más tarde con la desmovilización del Bloque Calima hacia el 2004, estos espacios fueron objeto de interés de otros grupos delincuenciales, que no dieron espera para ir tomando el control de las zonas dejadas.

Las características socioeconómicas de la población asentada en estas comunas de oriente, contrastan incomprensiblemente con el desarrollo comercial y económico de la ciudad, como la falta de oportunidades laborales o la informalidad de sus empleos, han venido aumentando la vulnerabilidad de sus habitantes, sumado a ello una limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales no reflejados en inversión social, proyectos y programas sociales que redundaran en favor de estas comunidades.

La comuna 14 desde su conformación presentó problemas por el hecho de que las familias que se iban a asentar en el sector, venían estructuradas bajo un núcleo familiar numeroso y se vieron obligadas a habitar viviendas diseñadas para familias urbanas de menor cantidad de integrantes, lo que provocó hacinamiento, sumándose también el problema de convivencia que provenía de haber distribuido las viviendas sin tener en cuenta que quienes las iban a habitar, procedían de sitios con un pasado de grupos en conflicto, lo que profundizaría la crisis que acaeció en riñas y confrontaciones constantes y que luego sería una de las causantes de la aparición de las fronteras invisibles. Las vulneraciones de los Derechos Humanos se fueron incrementando y varias viviendas fueron y vienen siendo arrebatadas para luego convertirse en bodegas de drogas y armas, siendo un lugar estratégico por estar contiguo al corredor del río Cauca.

Poblada también por personas en condición de desplazados, la comuna 15 ha sido un territorio golpeado por la violencia en donde sus habitantes han visto vulnerados sus derechos constantemente, la situación de conflicto estuvo protagonizada por milicias populares las FARC-EP concentrados con mayor intensidad en la zona de Marroquín, en el distrito de Agua Blanca, igualmente pandillas juveniles, grupos de limpieza social, bandas de distribuidores de droga y de sicarios. Las anteriores características y la ausencia del dialogo y la conciliación, han conservado un ciclo de violencia en la comuna, en el que un contexto cargado de factores negativos como, la marginalidad, las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades, la salud, la educación, la vivienda y el desempleo no permite la superación de vulnerabilidades, por el contrario las amenazas son cada vez mayores, si se tiene en cuenta que las practicas delincuenciales mutaron a unas más estructuradas y difíciles de rastrear, y que a su vez generan más daño a los habitantes.

El trabajo inicial de las milicias de las FARC-EP en estas comunas consistió básicamente en brindar seguridad a los habitantes, ante los graves hechos de delincuencia y bandolerismo al que estaban expuestos. Asumir el control territorial, desplazando a las bandas delincuenciales les permitió avanzar con confianza en el afianzamiento de sus objetivos políticos a través de las organizaciones sociales de base.

En cuanto a la comuna 21 un factor que ha impactado al sector por varios años, es el Jarillón del río Cauca que circunda a la comuna, y que deviene en problema social histórico pues desde su construcción hacia 1973, la zona atrajo asentamientos

subnormales en su mayoría de población afrodescendiente desplazada por la violencia de la región pacífica de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que ya traían problemas entre ellos desde su lugar de origen, sobre todo estos últimos. Estas dificultades terminaron por involucrar a toda la comunidad, provocando desplazamiento intraurbano a manos de bandas que se crearon o que se unieron con otras ya existentes y que penetraron en el sector, lo anterior llevó a que la demanda de armamento creciera y el fenómeno del tráfico y la fabricación de armas se detonara.

Para las tres comunas casi que se establece que desde su creación el mayor flagelo padecido han sido los homicidios, y que las pandillas que operan en el sector, han estado conformadas por hombres de edades entre los 9 y 25 años.

II. Escenario Actual

Con la salida de las FARC-EP de los territorios descritos, con el fin de cumplir con el proceso de dejación de armas y reincorporación, las milicias en Cali fueron desarticuladas, sin embargo, algunos miembros no se acogieron al proceso de negociación y actualmente podrían estar integrando los grupos armados ilegales que operan en estas comunas.

En una gran mayoría un porcentaje importante de los habitantes en las comunas 14, 15 y 21 de Cali, se caracterizan por tener la condición de víctimas del conflicto armado, no en vano se le ha denominado a Cali la capital del posconflicto; en ese mismo sentido en estas comunas hay excombatientes quienes pertenecieron a grupos armados ilegales que fueron reubicados en varios barrios de estas comunas. En los barrios de las comunas referenciadas las comunidades se ven expuestas a conductas vulneratorias de derechos humanos, desde hurtos hasta homicidios, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, presuntamente integradas por personas que hicieron parte del proceso de dejación y reincorporación, pero que hoy han decidido volver a delinquir; y otros que definitivamente se declararon en disidencia y continuaron ejerciendo el trabajo que adelantaban con las milicias, y cuyo objetivo era la expansión territorial y control sobre las redes en el negocio ilegal del narcotráfico y de otras actividades ilegales, ahora aprovechando el espacio dejado por los desmovilizados.

En este contexto, con el fin de disputar el control territorial en las comunas y barrios referenciados, los grupos armados ilegales, presuntos miembros de las “Guerrillas Unidas del Pacífico” un grupo en disidencia de las FARC-EP, y presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), vienen adelantando ejercicios de control en los barrios y comunas, tales como: extorsiones, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, instrumentalización, restricciones a la movilidad (fronteras invisibles), homicidios y desplazamientos forzados intraurbanos; lo que repercute en la falta de garantías de los derechos de la población. Los niños, niñas y adolescentes de los barrios señalados, son víctimas de reclutamiento forzado de estos grupos

armados ilegales, estimándose que este tipo de prácticas son causantes de una notoria deserción escolar, que merece especial atención. Para esta población se encuentran bajo amenaza los derechos fundamentales y pueden configurarse posibles violaciones a los derechos humanos en las comunas 14, 15 y 21 de Cali.

De hecho, los habitantes de los barrios de las comunas 15 y 21, vienen siendo objeto de acciones que atentan y lesionan sus derechos, presentándose homicidios y amenazas a quienes contrarían sus órdenes. También se presenta instrumentalización de menores de edad en actividades ilegales, quienes son “incentivados” con el ofrecimiento de dadas o promesas de empleo en la zona de la costa pacífica sur del país por parte presuntamente de las Guerrillas Unidas del Pacífico.

Las Autodefensa Gaitanistas de Colombia-AGC están en este escenario, aunque las versiones de los representantes de la fuerza pública sostengan que la presencia y denominación de estos sea errada, los habitantes de los sectores en cuestión, afirman que pueden estar disputándose y controlando zonas y grupos de delincuencia organizada. Al respecto se han presentado situaciones de alarma como la circulación de panfletos amenazantes a líderes y habitantes de las zonas estudiadas, lo que ha conducido al desplazamiento intraurbano o a la revictimización. A comienzos del año se advertía ya en algunos medios de la presencia de las AGC en la ciudad; “Amenazas de paramilitares en Cali hacen parte de una ofensiva nacional. El bloque suroriental del pacífico de la AGC, el pasado 15 de enero, declararon mediante un panfleto el inicio de una arremetida contra los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en esa ciudad”.³

La zozobra que se funda alrededor de los líderes sociales por el miedo a ejercer labor social y la tensión en los habitantes que tienen conocimiento de la presencia de estos grupos en los barrios, y la incertidumbre de saber que en cualquier momento pueden presentarse enfrentamientos entre estos, mantiene en vilo a la comunidad. Las amenazas se reafirman en los últimos días como se dio a conocer con la siguiente nota: “Circulan amenazas de ‘Gaitanistas’ en Valle del Cauca. El documento, que es presentado como un comunicado a la opinión pública y que inicia con un encabezado que reza ‘*Por una Colombia Madre Patria para todos*’, señala que las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) ya han empezado el exterminio de ratas izquierdistas, activistas de derechos humanos y del proceso de paz, líderes indígenas, miembros del Congreso de los Pueblos, sindicalistas y colaboradores de la guerrilla”.⁴

Con la misma intención en el mes de mayo se dio a conocer una amenaza por parte del mismo grupo específicamente en el barrio Llano Verde de la comuna 15 cuando a la sede de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) llegó un paquete con algunos elementos y un panfleto que señalaba: “‘Declaramos muerte

³ Ver: <https://prensarural.org/spip/spip.php?article22628>

⁴ Ver: <https://verdadabierta.com/circulan-amenazas-de-gaitanistas-en-valle-del-cauca/> Sábado, Octubre 27, 2018

a negros guerrilleros hijos de puta pertenecientes a Afrodes Cali colaboradores de la guerrilla". Y remata: "Los perseguiremos hasta matarlos uno a uno (...) declarados objetivos militares, vuelvan a sus territorios a vivir con las Farc' ".⁵ Al respecto cabe anotar que las comunas 14 (51.1%), 15 (49.9%) y la 21 (44.7%) presentan las concentraciones de población afro más altas de la ciudad, aún por encima de la población no auto reconocida en otras categorías que entendemos como blanca/mestiza.⁶

La comuna 14 está conformada por 12 barrios y su población se estima en 170.909 habitantes, con altas vulnerabilidades se destacan los barrios José Manuel Marroquín I y II, Manuela Beltrán, Las Orquídeas y Alfonso Bonilla Aragón, la exclusión y la estigmatización, la tasa de homicidios históricamente ha sido la más alta en la ciudad y el problema de las bandas y pandillas organizadas, no ha podido ser neutralizado, la venta de sustancias psicoactivas no solo ha ido en crecimiento, y las practicas ligadas al circuito económico que la sostiene se refleja en prácticas de abuso como los préstamos, las oficinas de cobro, las extorsiones, la fabricación y comercio de armas, la receptación, los hurtos en todas sus modalidades y por supuesto el narcotráfico, hoy con su estrategia de microtráfico alrededor de instituciones educativas representa un gran riesgo a la población dicente y conforma nuevas tácticas a la que le están apostando las organizaciones delincuenciales. Por otra parte, la problemática de movilidad en la comuna, que no cuenta con las rutas necesarias del MIO, acentúa aún más las vulnerabilidades, pues las distancias que muchos de sus habitantes deben recorrer para acceder al servicio, los expone a atracos que en algunos casos llegan a ser mortales. De igual manera se registra comisión de delitos como la extorsión y el hurto a motocicletas, entre otros.

De acuerdo con las cifras, durante el primer semestre de 2018, se presentaron 600 homicidios, 23 más que en el mismo periodo de 2017, en donde se registraron 577 casos,⁷ representando un incremento de 3.99%. Lo anterior hizo que las autoridades se volcaran en el estudio de la problemática en el sector y posibles métodos de apaciguar la violencia.

Ahora bien, en el periodo comprendido entre enero-junio de 2018 las comunas que registraron incrementos en el número de homicidios fueron las comunas 14, 8, 7, 10, 6, 17, 18, 3, 16, 20, 5 y 12. Se destaca el caso de la comuna 14 donde, en este primer semestre de 2018 se han registrado 63 homicidios, es decir 18 más de los 45 perpetrados en el mismo periodo de 2017.⁸

⁵ Ver: <http://pacifista.co/amenazan-de-muerte-a-los-lideres-afro-de-cali/> Publicado mayo 31, 2017 En Conflicto, Proyecto Homicidios

⁶ Ver: <http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7111>

⁷ Fuente: Comité interinstitucional de muertes por causas externas - OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DE Cali junio 2018.

⁸ Ibidem.

La comuna 15 está compuesta por nueve barrios, tres urbanizaciones y sectores, su población se calcula en 159.369 habitantes aproximadamente. Esta comuna posee 948 manzanas, establecimientos educativos 53, con un total de 10.551 estudiantes matriculados. Estaciones de policía 1 y Centros de Atención Inmediata ninguno.⁹

Ubicada en una de las zonas más excluidas de la ciudad de Cali, en la comuna 15 se encuentran barrios como Llano Verde, El Retiro, Mojica y Los Comuneros en donde se puede analizar el componente económico ligado a las mismas dinámicas expuestas para las comunas 14 y 21, pues sus actores delincuenciales aplican las mismas tácticas, incluidas las nuevas modalidades de extorsión vía WhatsApp.

A finales del mes de mayo se pudo establecer con la captura de varios integrantes de una de las bandas más reconocidas del sector, “Los Principal”, que se dedicaban a la extorsión en el barrio Llano verde, que de los 13 capturados, 7 eran menores de edad y cobraban de tres mil a veinte mil pesos a pequeños y medianos comerciantes. Lo anterior alerta sobre la utilización de menores para este tipo de acciones lo que vulnera gravemente sus derechos.

El homicidio, de la misma forma preocupa a los moradores, las autoridades civiles y militares señalan que solo en el pasado mes de abril, la comuna presentó once casos de muerte violenta, y en lo que va corrido del año las muertes ascienden a 61.

Aunque la percepción que se tiene respecto del barrio Llano Verde y de otros barrios de las otras dos comunas la 14 y la 21, es que sus bases se cimentan en un origen común: experimentaciones urbanas de construcción de paz y reconciliación. Los habitantes de estos sectores conviven con este ambiente de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario que el paso de los años ha multiplicado y que las autoridades civiles y militares no han logrado neutralizar. Influye mucho el contexto en el que se tienen que desarrollar las familias que generalmente son inmigrantes y que el paso de su lugar de origen a la ciudad les representa un cambio drástico en sus vidas, teniendo que acoplarse a otras estructuras en las que la supervivencia se convierte en la meta. Un alto número de madres cabeza de familia, abandonadas por sus parejas o viudas porque sus esposos fueron víctimas de la violencia, deben afrontar el día a día entre sus casas y el trabajo en la mayoría de ocasiones informal, o de rebusque, apartándose de sus hijos desde temprana edad durante el día, lo que los expone a crecer en la calle rodeados de problemáticas como las drogas o el pandillaje.

La comuna 21 se ubica en el extremo oriente de la ciudad y está compuesta por diez barrios y seis urbanizaciones o sectores con 1.218 manzanas. Su población está estimada en 112.336 personas y las viviendas construidas en 29.277 unidades. Los

⁹ Fuente, Datos Abiertos, Gobierno Digital Colombia, corte a 29 de enero de 2018, en <https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Informaci-n-de-la-Comuna-21-de-Cali-a-o-2015/vk2x-qpx4>

barrios identificados con mayores dificultades son: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz.

Las condiciones de vulnerabilidad social se relacionan con fenómenos similares a los ya expuestos para las comunas 14 y 15 como: la inseguridad, el tráfico de estupefacientes, comercio ilegal de armas y explosivos, presencia de pandillas, los hurtos y los atracos. Los menores de edad son utilizados en las redes asociadas con el negocio ilícito de narcotráfico al menudeo, la prostitución y el sicariato, cuyos integrantes hacen parte de grupos delincuenciales dedicados a la extorsión a comerciantes, al cobro de exacciones a cambio de “protección” y al cobro excesivo de intereses por los préstamos del sistema llamado “gota a gota”.

Ante todos estos actos que atentan contra los derechos humanos, los habitantes piden presencia constante de la autoridad con el fin de que les brinden seguridad, o reclaman la reubicación de sus viviendas como una salida a sus precarias condiciones.

En cuanto a los factores sociales ya mencionados, en la zona del Jarillón del río Cauca, confluyen todo tipo de dinámicas delincuenciales, las cuales son alimentadas por tres factores, fundamentalmente: En primer orden: La constitución del hábitat del sector con la instalación de casas de forma ilegal, que ha sido replicado constantemente por personas en similares situaciones de desplazamiento y de vulnerabilidad, quienes optaron por reproducir la práctica de expansión ilegal de viviendas en la Comuna 21; en segundo lugar: con aumento poblacional en los barrios constituidos de forma ilegal, en condiciones precarias de vulnerabilidad social, un mayor número de jóvenes alimentan las dinámicas delincuenciales, al ser estos cooptados por pandillas y redes de narcotráfico al menudeo; como tercer aspecto: con el correr del tiempo, se ligaron a estas prácticas, otras como la extorsión y el sicariato, auspiciadas por las “oficinas de cobro” de la zona, haciéndose este fenómeno difícil de erradicar,

En cuanto al escenario de riesgo de amenazas, estas son proferidas hacia los jóvenes que ejercen actividades culturales y los líderes comunales que lideran este tipo de procesos, y la motivación de dichas amenazas, es la negativa de los adolescentes y jóvenes a no hacer parte de grupos armados ilegales, lo que los ubica en franca oposición a los objetivos de estas organizaciones delincuenciales.

La presencia de milicianos del ELN y de las Guerrillas Unidas del Pacífico, sumado a los altos índices de vulnerabilidad en que actúan los jóvenes, propicia el ingreso de éstos a los grupos armados ilegales, y si estos últimos hacen notar su negativa a participar en actividades ilícitas, son amenazados e intimidados directa o indirectamente. Quienes acceden a las pretensiones de los grupos armados ilegales, bien sea por medio de ofertas de trabajo a realizar en la zona de la costa pacífica nariñense, como militantes del grupo o como colaboradores en las actividades y

negocios que estos grupos controlan, asociadas al comercio de gasolina, o, a la minería ilegal en algunos municipios de la costa nariñense.

Al respecto es necesario registrar un hecho que reviste notoria gravedad, acontecido el día 20 de marzo de 2018 en el barrio Valle Grande, en el que un gestor cultural fue víctima de atentado en contra de su vida cuando se encontraba en la velación de un compañero, al igual que él, gestor cultural. Estando en dicho lugar, ingresaron desconocidos que le dispararon en repetidas oportunidades. El gestor logró escaparse gracias a la ayuda de vecinos del sector. Hoy debido a las amenazas de las que era y es víctima por parte de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Guerrillas Unidas del Pacífico, lo han convertido en desplazado intraurbano.

En idéntico contexto, es clave mencionar que, en el mismo sector, en diciembre de 2017, fueron reclutados 6 jóvenes entre 19 y 24 años de edad, y por los mismos grupos armados, presuntamente miembros del ELN y/o las Guerrillas Unidas del Pacífico. Los hechos mencionados generan graves vulneraciones al derecho a la vida, integridad y seguridad de la población.

Todo lo anterior apunta a señalar a los grupos armados ilegales ya mencionados en asocio con bandas del lugar, como los posibles hacedores de las diferentes formas delincuenciales enmarcadas en mercado de armas, expendio y tráfico de estupefacientes y extorsiones, que unidas a las adelantadas por las bandas y pandillas, las oficinas de cobro y el sicariato, por una parte, acrecientan más las amenazas a la población y por otra hacen ir rastreables los nexos entre unos y otros. Los mencionados son entonces, los objetivos del fortalecimiento y control de las economías ilegales de varios barrios de la comuna 21.

La presencia entonces en estas zonas de los grupos armados ilegales obedece igualmente al interés de control territorial de economías subterráneas, entre ellas el tráfico y venta de estupefacientes a nivel narcomenudeo, extorsiones a comerciantes, incluso a pequeños e informales vendedores (micro extorsión), prestamos gota a gota y tráfico de armas.

Hechos monitoreados desde el SAT soportando la descripción de la presente alerta:

Fecha	Descripción
29/05/2017	Tres muertes violentas se registraron entre la madrugada y la noche del domingo en el barrio Comuneros de la comuna 15, La primera acción violenta se presentó en una zona de invasión en donde sujetos armados ingresaron hasta a una vivienda en donde se realizaba una fiesta y dieron muerte a la señora Efigenia Márquez de 55 años de edad. En la Carrera 30 A con Calle 55 desconocidos dieron muerte con arma de fuego a Marino Chamorro Muñoz de 48 años. Finalmente, en

Fecha	Descripción
	una zona de invasión de nombre La Florida murió víctima de disparo un menor de 16 años por causas que son materia de investigación.
26/11/2017	En la tarde de este domingo una mujer murió en el barrio Potrero Grande y otra persona resultó lesionada a causa de un cruce de disparos entre integrantes de bandas delincuenciales. La víctima, de 50 años, era pequeña comerciante del sector.
25/04/2018	En operativo adelantado por La Policía Metropolitana de Cali en el barrio Potrero Grande de la comuna 21, se llegó a la captura 16 presuntos integrantes de una banda conocido como 'Barrio taller', que con hechos de extorsión tenían azotados a diferentes sectores del oriente de la ciudad. Presuntamente, los habitantes de este sector eran objeto de extorsiones a cambio de una supuesta vigilancia. Quienes se negaban a estas pretensiones eran obligados a abandonar sus viviendas después de reiteradas intimidaciones. Estas personas serían responsables de delitos como extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego, entre otros.
18/03/2018	A las 2:00 de la madrugada en el barrio Laureano Gómez de la comuna 15 de la ciudad, La Policía informó que un menor, de unos 16 años, fue atacado a bala y murió en el hospital Carlos Holmes Trujillo
18/03/2018	Es asesinado en el barrio Llano Verde un gestor cultural, afrodescendiente de 27 años, fue ultimado por desconocidos que le propinaron 4 disparos.
13/05/2018	En el barrio los Comuneros de la comuna 15, siendo las 2:45 de la tarde, es asesinado un hombre al que le dispararon desconocidos.
20/03/2018	Es víctima de atentado el gestor cultural Jeison Cuellar, cuando se encontraba en el velorio de su compañero, narra que desconocidos que ingresaron en la casa de habitación en donde se llevaba a cabo la velación, le dispararon en repetidas ocasiones, logrando escaparse gracias a la ayuda de vecinos del sector y sin heridas graves. Los hechos mencionados tuvieron lugar en el barrio Valle grande, en horas de la noche.
28/04/2018	Niños con sueldo y Patrón para Delinquir, es un titular de uno de los diarios de circulación local que aparece este día, en donde se advierte que muchos menores de diez años de edad, habitantes de las comunas 14, 15 y 21 están siendo reclutados por organizaciones criminales poniéndoles sueldo y dotación. La alerta sobre este fenómeno que se está

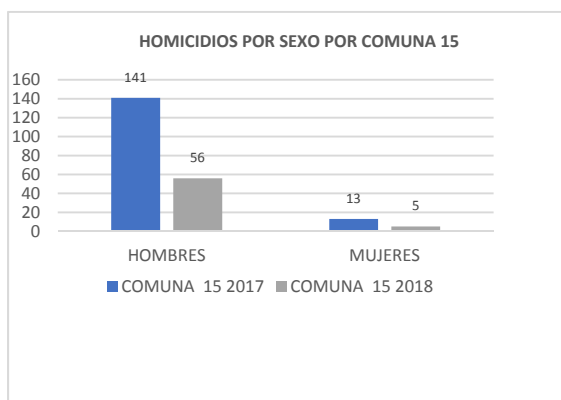
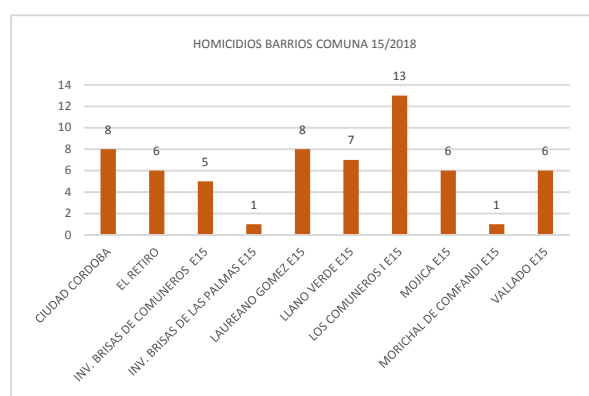
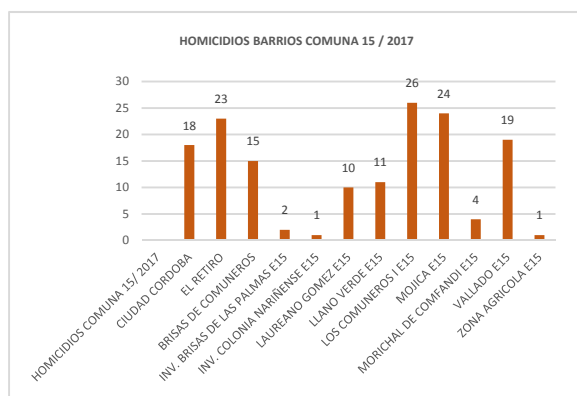
Fecha	Descripción
	viviendo en estas comunas ubicadas al oriente de Cali, la hizo la directora de la fundación Paz y Bien, quien viene trabajando desde hace varios años en favor de la población infantil.
05/08/2018	Un taxista que respondía al nombre de Willinton Bedoya Castaño de 42 años de edad y quien transitaba a la altura de la carrera 28F con calle 80 del barrio Mojica de la comuna 15 de Cali, fue interceptado por hombres desconocidos quienes con arma de fuego le causaron la muerte. Así mismo, en los barrios el Retiro y las Brisas de la misma comuna murieron violentamente Wilber Alexander Sánchez y Brayan Alexis Lozano.
07/08/2018	Autoridades reportaron explosión de un artefacto lanzado por desconocidos contra el CAI de Policía de Mojica, en la comuna 15 del oriente de Cali.
09/08/2018	Lanzan explosivos contra CAI de Policía en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, de la comuna 14 al oriente de Cali.
13/08/2018	Investigan presunta responsabilidad de policías en muerte de una mujer en el oriente de Cali
10/09/2018	En el barrio Las Orquídeas de la comuna 14, fue muerto por arma de fuego el niño de 12 años Camilo Vivas en extrañas circunstancias que son objeto de investigación.
24/09/2018	En el barrio Marroquín II comuna 14 fue asesinado con arma de fuego Carlos Andrés Vera de 37 años, fue trasladado al hospital Joaquín Paz Borrero, donde falleció, móviles y agresores en investigación. Barrio Manuela Beltrán C 14, fue asesinado Stiven Ambuila Ararat de 28 años, por herida de arma de fuego, trasladado al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde falleció, móviles en investigación, agresor capturado.
24/09/2018	En el barrio Potrero Grande comuna 21, es asesinado con arma de fuego Héctor Fabio Paredes Solís de 31 años, móviles y agresor en investigación. En el mismo barrio, a las 7:40 pm es asesinado Leonardo Rodríguez Caicedo de 43 años con arma de fuego, móviles y agresor en investigación.
01/10/2018	Es asesinado por bala perdida de un enfrentamiento de bandas en el barrio Llano Verde de la comuna 15, Miller Andrés López Rivas de 26 años de edad, la víctima ejercía labor social con jóvenes del sector. Alerta que la víctima fue impactada por una bala que en su punta se encontraba impregnada de cianuro.
04/10/2018	En el Barrio Marroquín I de la comuna 14 es asesinada una menor de 14 años de nombre Valentina Rodríguez, según las autoridades, la muerte de esta niña se daría por

Fecha	Descripción
	retaliaciones entre pandillas de los barrios Manuela Beltrán y Marroquín I.
05/10/2018	En el barrio Comuneros I de la comuna 15 fue hallada por personal de la policía, la cabeza de un ser humano que en vida respondió al nombre de Alex Ortiz Perea de 18 años. Las hipótesis policiales apuntan a presuntas casas de pique en el sector.
11/10/2018	En el barrio Capri de la comuna 17, fue asesinado Juan Fernando Velasco Angulo, la víctima hacía parte del Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Cauca COPDICONC, y era el esposo de Alexandra Ordoñez, quien en la actualidad hace parte del equipo de derechos Humanos en la misma organización.
05/11/2018	En el barrio Mojica de la comuna 15, fue baleado Óscar Mina Meza de 50 años. El hombre fue llevado al Hospital Carlos Holmes Trujillo donde falleció por la gravedad de las heridas.
09/11/2018	En el barrio Comuneros I de la comuna 15, fueron asesinadas cuatro personas, que respondían a los nombres de Daniel Rivas Rentería, Aldemar Tenorio, Dagoberto Rentería Caicedo y Jesús Harley Murillo. El agresor fue detenido y las hipótesis policiales apuntan a que pudo deberse a una retaliación por parte del agresor, debido a que venía siendo objeto de extorsión por parte de los asesinados pertenecientes a una banda.
09/11/2018	En el barrio Potrero Grande de la comuna 21, fue asesinado Géminis Adonis Quiñones Ángulo, de 36 años de edad, las hipótesis policiales se inclinan por un posible ajuste de cuentas entre pandillas. En el barrio Desepaz de la comuna 21, en la Calle 120A con Carrera 20, conocida como la 'Calle del humo' fue asesinado un menor de edad de 16 años, con arma de fuego.

Se aportan las estadísticas de la Policía Nacional, para el año 2017 en cuanto a homicidios en la zona se refiere. Para la comuna 21 se presentaron un total de 104 casos registrados. Para el año 2018 y con corte al día 15 del mes mayo; un total de 35 casos. En total la suma de homicidios para los dos años en mención, es de 139 casos, de los cuales 131 casos fueron ejecutados en contra de hombres y 8 en contra de mujeres. Aunque a la fecha se nota una disminución del número de casos de homicidios para la comuna según el informe del Programa "Cali como vamos" en el

que se destaca a la comuna por presentar 10 casos menos que el mismo periodo del año pasado¹⁰, la percepción de inseguridad es mayor en sus habitantes.

Para la comuna 15 la estadística nos dice que; para el año 2017 se registraron un total de 154 homicidios, y para el año 2018 aparecen 61 casos registrados. La suma arroja un total de 215 casos, en donde 197 se perpetraron en contra de hombres y 18 en contra del género femenino.



Fuente: Policía Nacional. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

Las comunas descritas han venido durante largo tiempo concentrando el mayor número de homicidios y aunque a la fecha se registran menos casos en relación al año inmediatamente anterior, la zozobra se cierne sobre sus habitantes.

Así, a partir de las descripciones anotadas es posible prever que existe un inminente escenario de riesgo para la población civil que habita los barrios José Manuel Marroquín I y II, Manuela Beltrán, Las Orquídeas y Alfonso Bonilla Aragón de la comuna 14, Llano Verde, Los Comuneros, Mojica y El Retiro de la comuna 15, y los barrios Potrero Grande, Valle grande y Desepaz de la comuna 21 y que dicha

¹⁰ Informe del programa Cali como Vamos en: <https://90minutos.co/homicidios-en-cali-han-crecido-en-un-8-durante-2018-25-06-2018/>

población pueda ser objeto de múltiples violaciones de derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, por medio de amenazas, métodos para generar terror en la población civil como panfletos, llamadas, mensajes en redes sociales, correos electrónicos, etc.; asesinatos selectivos, desplazamientos individuales y masivos, y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, restricciones a la movilidad, confinamientos, violencia sexual y afectaciones de la población civil como efecto indiscriminado de las acciones bélicas, entre otras. Tal escenario se conforma por la presencia de presuntos integrantes de grupos armados ilegales como son; el ejército de liberación nacional (ELN), el grupo declarado en disidencia de las FARC, Guerrillas Unidas del Pacífico, y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que igualmente bajo la práctica de instrumentalización, estarían violando los derechos a esta población.

A lo anterior se suma la presencia de otras estructuras armadas que afectan las zonas descritas, con prácticas como, las extorsiones a pequeños y grandes comerciantes, fabricación y mercado de armas, expendio y tráfico de estupefacientes en donde son utilizados los niños, así mismo la presencia y accionar de las oficinas de cobro que se encuentran ligadas a dinámicas de prestamistas gota a gota, y que para respaldar sus negocios recurren a estas mediante amenazas, y el sicariato.

En lo que hace referencia al componente estructural y organizativo de estos últimos grupos, se puede observar que no es tan jerárquico como en tiempos pasados, con las organizaciones de los carteles de la droga que operaban en la ciudad, estos son más dinámicos, acordes a las estructuras y manejos de las economías ilegales, por lo tanto, sus alcances se proyectan en redes, en donde las bandas y pandillas organizadas, reconocidas por su control, cobran vital importancia. De esta manera, el modus operandi consiste en cooptar y vincular a los menores de edad que participan de las pandillas, y de esa forma poder garantizar el control territorial y poblacional en los sectores frágiles al expendio de drogas, al tráfico y microtráfico de éstas, y al negocio ilegal de armas, este método de tercerización deviene en que, es la población más vulnerable y joven de los sectores mencionados, la que se convierte en presa fácil de los actores ilegales.

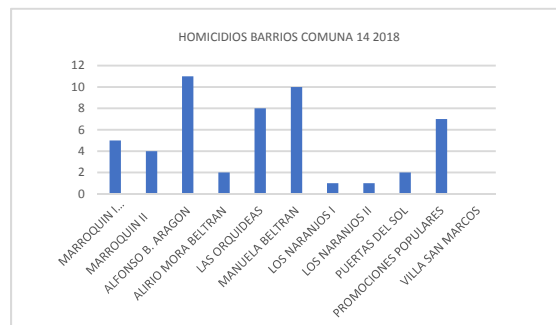
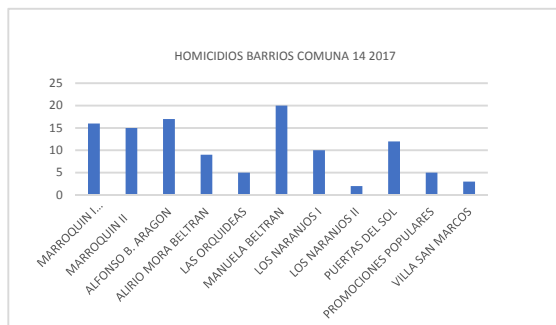
El escenario descrito afecta principalmente a los menores de edad, sujetos de especial protección constitucional que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica como la población afrocolombiana, líderes y lideresas sociales, de igual forma a la población estigmatizada objeto de amenazas.

La ciudad de Cali para el año 2018 ha venido presentando un comportamiento con profundos problemas de violencia. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad de Cali, en el primer semestre de 2018 se registraron 604 homicidios en Cali, cifra que representó un aumento de 1,5% frente al mismo periodo de 2017.¹¹

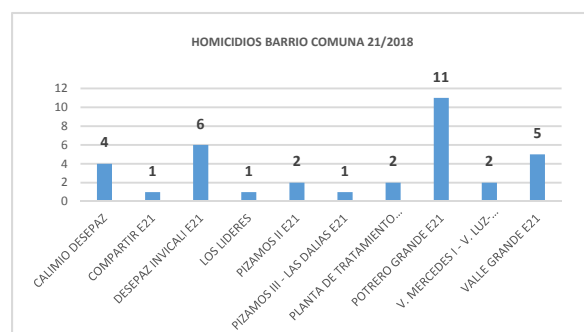
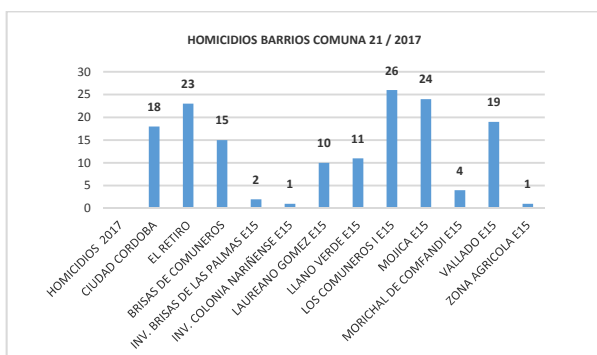
¹¹Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali - Cálculos Cali Cómo Vamos file:///D:/NEW%20E%2021-05%20backup%20all/DEFENSORIA/Comunas/boletin%20de%20seguridad.pdf

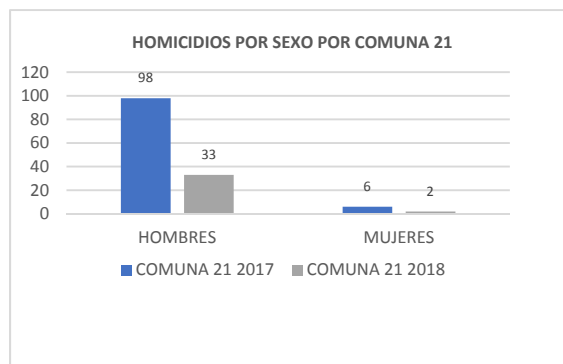
Aunque las autoridades y los entes administrativos expresan a los medios un parte de tranquilidad por una baja en los homicidios en algunos meses respecto de las cifras para el año inmediatamente anterior, la percepción el desasosiego y las vivencias son más altos que lo que demuestran las cifras para este año.

Tabla 1. Número de homicidios en Cali por comunas Primer semestre (2017- 2018)



Fuente: Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL





Fuente: Policía Nacional. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

Homicidios

“En Cali hay una tasa de 52,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, considerada una de la más alta del país”.¹²

Las practicas mencionadas terminan trascendiendo a escenarios en los que los derechos de la población civil se ven estrechamente comprometidos, como los desplazamientos intraurbanos, y las extorsiones en todos los niveles (micro extorsión), así mismo “contribuciones” impuestas por “prestar seguridad”, por ser propietario de un local comercial, incluso para poder movilizarse. Todos estos tipos de extorsión traen sobre entendido el mensaje de control territorial y de exigencia de condiciones de los grupos armados.

Los grupos armados puede que continúen con la intención de establecer control territorial sobre los barrios más vulnerables y que dicho control social, a su vez pretenda infundir miedo y desplazar del imaginario comunitario el ejercicio de la institucionalidad en cuanto a seguridad se refiere. De esta forma se expresan a partir de supuestos en los que su presencia, justifica la ausencia y efectividad en diferentes espacios del Estado.

Por otra parte, sus ofrecimientos de prestar seguridad y alternativas en consecución de recursos económicos pretenden calar sobre todo en la juventud y en espacios en los que son indiscutibles las necesidades económicas de sus pobladores.

Preocupa entonces que, ante tanta vulneración de derechos, los habitantes hayan decidido armarse y que piensen en seguir haciéndolo como mecanismo de defensa de sus propiedades y de sus propias vidas, y como respuesta a la ausencia de la fuerza pública y la baja efectividad del sistema judicial, argumento que, por un

¹² Ver <http://www.elpais.com.co/judicial/que-dicen-las-autoridades-sobre-los-homicidios-del-pasado-fin-de-semana.html>

lado, continuaría disparando el tráfico de armas y por otro, acrecentaría la ola de violencia que padece la ciudad.

Es ineludible advertir que el conflicto social de la violencia no se queda solo en estas comunas y que de no ser controlado adecuadamente se seguirá desplegando por sus corredores a comunas como la 7 y la 6, lo que implicaría un despliegue de las mismas actividades delincuenciales descritas, y el poner a la población en condición de vulnerabilidad en sectores que aún no presentan a este nivel los estragos del accionar delictivo.

Los habitantes de las tres comunas monitoreadas, exigen la implementación de programas sociales y la presencia de instituciones que enriquezcan el panorama social de las comunas, pues el fenómeno delincencial y de violencia crece ostensiblemente, por lo tanto se requiere de un especial acompañamiento psicosocial y comunitario, de acciones localizadas que permitan prestar los elementos educativos correctos, que se facilite la integración vecinal y la construcción de bases de convivencia contra la imposición de fronteras imaginarias y la ilegalidad, y que las necesidades básicas sean verdaderamente intervenidas a fin de desplazar las afectaciones que han conducido a esta población al desastre. Así entonces, mientras la ciudad de Santiago de Cali continúe siendo el eje geopolítico del narcotráfico del sur occidente colombiano y las prácticas delincuenciales no encuentren freno en las autoridades; y las dinámicas de una población desplazada se encuentren rodeadas de vulnerabilidad, no se apreciarán cambios sustanciales en la superación de sus afectaciones.

Por todo lo anterior, de no tomarse las medidas de respuesta rápida podrían materializarse los escenarios de riesgos anteriormente descritos, por lo tanto, se hacen las siguientes recomendaciones.

III. Recomendaciones

De acuerdo a la situación de riesgo indicada, se solicita a la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir los riesgos y amenazas.

1. A la alcaldía de Santiago de Cali y a la Gobernación del Valle, en coordinación con la Fuerza Pública, implementar medidas de protección para garantizar la vida, libertad e integridad de la población civil que se ubica en los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas y las demás acciones violentas de los

grupos armados ilegales, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.

2. A la policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la SIJIN, Policía Judicial y Fiscalía, fortalecer e intensificar las acciones de inteligencia que permitan la captura y judicialización de las personas responsables de la instrumentalización de los jóvenes hacia los municipios ubicados sobre la zona costera nariñense con el propósito de ser vinculados a los grupos armados ilegales que hacen presencia en esa región del país, así mismo para que ejerza control en las zonas urbanas y periféricas de las comunas 21 y 15 de la ciudad, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas y las demás acciones violentas de los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.
3. A la alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle en coordinación con la policía metropolitana de Cali, la implementación de cámaras de seguridad en los barrios y zonas registradas en este documento.
4. A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, implementar medidas que restrinjan el porte de armas de fuego en los barrios geográficamente descritos en este documento, fortalecer los recursos logísticos de las unidades de Policía ubicadas en esas zonas y reforzar los patrullajes en horas nocturnas, con el objetivo de hacer efectivas las restricciones al porte de armas de fuego.
5. A la alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la Personería Municipal y la UNP, para que se evalúe de manera urgente la situación de los líderes comunitarios, así mismo implementar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de la población señalada en riesgo y que estas medidas sean establecidas en consulta con las víctimas de manera individual y colectiva. Se sugiere la activación de espacios de coordinación institucional, encabezados por la alcaldía municipal en cada comuna para que se promueva de manera articulada y eficaz las medidas individuales y colectivas de protección. Se solicita, además, diseñar y aplicar medidas de protección individual y colectiva, especialmente orientadas a personas de especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad, como las comunidades afrocolombianas y desplazadas.
6. A la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT del Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en el presente documento.

7. A la alcaldía Municipal de Cali y la personería municipal, implementar espacios de dialogo con las organizaciones de derechos humanos en las comunas descritas para identificar problemas potencialmente generadores de violación a los derechos humanos, así como requerir a las autoridades competentes la activación y concertación de medidas de protección de carácter colectivo, tendientes a neutralizar o mitigar el riesgo.
8. A la consejería presidencial de derechos humanos y DIH, como secretaria técnica de la comisión Intersectorial para la Prevención del reclutamiento y utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, (CIPRUNNA) promover acciones de coordinación entre la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal y el ICBF a fin de lograr una activación y aplicación efectiva de las rutas existentes en materia de prevención temprana, urgente y en protección del reclutamiento, uso ilícito y violencia sexual contra NNA en las comunas descritas.
9. Al Ministerio de Educación Nacional y al ICBF, hacer presencia en las zonas descritas y afectadas del municipio de Santiago de Cali, a fin de identificar de manera detallada las vulneraciones y los riesgos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el propósito de adoptar medidas efectivas de prevención y protección de sus derechos fundamentales.
10. A las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, se recomienda diseñar y ejecutar operaciones de registro y control permanente, para contrarrestar la acción violenta de los grupos armados al margen de la ley que afectan a los pobladores de las zonas descritas en amenaza en el municipio de Santiago de Cali, tendientes a garantizar los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y la libre movilidad de la población civil entre otros. Procurar en conjunto con la administración municipal, un plan desarme en las comunas afectadas.
11. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá ser allegada según lo estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992, en concordancia con el Decreto 2124 - 17 a los siguientes datos de contacto:

- Correo electrónico institucional: jeguzman@defensoria.gov.co y fegaitan@defensoria.gov.co
- Dirección postal: Carrera 9 N° 16-21 Bogotá D.C., Código postal: 110321 Defensoría del Pueblo.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo

Revisó y Aprobó: Mauricio Redondo Valencia
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de DDHH y DIH
Archivado en: Alertas Tempranas 2018
Consecutivo Dependencia: 404001-1410-18

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 19 (2010) – OFICINA JURÍDICA –

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
1. Denominación:	Profesional Especializado
2. Tipo Cargo:	Administrativo
3. Código Cargo:	2010
4. Grado del Cargo:	19
5. Ubicación Organizacional:	Central
6. Nivel del cargo:	Profesional
7. Ubicación Funcional:	10 Despacho del Defensor del Pueblo
8. Dependencia:	1050 Oficina Jurídica
9. Área:	1050 Oficina Jurídica
10. Sub área:	No aplica
11. Cargo del Jefe:	Jefe de Oficina
II. PROPÓSITO PRINCIPAL	
<p>Diseñar, controlar y ejecutar planes, programas y proyectos propios de la gestión jurídica y administrativa de la Oficina con el fin de mantener la unidad jurídica en la aplicación de la interpretación de la Ley y garantizar el cumplimiento de la misión, las metas, políticas y objetivos institucionales.</p>	
III. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES	
<p>Hacen parte de éste perfil las funciones generales para todos los servidores de la Defensoría del Pueblo y las correspondientes con el nivel del cargo establecidas en ésta Resolución y las siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Proyectar las respuestas de las solicitudes de conceptos, derechos de petición y /o solicitudes sobre asuntos jurídicos a que haya lugar con el fin de mantener la unidad de criterio jurídico en la Entidad.2. Proyectar las respuestas de las solicitudes de conceptos, derechos de petición y /o solicitudes sobre asuntos propios administrativos de la Oficina.3. Liderar la formulación, sostenimiento, monitoreo y evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional.4. Liderar la formulación y seguimiento en el tema de la Planeación Estratégica de la Oficina.5. Estructurar los lineamientos para el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.6. Realizar seguimiento y medición a los procesos que desarrolla la Oficina.7. Realizar seguimiento a los riesgos aplicables a los procesos que desarrolla la Oficina.8. Ejercer previo otorgamiento de poder, la representación judicial en los procesos ejecutivos en los que sea parte la Entidad.9. Responder las tutelas que se asignen por reparto.10. Proyectar conceptos que le competan a la Oficina.11. Orientar a las dependencias de la Entidad en lo relativo a los trámites propios que desarrolla la Oficina.12. Proyectar y revisar los actos administrativos que se generen en el ejercicio de las funciones.13. Realizar análisis jurídicos, estadísticas y estudios administrativos que sean asignados	

por autoridad competente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Dentro del marco jurídico constitucional, legal e institucional siguiendo los lineamientos exigidos por la Entidad.
2. Siguiendo las instrucciones del Jefe de Oficina o autoridad competente y dentro del marco de un plan determinado.
3. De conformidad con la normatividad vigente.
4. Siguiendo los procesos y procedimientos establecidos para tal fin.
5. Atendiendo instrucciones del Jefe inmediato y dentro del marco legal y reglamentario.
6. De conformidad con los lineamientos institucionales establecidos.
7. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Oficina para el seguimiento y el control.
8. Atendiendo las instrucciones establecidas para tal fin.
9. De acuerdo con los procedimientos establecidos.
10. Siguiendo los parámetros y directrices del Jefe Inmediato y de conformidad con la constitución y la Ley.
11. De conformidad con los lineamientos del Jefe Inmediato y dentro del marco jurídico en cada caso.
12. Teniendo en cuenta las normas establecidas de técnica jurídica y las instrucciones del Jefe inmediato.
13. Oportunamente y con información suficiente y veraz.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. **POLÍTICAS – ESTADO:** Constitución Política, organización del estado, políticas públicas, normas de contratación pública, Código Disciplinario Único.
2. **MISIONALES INSTITUCIONALES:** Estructura organizacional y funcional de la Entidad, Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
3. **PROCESOS ADMINISTRATIVOS – FUNCIONALES:** Planeación estratégica, procedimiento administrativo, formulación, evaluación y gerencia de proyectos, planeación, procesos y procedimientos, manejo y elaboración de indicadores, análisis de información, Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas, ofimática, contratación estatal y procesos jurídicos.
4. **COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES:** Aprendizaje continuo, experticia profesional, trabajo en equipo y colaboración, creatividad e innovación.

VI. RANGOS DE APLICACIÓN

Entidades públicas del nivel nacional, territorial o cualquier oficina en representación del Estado en el exterior.
Clases. Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual).
Categoría. Información.
Clases. Escrita, digital, verbal, presencial.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

1. Título profesional en Derecho y tarjeta profesional.
2. Título de Postgrado en áreas relacionadas con las funciones a desempeñar.

3. Tres (3) años de experiencia relacionada con las funciones a desempeñar.

NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15

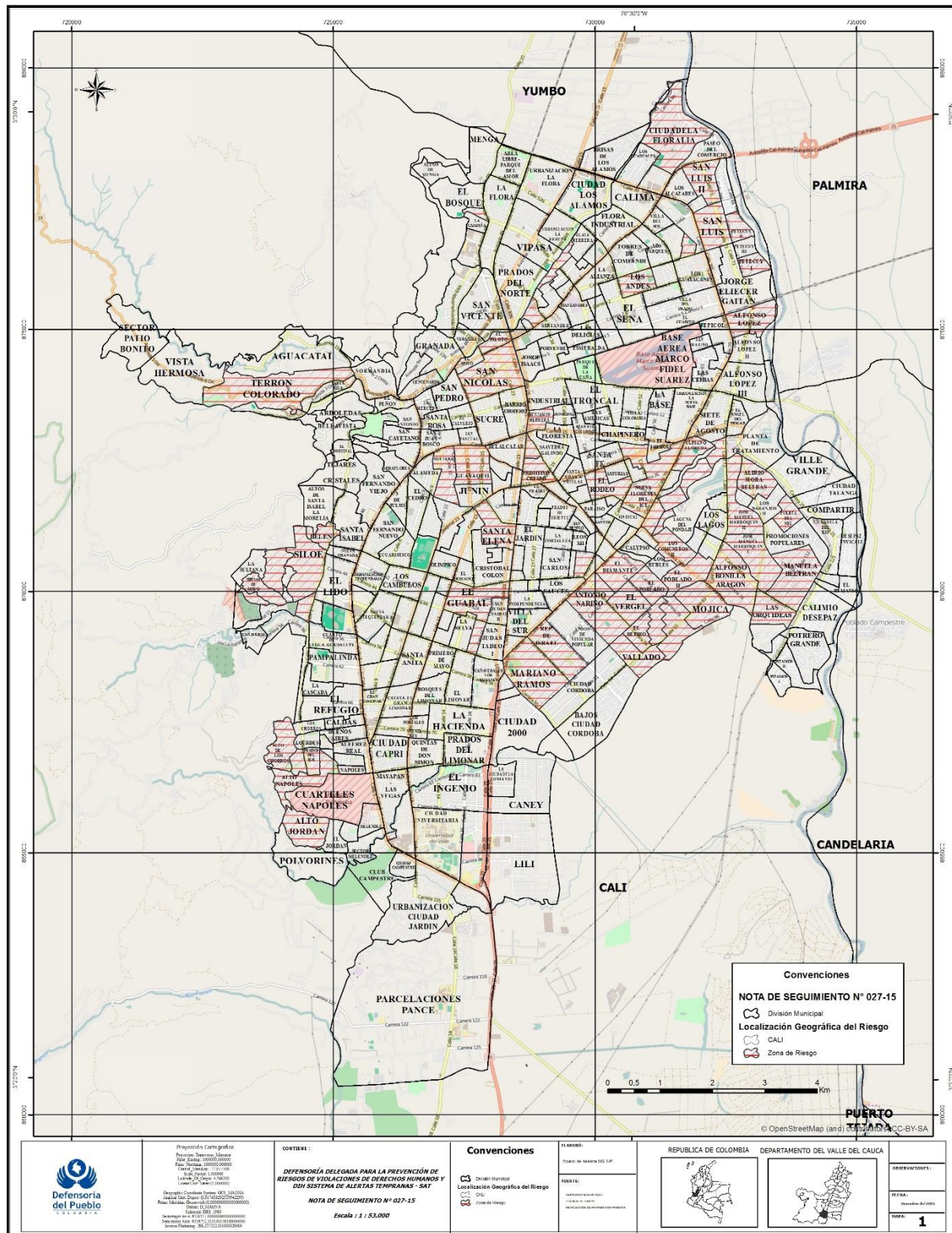
Primera al Informe de Riesgo N° 002-14

Emitido el 4 de febrero de 2014

Fecha: 3 de diciembre de 2015

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana	
		Comuna	Barrio
VALLE DEL CAUCA	Santiago de Cali	1	Terrón Colorado.
		3	San Nicolás, El Piloto.
		4	La Isla, Berlín, Tomas Uribe.
		5	Chiminangos I etapa, Brisas del Valladito, Brisas de las Palmas y Brisas de Haití, Villa del Prado, Los Andes.
		6	Floralia, Petecuy I y II etapa, San Luis, San Luis II.
		7	Alfonso López I, Puerto Nuevo
		8	Benjamín Herrera, Primitivo Crespo, Simón Bolívar.
		9	Bretaña, Guayaquil.
		10	Santa Elena, El Guabal, Las Granjas.
		11	Primavera.
		12	El Rodeo, Nueva Floresta, Villanueva
		13	El Vergel, Poblado I y II, Charco Azul, El Pondaje, Sardi, Villa del Lago, Villa Blanca, Ulpiano Lloreda y Ricardo Balcázar, El Diamante, Comuneros II, La Florida, La Paz, Playa Alta, La Casona.
		14	Manuela Beltrán, Marroquín I y II, Puerta del Sol,, Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Villa San Marcos, Alirio Mora Beltrán.
		15	El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas, El Retiro, Mojica, Llano Verde, Invasión Valladito, Laureano Gómez, Comuneros I.
		16	Mariano Ramos, Antonio Nariño, República de Israel
		18	Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros, Alto Nápoles, Alto Jordán.
		20	Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo, Altos de Belén, Pueblo Joven.
		21	Píizamos I, II y III, Potrero Grande, Sol de Oriente Calimio, Desepaz Ciudadela del Río, Invicali, Villa Mercedes, Tercer Milenio, Barrio Taller.



RESPUESTA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALERTAS TEMPRANAS – CIAT

IR/NS	FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT	RESPUESTA
Informe de Riesgo N° 002-14	Febrero 12 de 2014	Alerta Temprana

ACTUALIZACIÓN DEL RIESGO

En el seguimiento a la situación de los derechos humanos de la ciudad de Cali, advertida en el informe de riesgo 002-14 del 04 de febrero de 2014, se ha identificado la persistencia de los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población civil, por la influencia de los grupos ilegales que se autodenominan Los Gaitanistas o Urabeños y Los Rastrojos, que mediante la cooptación de estructuras locales ejercen la violencia sobre los habitantes de los barrios de 18 comunas.

No obstante las medidas adoptadas por las autoridades civiles y la Fuerza Pública para prevenir y mitigar la vulneración de los derechos fundamentales de la población, que habita en la zona identificada en riesgo, los hechos de violencia continúan y se debe principalmente a las acciones de las bandas delincuenciales de carácter local que actúan a nombre de Los Gaitanistas/Urabeños o Los Rastrojos, que vienen causando homicidios selectivos, amenazas contra los líderes y lideresas que se oponen a sus pretensiones o denuncian sus hechos delictivos; actos de violencia sexual como ejercicio de control en los barrios y comunas; extorsiones, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas adolescentes y jóvenes, restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) y desplazamientos forzados intraurbanos.

La acción de las autoridades y los presuntos acuerdos entre las agrupaciones ilegales, ha implicado un reacomodamiento de estos para evitar la persecución de las autoridades, establecer nuevas formas de ocultamiento y definir la distribución de territorios para el aprovechamiento de las rentas ilegales.

En los barrios El Vergel, Charco Azul, entre otros de la Comuna 13, donde los enfrentamientos por el control de las “fronteras invisibles” eran frecuentes, los vecinos pueden ahora movilizarse sin mayores restricciones de un barrio a otro sin temer un ataque con arma de fuego por el solo hecho de vivir en un sector diferente.

De igual manera, en los grupos ilegales se presentan reacomodamientos (ubicación en nuevos barrios y/o comunas), fusiones (agrupación de varias pandillas), recomposiciones (reclutar nuevos integrantes), y cambios de bando (grupos o individuos que estaban con Los Rastrojos y pasan a ser de Los Urabeños y viceversa). En la Comuna 5, en el barrio Brisas de Comuneros, hombres que hacen parte de “Los Haitianos” estarían presionando a adolescentes del sector para reclutarlos o utilizarlos de forma forzada para recomponerse y continuar la alianza con Los Rastrojos.

Por su parte, los autodenominados Gaitanistas o Urabeños estarían haciendo lo mismo en los asentamientos Brisas del Valladito, Brisas de las Palmas y Brisas de Haití. Líderes comunitarios han

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 4 de 20

manifestado que objeto de presión y amenazas para que entreguen las listas con los nombres de los menores de 14 años de edad. Estos mismos grupos continúan en estos barrios con las extorsiones contra los pequeños propietarios de negocios y viviendas, quienes deben pagar \$2.000 pesos semanales bajo una supuesta “cuota de seguridad.”

En la comuna 6 en los barrios Petecuy I y II, los operativos de la Policía Nacional permitieron la captura de varias personas sindicadas de pertenecer a la banda de “Los Buenaventureños” (adscritos a Los Gaitanistas o Urabeños), quienes permanecieron en confrontación con “Los del Humo”, “Los de la Torre” y “Los de Petecuy III (adscritos a Los Rastrojos). Con la desarticulación de “Los Buenaventureños” el espacio fue ocupado por los otros grupos, logrando el control de la zona y consecuentemente una disminución en las acciones violentas contra los habitantes. En esta misma comuna, en el barrio Floralia, el control continuaría por cuenta de grupos adscritos a Los Rastrojos.

Actualización del escenario de riesgo.

En el barrio Potrero Grande de la comuna 21, la situación de amenazas, extorsiones, tráfico de estupefacientes, despojo de viviendas, entre otras agresiones, es producto del control territorial y las disputas entre pandillas y grupos delincuenciales en los distintos sectores (el barrio se encuentra dividido en 12 sectores que comprenden calles y pasadizos). Estas confrontaciones determinan las “fronteras invisibles” en las que los habitantes de un sector no pueden pasar o cruzar, pues se exponen a las retaliaciones y a los atentados contra la vida.

El 9 de noviembre de 2015, en horas de la madrugada, se produjo un hecho violento promovido por la pandilla conocida como “Los del Punto” que causo el homicidio de la señora Deyanira Henao Dagua de 43 años y madre de 5 hijos y, además, dejó como resultado una persona herida, casas abandonadas y saqueadas, así como daños materiales en las viviendas del sector 5 de Potrero Grande, poco después que la patrulla móvil de la policía del sector abandonó la esquina del barrio.

Ese día un grupo de aproximadamente 20 jóvenes gritaron “mañana se me van todos, esto ya es nuestro” y empezaron a romper vidrios, a tumbar puertas y saquear las casas. Esta situación un enfrentamiento entre pandillas del sector 5 y 6. En el censo que levantó la comunidad se estableció que 40 viviendas resultaron afectadas. En septiembre de 2015 se registró un hecho similar donde resultaron afectadas 33 casas.

Los líderes comunitarios del barrio Llano Verde han manifestado la existencia de los mismos problemas sociales y de vulnerabilidad que se presentaron durante la conformación del barrio Potrero Grande, donde se entregaron viviendas a los habitantes de distintos asentamientos subnormales sin evaluar previamente los conflictos subyacentes y la existencia de pandillas en los mismos sectores, calles y pasadizos, lo que produce permanentes situaciones de tensión que sirven a los intereses de los grupos armados ilegales que se constituyen en fuente de exacerbación de la violencia al implantar actividades ilegales como el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes, el homicidio en la modalidad de sicariato, la extorsión,

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 5 de 20

entre otros (actividades que en algunos casos es una fuente de ingresos para las familias que habitan esos barrios).

En Llano Verde, Los Rastrojos habrían cooptado varias pandillas para ocultar elementos ilegales y resguardarse manteniendo un bajo perfil. “Los Urabeños” también estarían haciendo lo mismo en este barrio, pero sin generar enfrentamientos para evitar la acción de las autoridades. Personas que presuntamente fueron cercanas a la banda “Los Buenaventureños” que llegaron del barrio Petecuy estarían en un proceso de reagrupamiento en este lugar.

En la comuna 13, en el barrio Charco Azul, Sardi, Villa del Lago, el Pondaje, Villa Blanca, Ulpiano Lloreda y Ricardo Balcázar, los autodenominados “Los Urabeños” tienen la hegemonía en la venta de alucinógenos, el cobro de extorsiones a los comerciantes y el manejo de las redes de prostitución. De forma adyacente, imponen formas de control social y de conducta, cuando se presentan problemas de convivencia, hurtos o riñas, los habitantes acuden a ellos para resolverlos.

En los sectores de ladera en las comunas 1 y 20 entre el barrio Lleras y el sector de Tierra Blanca continúan las disputas entre los grupos como “La Estrella” y “Los Briñes”, también asociados a Los Rastrojos y Los Urabeños.

Al cruzar las conductas de mayor impacto en la ciudad de Cali (homicidios, desapariciones, extorsiones, amenazas, etc.) y la influencia de los grupos armados ilegales, las comunas y barrios más afectados por hechos de violencia en 2014 y 2015, son:

COMUNA	BARRIO
1	Terrón Colorado.
3	San Nicolás, El Piloto.
4	La Isla, Berlín, Tomás Uribe.
5	Brisas del Valladito, Brisas de las Palmas y Brisas de Haití, Villa del Prado, Los Andes.
6	Petecuy I y II, Floralia.
7	Alfonso López I, Puerto Nuevo.
8	Benjamín Herrera, Primitivo Crespo, Simón Bolívar.
9	Bretaña, Guayaquil.
10	El Guabal, Santa Elena, Las Granjas.
11	Primavera.
12	Villanueva.
13	El Vergel, Charco Azul, Sardi, Villa del Lago, El Pondaje, Villa Blanca, Ulpiano Lloreda y Ricardo Balcázar, Poblado II, El Diamante, Comuneros II, La Florida, La Paz, Playa Alta, Cinta Larga, La Casona.
14	Marroquín I, Marroquín II, Puerta del Sol, Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquideas, Villa San Marcos, Alirio Mora Beltrán.
15	El Vallado, Mojica, Llano Verde, Brisas de Comuneros, Invasión Valladito, Laureano Gómez, El Retiro, Comuneros I
16	Antonio Nariño, Mariano Ramos, República de Israel.
18	Alto Jordán.
20	Siloé, Lleras Camargo, Belén, Pueblo Joven.
21	Potrero Grande Sol de Oriente Calimio, Desepaz Ciudadela del Río, Inivali, Villa Mercedes, Tercer Milenio, Pizamos I, Pizamos II, Pizamos III, Barrio Taller.

Homicidios y desaparición forzada.

De acuerdo con el Informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2013 en Cali se presentaron 1.989 casos de homicidio (1.858 hombres y 130 mujeres) con una tasa por cada cien mil habitantes (tpch) de 85,74. En el año 2014 se registraron 1.605 homicidios (1.504 hombres y 101 mujeres) con una tpch de 68,45, que si bien es cierto es un número de casos menor en relación con la cifra de 2013, fue la ciudad del país con el mayor número de homicidios, superando a Medellín (658 casos) y a Barranquilla (355) que ocupó el tercer lugar.

Según el Comité Interinstitucional de Hechos Violentos (CIHV)¹, aunque entre 2013 y 2014 se presentó una reducción de los homicidios en buena parte de las comunas, en otras se registró un incremento, como es el caso de las comunas 2, 5, 9, 19 y 22. De manera general, a las pandillas (en su mayoría asociadas a Los Rastrojos y Los Urabeños) se les señala de haber cometido 398 de los homicidios en 2014; 06 casos fueron por balas perdidas; 19 atribuidos a “ajustes de cuentas”; 434 con o sin antecedentes de amenazas o atentados; 31 por disparos en contextos delincuenciales; y 185 cuyos móviles están por establecer.

En el año 2014, los homicidios contra las mujeres ocurrieron en 70 barrios de 20 comunas (exceptuando la 5 y 16) como se muestra en el siguiente cuadro:

Comuna	Barrio
1	Alto Aguacatal – Terrón Colorado
2	Brisas de los Álamos
3	San Antonio – San Juan Bosco – San Pedro – San Nicolás
4	Jorge Isaac
6	Petecuy I y II – Ciudadela Floralia – Los Guadales
7	Alfonso López III – Puerto Mallarino – Siete de Agosto
8	Las Américas - Industrial
9	Obrero – Sucre – Aranjuez
10	San Judas Tadeo I
11	La Esperanza – El Jardín – San Pedro Claver
12	El Rodeo – Nueva Floresta
13	El Vergel – El Diamante – Los Comuneros II – Rodrigo Lara Bonilla – Los Robles – Charco Azul – El Poblado I y II
14	Las Orquídeas – José Manuel Marroquín II – Alirio Mora Beltrán – Puertas del Sol – Alfonso Bonilla Aragón – Los Naranjos I – Manuela Beltrán
15	El Retiro – Laureano Gómez – Los Comuneros I – Mojica – Ciudad Córdoba
17	Mayapan – Las Vegas – Lili – El Ingenio
18	Sector Alto Los Chorros
19	El Cedro – Camino Real-J. Borrero – Sector Bosque Municipal
20	Siloé – Belén – Lleras Camargo

¹ El Comité que se encuentra conformado por las siguientes instituciones: Policía, Medicina Legal, Secretaría de Gobierno, Ejército, Personería y Fiscalía.

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 7 de 20

Comuna	Barrio
21	Potrero Grande – Pízamos I – Ciudad Talanga – Calimio Desepaz – Ciudadela del Río
22	Parcelaciones de Pance – Urbanización Ciudad Jardín
S/I	Las Veraneras – vía la Buitrera – Cañaveralejo – Quintas del Sol – Remansos de Comfandi – Asentamiento Brisas de Comuneros

Homicidios de mujeres en barrios de Cali – 2014
 Elaboración de la Defensoría del Pueblo con información de SIJIN-MECAL

Los homicidios de menores de edad en 2014 ocurrieron en 81 barrios de 19 comunas (exceptuando las comunas 4, 17 y 22) - elaborado con información de la SIJIN-MECAL.

Comuna	Barrio
1	Terrón Colorado
2	Altos de Menga – Brisas de los Álamos
3	San Pedro – El Calvario
5	Metropolitano del Norte
6	San Luis II – Tejares de Salomia – Urbanización Calimio – San Luis I – Ciudadela Floralia – Solares de Comfandi – Petecuy II – Los Alcázares
7	Alfonso López II – Puerto Mallarino
8	La Floresta
9	Obrero – Sucre
10	Santa Elena – El Guabal
11	La Esperanza – Aguablanca – Los Conquistadores
12	Sindical – El Rodeo – Eduardo Santos – Bello Horizonte – Nueva Floresta – 12 de Octubre
13	Invasión Cinta Sardi – Ricardo Balcázar – El Poblado II – Diamante – El Vergel – Invasión Cinta Belisario – Ulpiano Lloreda – Villa Blanca – Laguna El Pondaje – Los Lagos – Omar Torrijos – Los Robles
14	José Manuel Marroquín II – Manuela Beltrán – Marroquín I – Los Naranjos – Alfonso Bonilla Aragón – Las Orquídeas – Alirio Mora Beltrán – Quintas del Sol – Villa San Marcos – Invasión 9 de Enero
15	Los Comuneros I – Vallado – Mojica II – Mojica – Laureano Gómez – Morichal de Comfandi – Ciudad Córdoba – El Retiro – Llano Verde – Invasión Brisas de Comuneros – El Pilar
16	Antonio Nariño – Mariano Ramos – Unión de Vivienda Popular – República de Israel – Brisas del Limonar
18	Polvorines – El Jordán – Las Palmas – Mario Correa Rengifo
19	Santa Isabel
20	Siloé – Brisas de Mayo – Belén – Tierra Blanca – Pueblo Joven – Lleras Camargo – El Cortijo
21	Potrero Grande – Valle Grande – Talanga III – Tercer Milenio – Sol de Oriente – Pízamos – Pízamos III-Las Dalías – Remansos de Comfandi – Calimio Desepaz – Villa Luz

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 8 de 20

Comuna	Barrio
C/gto	Navarro – Montebello – Golondrinas – La Buitrera – Vía La Sirena – Hormiguero

Homicidios de menores de edad en barrios de Cali – 2014
 Elaboración de la Defensoría del Pueblo con información de SIJIN-MECAL

De acuerdo con las cifras de homicidios del CIHV y de la Policía Nacional, en 2014 fueron afectados 271 barrios en Cali.

Para el año 2015, según el Instituto Nacional de Medicina Legal (datos por consolidar a 31 de junio de 2015), en el Valle del Cauca se han presentado 1.656 homicidios y en la ciudad de Cali, de manera particular, se ha registrado el mayor número de casos con 906 homicidios. De acuerdo con la CIHV la mayoría de los casos ocurrieron en las siguientes comunas y barrios (216 en total):

Comuna	Barrio
1	Aguacatal – Palermo – Terrón Colorado – Vista Hermosa
2	Altos de Menga – El Bosque – Granada – Menga – Normandía – San Vicente – Sector Altos Normandía/Bataclan – Vipasa
3	San Cayetano – San Juan Bosco – San Nicolas – San Pascual – Santa Rosa
4	Bolivariano – Calima – Evaristo García – Guillermo Valencia – Ignacio Rengifo – Invasión Camilo Torres – Jorge Isaac – La Isla – Olaya Herrera – Popular – Salomia
5	Chiminangos I Etapa – Villa del Prado/El Guavito – Villa del Sol
6	Ciudadela Floralia – Jorge E. Gaitán – Los Alcázares – Los Guadales – Paso del Comercio – Petecuy I etapa – Petecuy II etapa – Petecuy III etapa – San Luis I – San Luis II
7	Alfonso López I Etapa – Invasión Cali Bella – Las Ceibas – Puerto Mallarino – Puerto Nuevo – San Marino – Siete de Agosto
8	Atanasio Girardot – Benjamín Herrera – El Troncal – La Base – La Floresta – La Fortaleza – Primitivo Crespo – Rafael Uribe Uribe – Saavedra Galindo – Santa Fe – Simón Bolívar – Sucre – Urbanización La Base – Villa Colombia
9	Alameda – Obrero – Belalcázar – Bretaña – Guayaquil – Junín
10	Colseguros Andes – Departamental – El Guabal – Las Acacias – Panamericano – San Cristóbal – San Judas Tadeo I – San Judas Tadeo II – Santa Elena – Santo Domingo
11	20 de julio – El Jardín – José Holguín Garcés – La Gran Colombia – La Independencia – León XIII – Primavera – San Benito – San Carlos – San Pedro Claver
12	Alfonso Barberena – Asturias – Bello Horizonte – Doce de Octubre – Eduardo Santos – El Paraíso – El Pondaje – El Rodeo – Julio Rincón – Nueva Floresta – Sindical – Villanueva
13	Charco Azul – Cinta Sardi – El Diamante – El Poblado I – El Poblado II – El Vergel – Invasión La Florida – Los Comuneros II etapa – Los Lagos – Los Robles – Omar

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 9 de 20

Comuna	Barrio
	Torrijos – Ricardo Balcázar – Sector Aprosocio/Diamante (La Paz) – Ulpiano Lloreda – Villa del Lago -
14	Alfonso Bonilla Aragón – Alirio Mora Beltrán – José M. Marroquín I etapa – José M. Marroquín II etapa – Las Naranjos II – Las Orquídeas – Los Naranjos I – Manuela Beltrán – Nueve de Enero – Promociones Populares B – Puerta del Sol – Villa San Marcos
15	Bajos de Ciudad Córdoba – Ciudad Córdoba – El Retiro – El Vallado – Invasión Brisas de Comuneros – Invasión Valladito – Laureano Gómez – Los Comuneros I etapa – Mojica – Llano Verde
16	Antonio Nariño – Brisas del Limonar – Ciudad 2000 – Mariano Ramos – República de Israel – Unión de Vivienda Popular
17	Bosques de el Limonar – Caney – Cañaverales – Ciudad Capri – Ciudadela Comfandi – El Limonar – La Playa – Prados del Limonar – Primero de Mayo
18	Alto Meléndez Polvorines – El Jordán – Invasión Las Palmas – Los Chorros – Lourdes – Meléndez – Prados del Sur – Sector Alto Jordán – Urbanización Santa Elena – Invasión Las Palmas
19	El Mortiñal – Eucarístico – Los Cambulos – Pampa Linda – San Fernando Viejo – San Fernando Nuevo – Santa Isabel – Sector Bosque Municipal – Unidad Residencial El Coliseo – Urbanización Militar – Urbanización Nueva Granada
20	Belén – Belisario Caicedo – Brisas de Mayo – El Cortijo – Lleras Camargo – Parcelación Mónaco La Sultana – Pueblo Joven – Siloé – Tierra Blanca – Villa Catalina
21	Calimio Desepaz – Ciudad Talanga – Ciudadela del Río CVC – Compartir – Desepaz Invicali – El Remanso – Píamos I – Píamos II – Potrero Grande – Sol de Oriente – Tercer Milenio – Valle Grande – Villa Mercedes I
22	Parcelaciones Pance – Urbanización Río Lili
S/I	Cerro Cristo Rey – Lares de Comfenalco – Planta de Tratamiento – Unidad Residencial El Morichal Comfandi – Urbanización Santa Bárbara – Urbanización Boyacá – Urbanización Calimio – Venezuela Urbanización Cañaveralejo – Invasión Quintas del Sol - La Reforma

Homicidios en barrios de Cali – 01 de enero a 30 de junio de 2015

Elaboración de la Defensoría del Pueblo con información del Comité Interinstitucional de Hechos Violentos (CIHV)

Entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 se presentaron tres casos de homicidio con características de sevicia: el 26 de diciembre de 2014, en el sector de Calimio Desepaz (comuna 21) fue encontrado en un envoltorio plástico el cuerpo desmembrado de Laura Natalia Zamora, de 19 años; el 11 de enero de 2015, un hombre sin identificar fue hallado desmembrado en el barrio Ciudadela del Río (comuna 21); el 16 de febrero de 2015 en inmediaciones del barrio Benjamín Herrera (comuna 8) al parecer fue arrojado desde un automotor el cuerpo incinerado de una persona sin identificar.

Entre otras víctimas de homicidios se encuentran las personas socialmente estigmatizadas, como habitantes de calle y personas con orientación sexual e identidad de género diversa que ejercen la prostitución en la ciudad. Entre enero y febrero de 2015 se presentó el homicidio de cuatro habitantes de

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 10 de 20

calle, tres de ellos en el barrio Primitivo Crespo: El 10 de febrero fueron asesinados con arma de fuego el señor Paulo Hernán Quiñónez y otra persona sin identificar que lo acompañaba y el 17 de febrero, fue asesinada con arma de fuego otra persona habitante de calle sin identificar.

En julio de 2015 la organización Santamaría Fundación denunció homicidios y agresiones en contra de personas transexuales. Señalaron varios casos de homicidios que son objeto de investigación por parte de las autoridades, pero que la organización atribuye a persecución y “limpieza” en contra de este grupo social. Los homicidios se presentaron el 05 de julio cuando fueron asesinadas dos personas trans y otra fue herida, el primer hecho ocurrido en el barrio San Nicolás cuando una de ellas fue encontrada con impactos de arma de fuego, en un segundo hecho dos personas más de esta comunidad fueron atacadas con arma blanca en la calle 8 con carrera 6 en el sector “El Pecado”, resultando una asesinada y otra herida. Señala Santamaría Fundación que la población LGBTI es objeto de amenazas, retaliaciones y homofobia por su condición sexual en los lugares donde ejercen su trabajo sexual como en el Cementerio Metropolitano del Norte, en la Glorieta de López, en La Rivera y en la carrera 8 con avenida Ciudad de Cali. Las amenazas y ataques han sido presuntamente cometidas por pandillas locales que son instrumentalizadas por grupos armados ilegales.

El asesinato de mujeres y la violencia sexual basada en género es una situación de riesgo que persiste. Las pandillas y los grupos armados ilegales obligan a las mujeres a mantener relaciones sentimentales o sexuales bajo amenaza. En los barrios El Vallado, Desepaz, Potrero Grande o Llano Verde esos crímenes no se denuncian y se ocultan, pues quedan bajo el rótulo de “venganzas” o “ajustes de cuentas”. Las mujeres que son pretendidas por comandantes de Los Rastrojos o Los Urabeños por su actividad laboral de modelaje, por ser atractivas o porque tienen relaciones afectivas con sujetos de esas estructuras, pueden ser víctimas de retaliaciones por parte de uno u otro grupo ilegal.

En el tema de desaparición, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC)², en 2014 se presentaron 207 denuncias. De ellos 71 fueron hombres de los cuales 31 aparecieron con vida y 02 muertos, 136 mujeres de las cuales 46 aparecieron con vida y 07 muertas. 66 de los casos eran de menores de edad, de los cuales 32 aparecieron vivos. A julio de 2015 fueron registrados 04 casos ocurridos en los barrios Bretaña, Petecuy I, Poblado II y La Granja, en 01 caso apareció con vida la persona y en 01 caso muerta.

Extorsión, contribuciones arbitrarias y secuestro

En los barrios populares, y en condiciones de vulnerabilidad, las contribuciones arbitrarias son “cuotas” impuestas por “prestar seguridad”, por ser propietario de una vivienda, por tener un local comercial; Incluso, las exigencias se han extendido para preservar la vida, es decir, pagar para no ser víctima de acciones contra la vida y la integridad; para poder movilizarse, esto es, para poder ir entre barrios o para cruzar calles o sectores. Quienes se oponen a las exigencias de la banda, grupo ilegal o pandilla deben desplazarse forzosamente o incluso son amedrentados, aterrorizados, asesinados o despojados de sus viviendas. Como agravante, los familiares o allegados de las personas que se van o son asesinadas sufren

² Consulta Sirdec el 28/07/15.

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 11 de 20

las retaliaciones de los grupos armados en su nombre, y también pasan a ser presionados y objeto de coacciones de pago.

Los comerciantes, transportadores, profesionales o toda persona que posea un patrimonio económico puede ser objeto de extorsión. El caso de la galería Santa Helena continúa siendo grave. Las personas que llevan a cabo allí sus actividades comerciales continúan siendo víctimas de amenazas y atentados para pagar las exigencias económicas de que son objeto. El 15 de julio de 2015 el señor Arcesio Arango, quien comerciaba con verduras, fue asesinado por sicarios presuntamente por negarse a pagar una extorsión.

A pesar que las autoridades han capturado personas relacionadas con las extorsiones, los delincuentes que permanecen o llegan al sector continúan cobrando “la vacuna” o extorsión no solo a los vendedores, sino también a los distribuidores y transportadores de la galería. Las extorsiones van entre los \$50.000 a los \$150.000 pesos para autorizar o “permitir” la comercialización de los productos. A los propietarios de los camiones les cobran \$25.000 para poder ingresar los vehículos.

Según el Guala de la Policía Cali³, en el año 2014, se registraron 228 casos de extorsiones. A julio de 2015, se habían recibido 184 denuncias por este delito.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es la práctica del “secuestro exprés”, modalidad en la que una persona es privada de su libertad por horas o días mientras los familiares buscan los recursos económicos exigidos, que no son altas sumas de dinero, a fin de lograr la pronta liberación. Según el Guala, en 2014 fueron denunciados 11 casos en los barrios Villa del Prado, El Piloto, Mojica II, La Isla, Alfonso López I, Villa Blanca, El Guabal y el corregimiento Mesitas. En el 2015, de enero a julio, se denunciaron 04 casos de secuestros expres.

Restricciones a la movilidad (fronteras invisibles).

Las “fronteras invisibles” continúan siendo un factor crítico de violaciones de los derechos humanos. A más de las restricciones para moverse en los barrios de las comunas más vulnerables, se generan dificultades a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para acceder a los centros educativos, no se puede visitar a familiares de otros sectores, y se corre el riesgo de ser víctima de un ataque imprevisto si se va de un lugar a otro. En el barrio Potrero Grande los jóvenes no pueden acceder con facilidad a la institución Tecnocentro Cultural Somos Pacífico y los cupos son subutilizados, pues para no ser víctimas de ataques de personas armadas y evadir las “fronteras invisibles”, se ven obligados a realizar grandes recorridos, o los padres no los envían a los centros educativos.

También se ha identificado problemas de “fronteras invisibles” en las calles de los barrios Antonio Nariño, Marroquín I, Marroquín II, Invicali, Siloé, Terrón Colorado (especialmente el sector de Realengo), Lleras Camargo, Altos de Belén, Altos de Santa Elena, en el sector del jarillón del río Cauca, entre otros. De igual

³ Oficio S-2015-00912/GAULA UNAJU 73.8, de 29/07/15. En 2014 capturaron 253 personas por el delito de extorsión y 21 por el delito de secuestro; en 2015 han detenido 153 personas por extorsión y 5 sindicadas de secuestro.

manera, entre los barrios Pízamos I y II, Puertas del Sol y Potrero Grande, Calimío y Desepaz, Calimio/Desepaz y Potrero Grande, Manuela Beltrán y Bonilla Aragón, Antonio Nariño y El Vergel, Mariano Ramos y República de Israel, asentamiento Villa Mercedes (ubicado en la parte de atrás de Pízamos III) y Las Orquídeas, principalmente.

Amenazas.

Los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal (JAC) son los principales pobladores que sufren las intimidaciones, presiones y amenazas por parte de las pandillas y grupos delincuenciales asociados con Los Rastrojos y Los Gaitanistas o Urabeños. Líderes comunitarios de los barrios Llano Verde, El Diamante y El Pondaje se han visto obligados a desplazarse por las amenazas y agresiones de los grupos ilegales. El caso más grave, fue el homicidio de la señora Ana Agudelo, presidenta de la junta del barrio El Pondaje ocurrido el 26 de marzo de 2014. Debido a los actos de violencia, los líderes sociales se abstienen de formular las denuncias ante las autoridades, por lo que logran hacerse menos visibles o salen de los barrios para preservar su vida e integridad. En muchos de los casos las personas terminan renunciando a los cargos directivos de las JAC para no exponerse a sufrir las agresiones de los grupos ilegales.

En el asentamiento Brisas de Comuneros, en diciembre de 2014, se presentó un caso de tortura contra un líder comunitario que fue secuestrado por una pandilla durante dos días, quienes le golpearon sus manos para que suministrara información de otros grupos armados en el sector. La persona afectada se abstuvo de denunciar por temor a que él u otras personas de su familia fueran agredidos.

Las amenazas y presiones, que se han extendido a otros barrios, se profieren mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos, contra los líderes comunitarios, representantes de víctimas e incluso sindicalistas, especialmente, en barrios al oriente de la ciudad. Los escritos amenazantes tienen emblemas de “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” o llevan el nombre de “Los Urabeños”.

En diciembre de 2014 circuló un panfleto en el barrio Poblado II en el que se amenazaba a 24 personas que fueron identificadas con apodos, firmado por el presunto grupo ilegal Los Gaitanistas o Urabeños”, en el que se anunciaba la realización de una supuesta mal llamada “limpieza social” contra quienes “afectan el entorno, la seguridad y la tranquilidad”. En marzo de 2015 se difundió otro panfleto de similares características en el oriente de Cali en el que se amenazaba a los conductores que portaran equipos de comunicaciones, a las personas que brindaran información a las autoridades o que procedieran de otros municipios del departamento, como Buenaventura, dándoles un plazo de 24 horas para que abandonen la ciudad. En el barrio Llano Verde también circuló un panfleto firmado por Los Rastrojos en el que amenazan a los líderes comunales y los señalan de informantes.

Algunas lideresas⁴ del barrio Llano Verde han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por grupos al margen de la ley bajo distintas modalidades (amenazas directas, panfletos, mensajes de texto,

⁴ Los casos han sido puesto en conocimiento de las autoridades para la activación de los mecanismos institucionales de protección, entre ellas, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno

persecuciones, entre otros), lo que ha generado una situación de temor en el ejercicio de sus liderazgos y dificultades para realizar normalmente su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades que representan.

Desplazamiento forzado.

La mayoría de los desplazamientos forzados que se presentan en la ciudad de Cali por el accionar de los grupos ilegales y de las pandillas son de carácter intraurbano. Los factores de riesgo que comúnmente originan desplazamientos forzados son los siguientes:

- Los asesinatos por oponerse a las pretensiones del actor armado; haber sido testigo de un hecho delictivo o haber denunciado los atropellos de que eran víctimas.
- Las retaliaciones, por tener familiares involucrados en las pandillas; por no pagar las extorsiones; por formular denuncias ante las autoridades; por negarse a las pretensiones de los grupos armados ilegales (reclutamientos y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y, violencia sexual, etc.).
- La imposición de normas de comportamiento: intervención del grupo ilegal en los conflictos propios de las familias y las comunidades; el establecimiento de horarios y límites para el ingreso a los barrios; por multas al no pagar las “cuotas de seguridad” u otras extorsiones; personas que son despojadas de sus bienes (salen desplazadas forzosamente y sus propiedades son arrendadas por grupo armado ilegal).
- El involucramiento bajo amenaza de la población en actividades delictivas (personas obligadas a guardar armamento, estupefacientes o bienes para cometer delitos).
- Por la violencia sexual basada en género contra menores de edad y adolescentes como forma de dominio y control territorial. Menores de edad han sido objeto de actos sexuales abusivos; mujeres adolescentes que son presionadas para tener relaciones afectivas o sexuales con líderes o miembros de las pandillas; niñas y adolescentes que son objeto de retaliaciones como una forma de pretender causar daño a los adversarios.
- Por reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes. Los menores de edad que ya han huido de otras zonas del Valle del Cauca u otros departamentos por el temor a ser reclutados y al llegar a Cali nuevamente son objeto de presiones para ese propósito. Además, de la vinculación bajo amenaza, continúan los ofrecimientos de dinero, participación en reuniones sociales (para el consumo de licor, sustancias psicoactivas y trabajadoras sexuales) y la demostración de poder con armas y bienes suntuosos, para que hagan parte de las actividades delictivas⁵
- Por restricciones a la movilidad y control territorial. Personas que cruzan las “fronteras invisibles”
- Por amenazas y presiones contra líderes sociales y comunitarios.

de Cali, Personería de Cali. Los casos de estas mujeres líderes deben revestir especial atención, pues tienen una historia previa de factores victimizantes por hechos como amenazas, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado, entre otros.

⁵ La Policía de Infancia y Adolescencia de enero a Julio de 2015 ha capturado en Cali a 442 menores en flagrancia por delitos como homicidio; homicidio tentado; lesiones personales; fabricación, tráfico y porte de armas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; violencia contra servidor público; receptación; secuestro; acto sexual con menor de 14 años; asonada, violencia intrafamiliar; hurto en todas sus modalidades; extorsión; daño en bien ajeno, etc.

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 14 de 20

En 2014 personas que sufrieron desplazamiento forzado, de acuerdo con información de la UAO, salieron de los barrios Petecuy, Brisas de Comuneros, Berlín, Comuneros II, asentamiento Playa Alta, Alto Jordán, Montebello, Terrón Colorado, Potrero Grande, asentamiento La Florida, Primavera, Los Andes, Invasión Valladito, Jarillón – Cinta Larga, El Vergel, Laureano Gómez, Manuela Beltrán, El Diamante y Siloé. Los grupos armados referenciados como responsables de los hechos victimizantes son Los Urabeños, Los Rastrojos, “Los Buenaventureños”, “Los de la U”, bandas al servicio de Rastrojos o Urabeños, etc.

La Red Nacional de Información (RNI) con corte a 01 de septiembre de 2015 señaló que en el año 2014 fueron reconocidas como víctimas para la ciudad de Cali por actos terrorista/atentados/combates/hostigamientos 10 personas, por amenazas 474, por delitos contra la libertad y la integridad sexual 5, por desaparición forzada 04 (01 directa y 03 indirectas), desplazamiento 1.692, homicidio 40 (09 directas y 31 indirectas), por pérdida de bienes muebles o inmuebles 14 y por vinculación de niños, niñas y adolescentes 1. En 2015 han sido reconocidas 12 por amenazas, 139 por desplazamientos y 01 por pérdida de bienes muebles o inmuebles.

La Personería de Cali, con corte al mes de julio de 2015 recibió 46 declaraciones (por hechos victimizantes ocurridos en 2015) presuntamente por acción de Los Rastrojos, Los Urabeños, “Los Buenaventureños”, “Águilas Negras”, entre otros. Afectando habitantes de los barrios Potrero Grande, Puertas del Sol, Simón Bolívar, Villa San Marcos, Barrio Taller, La Estrella (Siloé), Tomás Uribe Uribe, Altos de Santa Elena, Puerto Nuevo, Tercer Milenio, Terrón Colorado, Montebello, Llano Verde, Floralia, Ciudad del Campo, Alto Jardín, La Casona, El Retiro, La Paz, Pueblo Joven, Alirio Mora Beltrán, Comuneros, Guayaquil, Mojica, Villanueva y Pízamos I.

Condiciones de vulnerabilidad del barrio Potrero Grande.

El barrio Potrero Grande hace parte de la comuna 21 o Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali y tiene una población aproximada de 30.000 habitantes. Durante los años 2007 y 2008 se construyó y entregó un proyecto de vivienda de más de 4000 viviendas de interés prioritario en Potrero Grande.

En dicho proyecto habitacional fueron reubicadas familias en situación de desplazamiento; las que habitaban en asentamientos subnormales; personas en alta condición de vulnerabilidad social procedentes de Nariño, Cauca, Chocó, Buenaventura y, las que se hallaban en riesgo por desastre natural en el Jarrillón del Río Cauca. En este barrio cohabitan víctimas y victimarios, porque a la población desmovilizada y reinsertada de la guerrilla y de las autodefensas también se les adjudicó casas subsidiadas.

Estas casas fueron construidas en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe con recursos de la nación, el departamento y el municipio, que donó el terreno. Los residentes deben pagar cuotas mensuales bajas.

Las casas del sector 5, entre otros, son de aproximadamente 40 metros cuadrados, de bloque y ladrillo, bastante incomodas y estrechas, que tienen una sola habitación en el segundo piso en obra gris. El promedio de miembros en cada familia varía entre 4 a 10 personas. Algunas casas tienen grietas o daños en la fachada.

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 15 de 20

Este barrio cuenta con una buena infraestructura física (carreteras en buen estado, colegios, servicios públicos domiciliarios y el Tecnocentro), pero carece de una infraestructura social y acompañamiento humanitario.

Hay aproximadamente 2.500 niños y niñas de la primera infancia, pero solo funciona un jardín infantil con capacidad para 350 niños y niñas, luego un número de 2150 niños en esta edad no tienen acceso a servicios de educación. De igual manera acontece con la oferta educativa para los 5.000 adolescentes de este barrio que es insuficiente, pues solo existe una institución educativa que alberga a 1.400 estudiantes. En el barrio Potrero Grande no hay programas de educación superior o técnica.

En el barrio viven aproximadamente 7.000 jóvenes, para quienes no hay oportunidades laborales ni proyectos de generación de empleo.

Los jóvenes se quejan de la estigmatización y discriminación por parte de algunos sectores de la industria y el comercio, toda vez que cuando presentan la hoja de vida para aspirar a un trabajo son rechazados por residir en el barrio Potrero Grande

La población desmovilizada o reinsertada de los grupos ilegales, que no posee trabajo ni se les ha cumplido con los programas de generación de empleo está expuestos al desarrollo de actividades delictivas o han conformado grupos delincuenciales.

Existen conflictos comunitarios a raíz de que las casas construidas en el Gobierno del Presidente Uribe fueron otorgadas con subsidios muy bajos a diferencia de las entregadas en la administración del Presidente Santos donde los subsidios son mayores o pertenecen al programa de viviendas gratuitas.

Las mezclas de poblaciones y culturas procedentes de diferentes zonas ha generado problemas de convivencia y, la presencia de reinsertados de los grupos ilegales ha causado inseguridad en el barrio, como se señaló anteriormente.

La falta de empleo. Los habitantes obtienen los recursos del trabajo informal, del rebusque o de actividades ilegales.

Existen graves problemas de adicción a las drogas alucinógenas por parte de adolescentes y jóvenes; expendio de estupefacientes y extorsión.

Respuesta Institucional

Con respecto a las medidas adoptadas por la Fuerza Pública para mitigar el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos se conocen las siguientes: La Fuerza Pública implementó el *Plan Desarme* de la

FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

Código: DPR - FTO - 07

Versión: última

Página: 16 de 20

Tercera Brigada (contemplado para 16 de las 22 comunas)⁶; el Ejército Nacional ha apoyado a la Policía con patrullajes; se impuso el *toque de queda* para menores de edad después de las 11:00 de la noche⁷, la incorporación de 200 nuevos agentes de policía, el aumento de vehículos para labores de vigilancia (incluidos botes para patrullar el río Cauca), la destinación a la Policía Metropolitana de Cali de \$14.000 millones de pesos para el mejoramiento de su intervención, entre otros.

En los últimos meses el GAULA, la SIJÍN y la DIJÍN han realizado capturas de personas dedicadas al sicariato y otras actividades ilegales en el barrio Potrero Grande.

La alcaldía de Cali avanzó en la implementación de programas sociales destinados a los jóvenes de los sectores vulnerables y en riesgo, mediante el fortalecimiento de colectivos culturales y deportivos, intervención psicosocial para el joven y la familia, programas deportivos, culturales, de emprendimiento, derechos humanos, género y etnia.

Asimismo, se adelanta un proyecto con el *colectivo de ladera* que incluye componentes de cultura, deportes, educación, atención psicosocial y emprendimiento, con él se ha pretendido la desvinculación de combos y pandillas, sin embargo, se requiere fortalecer su financiación en el mediano y largo plazo. En el barrio Siloé de la comuna 20 se ha implementado el proyecto *Calidoso* enfocado en el tema deportivo para mejorar los niveles de integración y convivencia.

La comunidad de Potrero Grande es consciente de la inversión económica realizada por la administración municipal de Cali en dicho barrio, pero los recursos han sido destinados a la construcción de espacios y ejecución de proyectos que no brindan un beneficio directo a la comunidad ni resuelve las necesidades de la población, especialmente de los jóvenes en riesgo por hallarse vinculados a pandillas o a bandas delincuenciales.

El SENA inauguró el 19 de febrero de 2015 en el distrito de Aguablanca, en el barrio El Pondaje, el Centro de Diseño Tecnológico Industrial para brindar la oportunidad de cursar diversas carreras tecnológicas a los jóvenes del sector. Sin embargo, este programa no se ha extendido al barrio Potrero Grande ni Llano Verde, que padece una problemática similar.

A pesar de lo anterior, se requiere fortalecer los esfuerzos institucionales para mitigar las condiciones que favorecen la situación de riesgo y la influencia de los grupos armados ilegales en Cali.

De continuar la situación de violencia en las comunas y barrios vulnerables descritos en la presente Nota de Seguimiento es posible que se materialicen violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH representadas en: homicidios, imposición de normas de conducta por medio de la presión y el terror, amenazas, actos de violencia sexual, cobro de extorsiones, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas

⁶ La medida inició el 13 de diciembre de 2013 para las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21. Prorrogada con la Resolución No.026 del 06/10/15 emanada de la Tercera Brigada con vigencia entre el 06 de octubre de 2015 al 06 de enero de 2016.

⁷ La restricción rige entre las 23:00 y las 05:00 horas del día siguiente y se determinó en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 18 y 21.

adolescentes y jóvenes, restricciones a la movilidad, despojos y saqueos de viviendas e inmuebles y desplazamientos forzados intraurbanos.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con el escenario de riesgo de la presente Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo 002-14 para la ciudad de Santiago de Cali se solicita a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas recomendar al Ministro del Interior mantener la Alerta Temprana. Se reiteran las recomendaciones del Informe de Riesgo y se presentan las siguientes para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los habitantes de los barrios y comunas descritos:

En materia de seguridad:

- Al Ministro de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública (Policía Nacional y Ejército Nacional) con jurisdicción en la ciudad, en coordinación con la alcaldía de Santiago de Cali, fortalecer la presencia de las unidades policiales en los barrios y comunas para incentivar la acción preventiva y de reacción para evitar hechos de violencia y, al Ejército Nacional establecer restricciones al porte de armas en la ciudad de Cali, de manera particular, en las comunas 1, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.
- Al comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, realizar capacitaciones en derechos humanos y resolución de conflicto a las unidades policiales que laboran en las comunas 1, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 con el objetivo de fortalecer la acción legítima del Estado y disminuir las tensiones que puedan existir entre la comunidad y la Fuerza pública.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali, fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de forma articulada con otros programas sociales. De forma particular, formular y destinar recursos para programas de convivencia interbarrial que contribuyan a la desaparición de las “fronteras invisibles”.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, incluir en el presupuesto de 2016 los recursos económicos necesarios para la implementación del Plan de Seguridad en la ciudad, que para 2014 fue estimado en \$49.000 millones de pesos.
- A la Unidad Nacional de Protección, agilizar la gestión para la valoración de la situación de riesgo y medidas de protección de las personas que han manifestado persecuciones y amenazas por parte de grupos armados ilegales, en particular, al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Potrero Grande, a las lideresas del barrio Llano Verde que han denunciado hechos violentos ante las autoridades competentes. De igual manera, velar por el cumplimiento efectivo de las medidas de protección adoptadas, pues personas con esquemas han manifestado que no se facilita la comunicación con la entidad, y personas que trabajan para la misma no reciben sus emolumentos puntualmente, lo que también puede afectar una efectiva protección de los amenazados.

En materia de investigación judicial:

- A la Fiscalía General de la Nación, adoptar estrategias para agilizar las investigaciones de los delitos de mayor impacto en la ciudad, a fin de mejorar el acceso a la justicia y lograr establecer los responsables de las conductas. Se recomienda de manera particular aumentar el número de Fiscales de las Unidades de Vida, Derechos Humanos y Policía Judicial.
- A la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con los grupos antiextorsión y antisequestro de la Policía Nacional y Ejército Nacional, agilizar las investigaciones y las acciones en contra de las nuevas modalidades de secuestro “expres”, así como fortalecer las estrategias para promover los mecanismos de denuncia y acompañamiento a las víctimas de extorsiones en todos los niveles sociales. Se recomienda de manera particular fortalecer estas intervenciones en los puntos de comercio y galería Santa Helena.

En materia de fortalecimiento social y mitigación de las condiciones de vulnerabilidad:

- A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, fortalecer las estrategias de intervención social en los barrios y comunas, de manera particular las estrategias de *colectivos*⁸. Líderes comunitarios han manifestado la necesidad de parte del gobierno de la ciudad que cumpla los tiempos de ejecución de los proyectos, facilite y ajuste los trámites que son extensos y dispendiosos, y destine recursos suficientes para que estas políticas públicas puedan desarrollarse en el mediano y largo plazo, contrarrestando con ello la desconfianza de los beneficiarios hacia las entidades y hacia ellos que los promueven. Se recomienda establecer estrategias de diálogo y concertación con las comunidades para mejorar estos programas que son importantes para mitigar la acción de los grupos armados ilegales en barrios y comunas.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, profundizar la inversión social en materia de educación, salud, empleo, cultura y recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de riesgo y promoverles oportunidades de empleo. Se recomienda la destinación de recursos extraordinarios para estas inversiones en los siguientes barrios y comunas: comuna 15: El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas, El Retiro y Mojica; comuna 16: Mariano Ramos; comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto Nápoles; comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén; comuna 21: Pízamos I y II, Potrero Grande y Llano Verde. También fortalecer las intervenciones en las comunas 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali, establecer estrategias para, de forma concertada con las comunidades, identificar las particularidades de los problemas de seguridad y convivencia, a fin de establecer líneas de intervención para mejorar las condiciones de barrios y comunas. Se recomienda prestar especial atención a la conformación de barrios de beneficiarios de proyectos de vivienda para

⁸ Identifican factores de riesgo de población adolescente vulnerable desde perspectivas individuales, familiares, comunitarias y sociales. En la estrategia trabajan las secretarías de la Alcaldía conjuntamente con ONG y organizaciones de base, enfocándose aspectos psicosociales, deportivos, culturales, de emprendimiento, género, etnia y derechos humanos. El primer colectivo se implementó en el oriente de Cali interviniendo las comunas 18, 20, 6, 7, 15, 16 y 3, y en la 21 el barrio Potrero Grande. Desde 2012 han trabajado con cerca de 1.500 jóvenes.

reasentamiento o reubicación, quienes traen conflictos por diversos aspectos sociales (víctimas/victimarios, pandillas/fronteras invisibles, enfrentamientos de grupos armados) y deben ser catalizados antes de su llegada a los nuevos lugares de hábitat. La evidencia argumentada por ciudadanos, comunidades y organizaciones que trabajan con personas vulnerables y víctimas de la violencia como la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali, ha manifestado la continuidad e incluso agravamiento en las condiciones de seguridad en los nuevos espacios territoriales que fueron asignados a familias reasentadas o reubicadas, producto de las disputas entre pandillas y bandas que provenían de sus lugares de origen. Esta situación que puede ser evitada con intervenciones adecuadamente planeadas en nuevos barrios que se creen, así como en los que ya afrontan estos problemas como Potrero Grande y Llano Verde.

- A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), realizar una caracterización de la población con el fin de fortalecer y ampliar los procesos de oferta educativa, capacitación para el trabajo y ubicación laboral para los jóvenes de las comunas 1, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.

En materia de garantía de los derechos de las víctimas:

- A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, convocar al Comité de Justicia Transicional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, diseñar y/o actualizar e implementar planes, programas y proyectos de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas y para que atendiendo lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 4912 de 2011 conformen las mesas territoriales con el fin de coordinar las acciones de la estrategia de prevención.
- A la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para la valoración de las declaraciones de personas que se consideran víctimas por la acción de estos grupos en las ciudad de Cali, tener en cuenta lo establecido en la Sentencia T- 834 de 11 del noviembre de 2014.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali, reiterar la responsabilidad jurídica que le asiste en la caracterización de la población víctima de la ciudad, por lo cual se recomienda, en el marco del Comité de Justicia Transicional para la adopción de medidas sobre la presente Nota de Seguimiento, definir el cronograma para su realización, tomando en cuenta todos los factores establecidos en la Ley. De igual manera, se recomienda profundizar en la identificación de los factores y características del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali, a fin de garantizar los derechos de las víctimas y prevenir hechos futuros, para esta labor se recomienda requerir el apoyo técnico de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.
- A la Alcaldía de Santiago de Cali, capacitar a los funcionarios encargados de la atención a población víctima de la violencia, a fin de garantizar el acceso a sus derechos. Reiterar que es la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas la entidad competente para definir la calidad de víctima de las personas y quienes pueden acceder a los programas del Estado bajo esta condición, no es responsabilidad de la administración local determinar estos aspectos.
- A la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, en el marco de sus competencias disciplinarias y preventivas, hacer el respectivo seguimiento a los casos de protección de personas, líderes comunitarios y sociales, para que las entidades encargadas de garantizar sus derechos fundamentales

lo lleven a término efectivo, en particular, hacer seguimiento a las medidas que se adopten para la protección de las mujeres lideresas del barrio Llano Verde.

- A la Personería de Santiago de Cali, fortalecer el seguimiento a las afectaciones de los barrios y comunas de la ciudad como consecuencia de la acción de grupos armados ilegales, así como las acciones para exigir la respuesta institucional a las víctimas y personas en riesgo de serlo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de Víctimas y sus decretos reglamentarios.

A todas las autoridades civiles concernidas, a la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar periódicamente las actuaciones y medidas derivadas de la presente Nota de Seguimiento y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN

Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de
Violaciones de los Derechos Humanos y DIH
Director del Sistema de Alertas Tempranas – SAT

Elaboró Defensoría del
Pueblo